



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

**Los proyectos constitucionales de la década de 1850: el  
impacto en la sociedad y la organización del estado  
peruano**

**TESIS**

Para optar el Grado Académico de Magíster en Historia

**AUTOR**

José Carlos JIYAGÓN VILLANUEVA

**ASESOR**

Francisco Felipe QUIROZ CHUECA

Lima, Perú

2017



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

## Referencia bibliográfica

---

Jiyagón, J. (2017). *Los proyectos constitucionales de la década de 1850: el impacto en la sociedad y la organización del estado peruano*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

---

490

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DÉCANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POSGRADO

169

**ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  
MAGÍSTER EN HISTORIA**

En Lima, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Post-Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 11:00 a.m., bajo la Presidencia del Dr. ALEJANDRO RAFAEL REYES FLORES y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició la ceremonia invitando al graduando **JOSÉ CARLOS JIYAGON VILLANUEVA** para que hiciera la exposición de la Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Historia. Siendo el trabajo titulado:

**“LOS PROYECTOS CONSTITUCIONALES DE LA DÉCADA DE 1850: EL  
IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO  
PERUANO”**

A continuación fue sometido a las objeciones por parte del Jurado. Terminada esta prueba y verificada la votación; se consignó la calificación correspondiente a:

B 17 (muy bueno)

Por tanto el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Historia, al Bachiller **JOSÉ CARLOS JIYAGON VILLANUEVA**. Siendo las 12:00 a.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Dr. Alejandro Rafael Reyes Flores.  
PRESIDENTE

Mg. Susana Consuelo Aldana Rivera.  
MIEMBRO

Dr. Mario Miguel Meza Bazán.  
MIEMBRO

Dra. Marina Zuloaga Rada.  
MIEMBRO

Dr. Francisco Felipe Quiroz Chueca.

ASESOR



Dr. NICOLÁS JAVIER LYNCH GAMERO  
DIRECTOR

PABELLÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – CIUDAD UNIVERSITARIA

Teléfono: 6197000 Anexo 4003, 4004. Lima – Perú.

Correo: [upgccss@unmsm.edu.pe](mailto:upgccss@unmsm.edu.pe), [upgccss@yahoo.es](mailto:upgccss@yahoo.es), [upgccss@hotmail.com](mailto:upgccss@hotmail.com)

Web: <http://sociales.unmsm.edu.pe/>

**A José (†) y Carmela**  
**por su tiempo, comprensión y cariño**

## **Agradecimientos**

El presente trabajo es fruto de una incansable labor desde mis primeros años en el pregrado de San Marcos, donde una serie de profesores estimularon el deseo de la investigación histórica, que en el Posgrado se vio reforzada y complementada con las enseñanzas de estimados docentes como Cristóbal Aljovín, Fernando Armas, Francisco Quiroz quienes contribuyeron de un modo inapreciable al desarrollo de la investigación histórica.

A mi asesor Francisco Quiroz, cuyos consejos y ayuda desinteresada son inestimables, ya que pude concluir satisfactoriamente tal tarea académica, sus observaciones ayudaron a mejorar la presente investigación.

A mis amigos Marissa Bazán, Francisco Núñez, Antonio Sillau, Miguel Ángel Quispe, Ernesto Hurtado cuyo apoyo y amistad son invalorable, sus consejos fueron gratificantes, permitiéndome con su apoyo seguir adelante y poder culminar esta tesis de maestría.

A mi familia que a pesar de reducirse a un pequeño grupo, estuvo allí para apoyarme con sus palabras: Carmela, Milagros, Akiko, José Ángel, Ángela, Ana, mis más sinceros agradecimientos por haberme tenido paciencia durante estos años.

## **Tabla de contenidos**

<b>Introducción.....</b>	<b>8</b>
 <b>Capítulo I: El liberalismo y el republicanismo en el Perú en la década de 1850.....</b>	 <b>36</b>
1. La búsqueda del orden.....	36
2. La república contra la democracia.....	40
 <b>Capítulo II: 1850, una década de conflictos y constituciones.....</b>	 <b>47</b>
1. El ascenso de los liberales y la Convención Nacional de 1855.....	47
2. El ocaso de la Convención Nacional.....	55
3. La figura de Ramón Castilla, su relación con el poder y la sociedad.....	63
4. El Congreso de 1858 y la lucha constitucional.....	67
 <b>Capítulo III: Las propuestas constitucionales de 1855: el camino a la constitución de 1856 .....</b>	 <b>77</b>
1. Propuestas de cambio constitucional.....	77
2. La crítica a la constitución de 1839.....	79
3. El orden conservador y la soberanía de la inteligencia.....	84
4. La contraofensiva doctrinal liberal: Los debates de 1849 y la organización del liberalismo.....	87
4.1. El liberalismo y Arequipa.....	89
4.2. El liberalismo y su conceptualización a mediados del siglo XIX.....	91
5. Las propuestas a un nuevo orden. El camino al triunfo liberal.....	93
5.1.La importancia del Poder legislativo y la ciudadanía.....	99
5.2.La posición del poder ejecutivo y judicial.....	102
6. La cuestión religiosa un nuevo debate entre liberales y conservadores.....	105

7. La constitución de 1856. Fortalezas y debilidades.....	111
<b>Capítulo IV: La construcción de la Constitución de 1860. Los proyectos y sus planteamientos.....</b>	<b>116</b>
1. La necesidad de reformar la constitución de 1856.....	116
1.1.El descontento de las provincias contra Lima.....	116
1.2.Nuevamente la necesidad del orden.....	118
1.3.Puntos críticos de la constitución de 1856.....	125
2. El proyecto constitucional de Felipe Pardo.....	133
3. El proyecto de Bartolomé Herrera.....	136
3.1. Los poderes del Estado en la concepción de Bartolomé Herrera.....	140
3.2. El ultramontanismo y su repuesta en 1860.....	147
4. El balance de los proyectos de la década de 1850.....	148
<b>Conclusiones.....</b>	<b>153</b>
<b>Lista de referencias.....</b>	<b>160</b>



## Resumen

La presente tesis busca estudiar de qué manera los proyectos Constitucionales de la década de 1850, contribuyeron al proyecto de modernización del Estado Peruano, por parte de sectores intelectuales de la sociedad peruana, que aspiraban a la modernidad del país, que estaba fatigado por las constantes guerras de los caudillos militaristas, que habían desangrado al país, desde sus primeros años de vida de independiente hasta 1845; es durante la década de 1850, donde se empieza a promover una serie de reformas administrativas, jurídicas que contribuyeron al ordenamiento del caótico Estado Peruano, ello incluía la elaboración de proyectos que buscaron dicho orden y buscaron plasmarse en las Constituciones de 1856 y 1860.

En esas circunstancias el pensamiento liberal, en sus variantes clásicas y doctrinal, empiezan a formular una serie de medidas reformistas como: la descentralización, la organización de los poderes del Estado, la supresión de los fueros, la eliminación de la heredabilidad de los empleos públicos, entre otros, que planteaban como meta establecer el orden. Esta búsqueda de la estabilidad, evitando ante todo el caos, hizo que entre la década de 1850, la idea de la soberanía popular fuese interpretada por los diferentes proyectos constitucionales, como una situación donde la verdadera soberanía debe estar encarnada en las personas que tengan una serie de capacidades, entre la más importante la razón. Esta circunstancia impediría que el destino del país fuese el caos; nuestra clase intelectual, dividida entre liberales y conservadores, compartían esta visión de país; es por ello que sostenemos que el Perú se desarrolló, la denominada “modernización tradicionalista”, pues no logro cambiar la estructura social, que no fueron abordados por estos proyectos constitucionales, sino se concentraron en cómo transformar al país en su fisonomía política, administrativa y económica.

**Palabras claves:** proyectos constitucionales, liberales, conservadores, descentralización, republicanismo.

## ABSTRACT

This thesis seeks to study how the Constitutional projects of the 1850s contributed to the modernization of the Peruvian State by intellectuals of Peruvian society who aspired to the modernity of the country, which was fatigued by the constant Wars of the militaristic caudillos, that had bled to the country, from its first years of independent life until 1845; It was during the 1850s that a series of administrative and juridical reforms that contributed to the ordering of the chaotic Peruvian State began to be promoted. This included the elaboration of projects that sought this order and sought to be reflected in the Constitutions of 1856 and 1860.

In these circumstances liberal thinking, in its classical and doctrinal variants, begin to formulate a series of reformist measures such as: decentralization, organization of state powers, suppression of charters, elimination of the heritability of public employment , Among others, which set out to establish order. This search for stability, avoiding chaos first, meant that between the 1850s, the idea of popular sovereignty was interpreted by different constitutional projects, as a situation where true sovereignty must be embodied in people who have a Series of capabilities, among the most important reason. This circumstance would prevent the fate of the country from being chaos; Our intellectual class, divided between liberals and conservatives, shared this vision of country; That is why we maintain that Peru developed, the so-called "traditionalist modernization", because it failed to change the social structure, which were not addressed by these constitutional projects, but concentrated on how to transform the country into its political, administrative and Economic development.

**Key words:** constitutional projects, liberals, conservatives, decentralization, republicanism.

## **Introducción**

El presente trabajo pretende incorporar al estudio de los proyectos constitucionales las propuestas que se dieron e implantaron en las constituciones de 1856 y 1860, etapa en donde el liberalismo intentó crear una república basada en la modernización; es decir, entendida en la construcción de un Estado orgánico apartada de la herencia corporativa de la colonia y asentada en el orden.

La implementación del liberalismo en América Latina ha sido todo un desafío para la historiografía tradicional, puesto que siempre se ha señalado que el modelo liberal aplicado durante el siglo XIX en la región se ha estrellado contra la realidad de nuestras instituciones. Lo que importa es señalar que la historia política moderna se le valora gracias al hecho de que las ideas liberales importadas lograron cambiar parte de la realidad en la que nos encontrábamos, ya que a partir de la independencia, era imprescindible contar en nuestros estados iniciales con congresos, elecciones, constituciones y derechos ciudadanos (Aguilar, 2001, pp. 1).

En ese sentido, el propósito ha sido estudiar una parte de los proyectos políticos que se implementaron en las diferentes constituciones del país. En esa dirección, estudiar la Constitución de 1860 resulta uno de los hitos fundamentales de la historia constitucional del país porque hasta el día de hoy es la de mayor vigencia en nuestra historia republicana.

Se presentarán los acontecimientos que la forjaron, su elaboración y exposición de las diversas ideas constitucionales, los escritos políticos que reflejaban la visión de gobernabilidad y estabilidad del país (en la década de 1850 se experimentaron dos sangrientas guerras civiles [1854-1855 y 1856-1858] que asolaron por completo el territorio nacional) y la circunstancia de tener dos constituciones que fueron tachadas y que reflejan la falta de institucionalidad política en el país: La de Huancayo, censurada con la revolución de 1854, y la Constitución de 1856, puesta en entredicho con el golpe del coronel Arguedas en noviembre de 1857.

El desenlace de estas transformaciones políticas llevó al país a una serie de cambios que el programa de los liberales había pregonado establecerlos en el Perú desde el triunfo de la revolución liberal de 1854: el objetivo era dejar atrás la idea del *caudillo fuerte* que sujeta al país a sus vaivenes, como lo ocurrido con Santa Cruz (Aljovin, 2007, págs. 133-134). Por ello los liberales, desde la Convención de 1855, desarrollaron una visión asentada en el orden de país. A pesar de su clausura, las ideas liberales mantuvieron vigencia y se retomaron en la Constitución de 1860.

En los debates y proyectos previos, se articularon los planteamientos legales, políticos y administrativos que se discutieron e influyeron en la opinión pública. Cuando se estableció el Congreso extraordinario de 1858, los diferentes proyectos de constitución, y escritos políticos que van circular en el país, se trazan como objetivo imponer el orden en el país. Figuras políticas como Bartolomé Herrera y José Antonio Lavalle ofrecieron modelos sobre cómo debe darse la nueva constitución, el cual se orientaba a restaurar el orden que fue quebrado por la guerra civil desencadenada por el general Vivanco, en 1856, un defensor de las tradiciones.

Para entender este periodo político constitucional es necesario conocer acerca de la Convención Nacional de 1855 y el Congreso Extraordinario de 1858, eventos que se dieron con la finalidad de reformar la carta de 1856 y efectuar un nuevo orden legal que finalmente termine por estabilizar al país. Se apreciarán los enfrentamientos entre los grupos que apoyan al gobierno de Castilla y los opositores a su gestión serán constantes, siendo los principales críticos los **liberales**. El debate político en la Asamblea Legislativa fue intenso porque los liberales trataron de imponer su agenda política en el Ejecutivo y salvar la Constitución de 1856. En estas constantes confrontaciones políticas, circularon numerosos escritos que intentaron influenciar en la opinión pública de la ciudad. Además, se identificarán la confrontación de dos voces: unos que propondrán una reforma, mientras que otros justificarán la idea de elaborar una nueva constitución. El debate se trasladó al escenario que debía decidir cómo debía nombrarse al nuevo Congreso, y cómo debía ser este, es decir, constituyente o constitucional (Gonzales de Paula Vigil, El Comercio, 1858). Ambas iniciativas contribuyeron a afianzar la dirección política del país e instaurar un marco jurídico legal que armonice la gobernabilidad y representatividad de la República, y de esa manera, solucionar las constantes crisis.

Apreciaremos en el presente trabajo está relacionado con el estudio de los proyectos constitucionales que se dieron para la reforma de las constituciones de 1839 y 1856, que finalmente sirvió para la elaboración de las cartas constitucionales de 1856 y 1860; se aprecia como los planteamientos formulados por hombres que tienen una visión de proyecto de país, finalmente se plasmaron en la Constitución de 1860. Asimismo es necesario estudiar como los distintos escritos que circulaban en la época, impactaron en el orden legal e influenciaron en el desarrollo de la opinión pública de la sociedad peruana de mediados del siglo XIX. Esta etapa sigue correspondiendo a la era de las pugnas ideológicas del siglo XIX, una era de enfrentamientos entre los denominados liberales y conservadores.

Llamamos **liberales** a la ideología que se establecerá con fuerza en el país a mediados del siglo XIX. Exalta las libertades políticas y económicas, a través del establecimiento de una constitución y la participación ciudadana, que ansía la modernidad económica y la ruptura de las barreras proteccionistas que se resistían al libre mercado. Lo último, se promovió en el sur del país, particularmente en Arequipa, ciudad que se había convertido en baluarte del liberalismo económico. Por otro lado, estaban los **conservadores**, quienes deseaban mantener las tradiciones y rechazar cualquier cambio revolucionario al sistema vigente. Muchos de ellos tienen su respaldo en la elite criolla limeña y los hacendados de la costa norte quienes eran conscientes que para mantener sus ventajas, había que preservar el orden tradicional. La historiografía actual considera que ellos también apostaban por implementar reformas (algunos los consideran parte del liberalismo). Ambos son los dos grupos ideológicos que son parte de las transformaciones que se despliegan en el país, situación que más adelante denominaremos *la modernización tradicionalista*.

Cabe agregar que la segunda mitad del siglo XIX es una época donde se prosigue el proyecto de articular a la nación la cual debe librarse de la anarquía militar; para ello, se escarmentó a los transgresores de la ley y se trató que la milicia se subordine a los intereses de la nación.

Los debates políticos serán constantes, las publicaciones de la época permiten apreciar como la sociedad se había polarizado por las ideas que defienden cada grupo; y es desde estas plataformas informativas donde se generan los espacios de gobernabilidad o inviabilidad de los gobiernos de la época, las críticas presentadas

por ambos sectores políticos van a formalizar la conformación de la ciudadanía política en la segunda mitad del siglo XIX.

El escenario de la investigación, como se ha señalado, es la sociedad de mediados del siglo XIX, época en la cual los grupos liberales han conseguido acceder al gobierno e implementaron su doctrina. En 1855, se instala un gobierno provisional dirigido por el general Castilla, quien en un inicio cogobierna con los políticos liberales, los cuales han logrado situarse en el poder y ejecutan reformas que serán cristalizadas en la Constitución de 1856. Estas imponen la limitación del poder presidencial, la abolición de los fueros privados, la abolición de la pena de muerte y la posibilidad de imponer la tolerancia de cultos. Todos ellos se debatieron en la Convención Nacional y polarizó a la sociedad de la época, lo cual se observa en las publicaciones, las detracciones al Gobierno y a la Convención Nacional por la prensa antiliberal estimuló una animadversión. A ello se suma, el recorte de privilegios a los funcionarios públicos y a los militares, que son parte de la política de ruptura con el corporativismo considerado por los liberales como una rémora del pasado que debe superarse. Estas proposiciones consiguieron fomentar una corriente crítica en contra de la Convención Nacional de 1855 y la Constitución de 1856, que finalmente sucumbió en 1857.

La puesta en marcha del Congreso ordinario de 1858 nuevamente desencadenó una nueva dinámica política donde el aparente triunfo conservador, aliado al presidente Castilla, se verá opacado por las críticas liberales y pondrán de relieve que el escenario político seguirá siendo tan conflictivo como en años anteriores. Una de las cartas de la oposición liberal es criticar a los agentes del Gobierno, que son acusados por tratar de resucitar la anticuada constitución de 1839. Esto haría caer al país a una nueva etapa de caos; por otro lado, los sectores denominados conservadores argumentaron la necesidad de reformar la Constitución de 1856, y en el mejor de los casos realizar una nueva.

En esas circunstancias se distingue la figura de Bartolomé Herrera quien presenta un nuevo proyecto y que es duramente fustigado por los opositores al gobierno de Castilla. Lo acusaron por querer resucitar la constitucion de Huancayo y

eliminar la de 1856, y convocar a un nuevo Congreso Constituyente para implementar el orden conservador (Anónimo, El Comercio, 1859).

Siguiendo las líneas anteriormente descritas, la investigación está basada en la creencia de que al estudiar los proyectos constitucionales que se presentaron para implementar la Constitución de 1856 y luego la de 1860, van a desarrollarse en la perspectiva de estudiar y comprender que dichos proyectos plantearon ofrecimientos innovadores con respecto a la organización del país, además se aprecia que cada grupo ideológico presenta su visión de país. También se verán propuestas que procuran traer el orden social, lo cual implica defender los ideales tanto, liberales como conservadores y defender los principios de la autoridad presidencial o del Legislativo.

Los escritos y panfletos que circulan por aquellos años reforzaron las ideas sobre cómo actuar con respecto a la elaboración de la reforma parcial o la elaboración de una nueva carta magna. Asimismo, se presentaron escritos periodísticos que trataron de influenciar en la opinión pública y que exigían la consolidación de la estabilidad constitucional en el Perú. En esos años, la idea del orden, se había posicionado como el *quid* para el desarrollo de la institucionalidad, y la consolidación de la construcción de los espacios de ciudadanía. En el Congreso Extraordinario de 1858 los bandos ideológicos continuaron con la política confrontacional con el Ejecutivo ya que por un lado, se lucha por salvar las reformas liberales de la Constitución anterior, por otro, se encuentra con diputados que apoyaban la elaboración de una nueva Constitución. Por aquellos años, era necesario consolidar a una nueva clase dirigente a través de prácticas cívicas, y la prensa será un factor clave, ya que se logró realizar estas acciones través de la publicación de los proyectos con lo cual se pretendió crear una opinión pública en torno a la construcción del Estado.

Los escritos de la época van a permitir demostrar la viabilidad del proyecto de investigación, dado que mostrarán en el debate político la idea de querer un orden para la realidad del país, de esta manera, apreciaremos como los actores políticos contribuyeron a la formación de la conciencia ciudadana de mediados del siglo XIX.

Esto tendrá repercusiones para el siguiente año puesto que dejará al país listo para los cambios políticos que más adelante se darán en la década de 1860.

El problema a desarrollarse en la investigación es abordar principalmente el impacto de los proyectos constitucionales en la elaboración de las constituciones de 1856 y de 1860, para ello es necesario estudiar como las publicaciones escritas influyen en la construcción y organización del Estado durante la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, este debate político jurídico que va a librarse en los espacios periodísticos, nos muestra que la lucha ideológica de los liberales y conservadores seguirá tan fuerte como en las décadas pasadas, pero con una mayor conciencia de traer de una vez por todas la estabilidad al país. Es allí donde se intentará establecer y demostrar cómo estos proyectos constitucionales pueden aportar a la estabilidad, gobernabilidad y terminar con el caos que estaba desgarrando al país con las dos guerras civiles de la década de 1850. Fruto de ello, se tendrá una de las constituciones de mayor duración de la vida republicana, donde definitivamente habrá un consenso por salvar parte de las reformas anteriores.

Las fuentes de la época servirán para demostrar que la elaboración de los proyectos buscará establecer legitimidad y orden, que finalmente la constitución de 1860 dejó traslucir. A lo largo de esos años, estas pugnas ideológicas querrán imponer sus respectivos ideales y mostrarán como la clase política se encuentra dividida. Plantearán ideas y proyectos para elaborar nuevas constituciones y reafirmarán en cada uno de ellas sus ideas con respecto a la organización del país. Es por eso que ante esta situación, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo los proyectos constitucionales que se elaboraron para reformar la constitución de 1839 y 1856 influenciaron en la elaboración de las constituciones de 1856 y de 1860?

Estos proyectos constitucionales son parte del debate constitucional y del orden legal que se había establecido durante el siglo XIX, donde los caudillos victoriosos querían imponer y refundar el país (Aljovín, 2000, pp. 84-85). En este sentido, debemos pensar que el presidente Castilla aspiraba a la normalización de las relaciones políticas y erigirse como el caudillo que iba a ejecutar un nuevo orden legal, donde nuevamente se establecería la idea de un Poder Ejecutivo fuerte que tenga bajo su control el orden del Estado. En la prensa llega a mencionarse que había



un proyecto para implantar una dictadura militar constitucional (El Comercio, 19 enero 1859). Además, los remanentes del liberalismo de La Convención de 1855 lograron reorganizarse y promovieron respetar los logros conseguidos por la Constitución de 1856. Seguirán circulando escritos, donde se sigue planteando la limitación de la figura presidencial, otros solicitaran su fortalecimiento, muchas de estas posturas terminaron influenciando la Constitución de 1860.

## **Justificación de la investigación**

En la presente investigación es de suma importancia el estudio de los diversos proyectos constitucionales, como los escritos de Toribio Pacheco («cuestiones constitucionales»), Felipe Masías («Breves nociones de ciencia constitucional») y José María Quimper («Instrucción política y reformas para el pueblo»). Todos los textos exponen el **nuevo orden** basado en las libertades, el orden y el progreso. La caída de la Convención Nacional en 1857 abrió un nuevo vacío constitucional que debía restablecerse cuanto antes, pues la Constitución de 1856 quedó en suspenso tras el golpe del coronel Pablo Arguedas, quien había clausurado violentamente la Convención. A partir de ese acontecimiento, el segundo gobierno del general Castilla será presionado por los distintos grupos políticos: liberales y conservadores, quienes solicitan la restauración del orden legal que había sido roto por el golpe de Arguedas. Para ello, se convocó al establecimiento de un Congreso Extraordinario, en 1858, que debía normalizar la legalidad del país. En estas circunstancias, se hacía necesaria una reforma constitucional o la elaboración de una nueva carta magna, donde se aseguren las libertades, nos lleve al progreso y consolide la soberanía de la nación. Una diversidad de escritos, muchos de ellos con carácter de anónimo, circularon por la ciudad y exigían la reforma constitucional.

El gran detalle en la construcción del Estado, es que no se creía en una modernidad que posibilitara la igualdad total de los ciudadanos, o más aun la igualdad de todos los peruanos ante la ley: esto era una apreciación muy lejana ya que lo que se desarrolló, fue la modernización de la dominación tradicional y no hubo la reestructuración de las relaciones de dominación. Esto significaba que varias normas de control colonial se mantenían vigentes en la república para facilitar la dominación de la elite sobre el resto del país. La modernización que logró darse

fue en el plano económico-administrativo, mas no en el plano social, donde seguirán desarrollándose las limitaciones. (De Tragzenies, 1992, págs. 31-32). Varios de los proyectos constitucionales que circularon, van a demostrar esas notorias limitaciones que existieron en la modernización de la república, esta compleja situación explica la distorsión que se encuentra en el liberalismo que se aplica en el país. Además hay que señalar que durante este debate, el ruido político por parte de los diputados del Congreso Extraordinario, chocaran con los intereses del Gobierno de Castilla, desencadenándose fricciones que incluso casi llevaron al asesinato de Castilla en 1860.

Durante el desarrollo de la investigación salieron a relucir una serie de objetivos que se tratará de desarrollar, en particular se busca precisar la actuación de los diferentes escritos constitucionales y como estos influenciaron en la construcción de la organización del Estado durante la década de 1850; además, se busca demostrar que los actores que la elaboraron tenían una conciencia de modernizar al país.

Asimismo, se describe, explica y analiza el papel que desempeñaron los proyectos constitucionales que se elaboraron para la reforma de la constituciones de 1839 y de 1856. De esta manera lo que estableceré es como estos escritos fueron cruciales en el debate constitucional entre los liberales y los conservadores.

El periodo histórico a estudiar es la década de 1850 donde van a implementarse una serie de reformas que buscan impulsar la modernización del Perú, iniciándose la búsqueda del progreso a través del establecimiento de constituciones que busquen implantar el progreso del Estado. Por ello es necesario conocer el papel que desempeñaron los liberales en La Convención Nacional de 1855, los proyectos que se presentaron para elaborar la Constitución de 1856, la caída de los liberales y la gestación de la Constitución de 1860, situación que ocasionó un interesante debate político que influyó en el segundo gobierno del general Ramón Castilla.

Los proyectos constitucionales que se presentaron para elaborar las constituciones de 1856 y 1860 marcaron pautas para la organización del Estado peruano, ya que en ellos hay una constante búsqueda por lograr alcanzar la estabilidad. En estas

propuestas se encuentran ideas que buscan acabar con el caos del militarismo, establecer en el país el orden democrático y sentar las bases del progreso, pero a su vez fue la semilla para que cada caudillo busque legitimar su proyecto y refundara el país a su pensamiento, razón por lo cual vamos a apreciar a lo largo del siglo XIX toda revolución política en el país trataba de imponer nuevas normas constitucionales, razón por lo cual se puede ver toda una serie de escritos constitucionales que formalizan las ideas y pensamientos de los diferentes caudillos.

La década de 1850 marca un punto de inflexión en la reorganización del Estado, el Perú a mediados del siglo XIX necesita de bases más sólidas para poder construir una estabilidad política que hasta ese momento había carecido por los desvaríos de los distintos caudillos. El proyecto de construir un Estado más orgánico se presenta en esta etapa ya que se tiene la riqueza del guano que puede darle los recursos a la clase política para poder construir un Estado más organizado; a partir de esa posición, tanto liberales como conservadores, sueñan con desplegar sus ideales, desgarrados por los constantes conflictos internos que habían asolado al país, para poder tener un país más orgánico y real.

## **Revisión bibliográfica**

El estudio de los proyectos constitucionales es un tema trabajado de forma no tan frecuente por la historiografía peruana del siglo XIX, por lo que es importante resaltar los estudios realizados sobre las constituciones y su impacto mediático en la sociedad de la época. También es interesante apreciar la relevancia política de los caudillos ya que ellos son los que impulsarán el sueño del **nuevo orden**, donde esperan refundar al país y llevarlo a una nueva era. De allí que surgiera la necesidad de imponer constituciones como una de las medidas primordiales, figura que se repitió desde los inicios de la vida republicana. El caos político que se dio en la época de Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz había coadyuvado a ese escenario.

La década de 1850 sigue ese camino: se dieron sublevaciones, situaciones de caos y triunfos de nuevos mesías que ansían estabilizar al país. La figura mediática

del general Castilla marcará esta etapa, siempre acompañada por la lucha ideológica entre liberales y conservadores.

Con respecto al análisis de la organización de la República desde sus inicios ha sido interesante examinar las obras que se enfocan en las constituciones, ya que en mucha de ellas se ha logrado articular ese imaginario que los diferentes actores del siglo XIX plasmaron en las distintas constituciones. De allí que mi interés sobre cómo se presentaron las diversas constituciones del siglo XIX y que continuidades o cambios se mantenían en cada una de ellas; de allí que los trabajos de José Pareja Paz Soldán (1943), Juan Vicente Ugarte del Pino (1978), Cristóbal Aljovin (2000), Alicia del Águila (2013), Raúl Chaname (2013) y Antonio Jamanca (2015) apunten a destacar la importancia de las constituciones.

José Pareja Paz Soldán en su obra **«Historia de las Constituciones Nacionales»** (1943) desarrolla el estudio de las cartas constitucionales del país entre 1823 y 1933. Cabe destacar la parte sobre los debates constitucionales que se gestaron en torno a la Constitución de 1856, en donde la comisión de Constitución de La Convención Nacional de 1855 jugará un papel crucial. Describe como se efectuaron las disposiciones de los distintos artículos de la constitución, el fortalecimiento del poder del parlamento, la reducción del mandato presidencial a cuatro años, la eliminación de la figura del vicepresidente y la descentralización de las juntas departamentales. El autor establece que el gran debate fue en torno a la religión y a la pena de muerte, temas que enfrentó a los liberales y conservadores.

Puesto fuera de circulación la Convención Nacional y la Constitución de 1856, se abrió el telón de nuevo para los debates; por consiguiente, nuevamente se discutirá sobre la necesidad de reformar dicha carta magna, se presentarán proyectos de constitución, donde se destaca la figura de Bartolomé Herrera quien presenta un Proyecto de Constitución, que el autor la denomina «Corporativa - Autoritaria» (Pareja Paz Soldan, 1943, pp. 107-116) donde exige que cada sector de la sociedad esté representado para evitar el caos del individualismo.

El texto de Juan Vicente Ugarte del Pino (1978) **«Historia de las Constituciones del Perú»**, realiza un estudio sobre las diversas constituciones que se han elaborado en nuestro país. Lo destacable es el estudio de las constituciones de 1856 y 1860, ambas precedidas de un prefacio donde se indica la importancia de cada una. En la Constitución de 1856 se menciona la importancia de los diarios de debates y las actas de sesiones de La Convención Nacional de 1855 donde se mostrará, por primera vez, todas las disputas ideológicas. Asimismo, los artículos que tuvieron un mayor centro de atención fueron el número cuatro, que trata sobre la religión, y el sexto que expone la abolición de los privilegios hereditarios, los fueros personales, los empleos en propiedad y las vinculaciones, por la cual las propiedades podían ser transferidas por ley. (Ugarte del Pino, 1978, págs. 383-385).

La obra de Cristóbal Aljovín (2000), **Caudillos y Constituciones Perú: 1821 – 1845**, nos presenta a lo largo de su texto, la construcción de la figura del caudillo y como atraviesa una serie de vaivenes en la fase denominada el primer militarismo. Lo que interesa de la obra es la construcción de este primer militarismo en tres sucesivas oleadas. Me interesa en particular la segunda oleada de caudillos, que van desde la elección de Castilla, hasta la conclusión de su mandato (1845 – 1862), que es lo que justamente al autor le faltó desarrollar, pero fuera de este detalle, Cristóbal Aljovín nos ilustra la constantes construcciones políticas que realizan los caudillos para poder legitimar su poder en torno a una sociedad afectada por el proceso post independencia, en donde su legitimidad debe construirse en torno a la legalidad de la Constitución, donde la implementación de un nuevo vocabulario político como representación, soberanía popular, libertad e igualdad, son parte constante de los distintos proyectos políticos que intentan modernizar los nuevos estados sudamericanos post independencia. A pesar de intentar establecer esta modernidad en estas regiones, el problema como a lo largo del siglo XIX, era que iban en colisión directa con los intereses de los sectores tradicionales; por lo tanto, hay una brecha entre la ley escrita y la realidad (Aljovin, 2000, págs. 73-74)

El texto de Alicia del Águila Peralta (2013), **«La ciudadanía corporativa. Política, constituciones y sufragio en el Peru (1821 – 1896)»**, nos representa la situación sobre la formación de las asociaciones, en las cuales se apuntan a mejorar el liberalismo y fortaleciendo las libertades e igualdades individuales. Señala también los diferentes tipos de liberalismo que se desarrollaron, como los liberales

romanticos, los doctrinarios y orgánicos. Además, hay que tener bastante cuidado con la definición de conservador, ya que este puede incluir alguna visión del liberalismo doctrinario que nutrió por ejemplo a Bartolome Herrera. Visionaba la idea del control de la soberanía popular y el corporativismo, clave para el mantenimiento del orden. También estudia como las constituciones del siglo XIX enfocan la categoría del ciudadano, y como en esta construcción, sean liberales o conservadores, limitan el desarrollo de la ciudadanía, en el sentido liberal del individuo, pues lo que se busca fortalecer es la fórmula del ciudadano corporativo, que favorece la centralidad del Estado. Por ello esa fórmula pudo tener éxito con aquel discurso. Resulta interesante la interpretación de algunas situaciones, a través de las fuentes, como son los periódicos y las constituciones; de esta manera, la autora logra establecer su tesis de la ciudadanía corporativa.

Raúl Chanamé (2013), en **La República Inconclusa**, plantea que el liberalismo es el sector triunfante en la segunda parte de la década de 1850 pero que no logra instalar su programa político en su totalidad ya que lo que se privilegia es la modernización de parte del régimen económico, lo cual resultó contraproducente porque no se abordaron de manera clara en los debates constitucionales, que solo hacía eco en una parte de la sociedad. El ambiente de 1855 y 1856 será el adecuado para vivir, escenario que el autor denomina la «euforia constitucional» que es marcadamente antimilitarista, laico y sufragista. Hay una influencia jacobina en esta etapa victoriosa del liberalismo, donde la Asamblea Legislativa, que se reunió tuvo el nombre de Convención Nacional, se convirtió en una constituyente que procedió a sacudir los cimientos del orden tradicional del país, reflejándose en la Constitución de 1856, y que «tuvo grandes virtudes doctrinarias, algunos errores de adecuación y despertó muchas ilusiones. Contra todos sus críticos, expresó la buena fe de superar el lacerante militarismo y brindar de manera temprana la libertad de culto en el país...» (Chaname, 2013, p. 269).

La Constitución de 1856 tuvo numerosos enemigos, que finalmente la derribaron, como ocurrió con la Convención Nacional de 1855. En esas circunstancias se reúne el Congreso Extraordinario de 1858 que debía discutir la necesidad de reformar la constitución anterior, pero que no se logró por las desavenencias entre el Congreso y el Ejecutivo. La lucha de poder no está explicada por el autor, es por ello el interés de abarcarlo. En esas circunstancias se reúne el

Congreso Extraordinario de 1858 que debía discutir la necesidad de reformar la constitucion anterior, pero que no se logró por las desavenencias entre el Congreso y el Ejecutivo. La lucha de poder no esta explicada por el autor, es por ello el interés de abarcarlo. Hay que agregar que durante los debates se menciona en el texto el proyecto de Bartolome Herrera y sus propuestas.

**“La Constitución inacabada”** (2015), de Marco Antonio Jamanca, nos lleva al estudio del constitucionalismo peruano de la primera mitad del siglo XIX. Asevera que el constitucionalismo es consecuencia de la influencia del liberalismo dado que no solo bastaba destruir un sistema político antiguo, sino había que crear un nuevo orden legal-jurídico que se encargue de construir instituciones. En dicha realidad se circunscribe el constitucionalismo peruano que permitirá construir este nuevo Estado con las ideas de libertad de imprenta, soberanía de la nación, separación de poderes y derechos individuales; todo con la finalidad de poder limitar el poder de la clase gobernante. Este es el esfuerzo del emergente pensamiento constitucional del país (Jamanca Vega, 2015, págs. 58-59).

Además, Jamanca comenta sobre los grandes retos que afronta el pensamiento constitucional y político, para asegurar el denominado buen gobierno. Dentro de estos retos nos comenta que en el espacio público se escenificaron fuertes debates, por un lado se tiene a los «liberales conservadores» y los «autoritarios», que proponían la figura de un liderazgo fuerte que acabe con el caos que estaba envuelto el país, para ello debía excluirse a las masas. Por otro lado se tiene a los liberales radicales que promovían reformas extremistas, según la mentalidad conservadora. El texto destaca que ambos grupos políticos, después de interminables debates y luchas, habían llegado a la conclusión que el origen de los males del país se encuentra en el caudillismo militar, situación contrastante ya que los autoritarios eran partidarios de un caudillo fuerte que solucione los problemas del país, pero sin institucionalizarlo. Su visión no incluía el consenso para la gobernabilidad, sino lo que se buscaba era la mano fuerte que logre controlar los desbordes sociales que amenacen el orden del país.

Asimismo, para poder estudiar la influencia de la ideología liberal y su trascendencia en la institucionalidad y el pensamiento republicano del siglo XIX, destacamos las obras de Fernando de Trazegnies (1992), Carlos Augusto Ramos Nuñez (1993), Fernando Armas (1997), Raul Ferrero (2003), Natalia Sobrevilla

(2005), Enrique de Ravago Bustamante (2007) y Alejandro Rey de Castro Arena (2010).

El texto de Fernando De Tragzenies (1992), **«La idea del derecho en el Perú republicano del siglo XIX»**, nos presenta uno de las tesis que permiten entender como los proyectos modernizadores, en este caso el establecimiento de la constitución, no tiene el efecto deseado en nuestro ordenamiento jurídico y legal. Esta situación se debe a la actuación de la élite del país que no logra modernizarse por completo y no genera relaciones capitalistas, como sí se ha desarrollado en el occidente europeo y los EE. UU. que la llevan en su totalidad. Teníamos una clase dirigente, que estaba dividida por las ideologías liberales y conservadoras, pero tenían en común la praxis de excluir a las mayorías:

«...la filosofía debe ser tamizada para lograr un eclecticismo que salvaguarde ciertos valores tradicionales, la tecnología deber ser reservada para la actividad de dichas elites por medios ajenos a la mera competencia del mercado, las leyes liberales deben ser entendidas de manera que se respeten “las bases sociales de la nacionalidad” y los bienes de consumo importados y los estilos de vida occidentales corresponden básicamente a los sectores “cultos” del país...» (De Tragzenies, 1992, p. 32).

Esta denominada modernización tradicionalista, empieza alrededor de la década de 1850 debido a la influencia de los ingresos del guano en la economía del país, que hizo pasar a una etapa más estable, después de haber estado en una de intensa anarquía militar. Es por ello, que los proyectos constitucionales presentados anhelaban la reorganización administrativa, jurídica y legal del país; pero, en el plano social, no se encuentran indicios de querer modernizar la sociedad.

**«Toribio Pacheco. Jurista peruano del siglo XIX»** (1993), obra de Carlos Augusto Ramos Núñez, nos presenta la figura de este jurista y su relación con los cambios constitucionales. Este personaje vive en una época de cambios, donde la idea occidental del progreso se ha instalado en el país. El autor trabaja también la idea de la modernización tradicionalista en donde subraya que el conservadurismo de los criollos se mezcló con un liberalismo atemperado, dado que aplicar el liberalismo completo hubiese supuesto el final de la élite criolla. El ejercicio de adaptarlo a la realidad nacional, el autor los denomina «Realismo Liberal».



Pacheco es conocido también por presentar el texto *Cuestiones Constitucionales* donde realiza un estudio de las constituciones nacionales, desde 1823 hasta 1839. Una vez realizado su análisis se dedica a presentar una serie de alternativas para poder mejorar la administración y gobernabilidad del país. Resalta la necesidad de fortalecer la autoridad presidencial, pero no desea que este se convierta en un déspota; su ambición será ver la marcha de la estabilidad del país y por ello ya no debía repetirse las anteriores experiencias. (Ramos Nuñez, 1993, págs. 176-177).

Por otro lado, Fernando Armas, en **«Liberales, Protestantes y Masones. Modernidad y tolerancia religiosa»** (1998) muestra el debate constitucional que se desarrolló con respecto a la tolerancia religiosa, acerca de si esta debía establecerse en la constitución de 1856. Esta intensa discusión, que se libraba en los escaños de la Convención Nacional, se trasladó a la ciudad letrada, donde se desarrollara una amplia movilización de la prensa y escritos trataran de respaldar sus posturas. El periódico «El Católico», que representaba a los sectores conservadores, criticaba abiertamente la posibilidad de establecer la idea de la tolerancia religiosa. También tenemos el periódico «Católico Cristiano», de tendencia liberal. Esta situación generará opiniones que permiten apreciar cómo se desarrolla la ciudadanía, la descripción de movilización de un público que se interesa por estos discursos y como ellos se manifiestan. Es la mayor demostración que se está generando de la formación de una opinión pública, en la cual cada sector ideológico, además de defender sus intereses, busca el respaldo para generar conciencia.

Otro texto revisado es el de Raúl Ferrero (2003) **«El liberalismo peruano contribución a una historia de las ideas»** el cual proporciona una visión sobre las generaciones de liberales, especialmente la tercera generación, que es la que tiene un rol protagónico en la Convención Nacional y en la promulgación de la carta magna de 1856. El interés del autor es demostrar como las ideas liberales surgidas en el siglo XIX van a tener un gran impacto en la historia de las ideas en el Perú, y como el mensaje de exaltación a la libertad, se traslucirá en el liberalismo de esos años, tratando de impulsar un orden progresista, confiando, como nos dice el autor, en el sufragio universal y como partidarios de la democracia de masas. La crítica que se puede hacer al texto es no haber ampliado y ahondado en la perspectiva que tenían

las generaciones de liberales, es decir profundizar analíticamente sus objetivos y como estos se ajustan con la realidad de la época.

El artículo de Natalia Sobrevilla (2005), *El proyecto liberal y la Convención Nacional de 1855*, introduce al entendimiento del liberalismo de mediados del siglo XIX a través de la Convención Nacional. Ofrece un panorama sobre cómo fracasó la Convención debido a que subestimó, según la autora, la figura del general Ramón Castilla, situación sumada a otras que contribuyeron al derrumbe de esta institución. Lo que falta aquí es un estudio más intrínseco sobre las personas que van a estar alrededor de la Convención, y establecer qué papel representó la participación popular en esta construcción y fracaso del liberalismo. Enrique de Rávago Bustamante en *Antecedentes y sucesos en la fundación de la Republica Peruana (pensadores, doctrinas y textos)* (2007) se encarga de presentar la concepción clásica del liberalismo, pero establece la pauta que este no debe ser considerado como igual a la democracia, ya que en sus inicios este liberalismo no coincidía con la idea de la democracia, que era apreciado como un sistema poco saludable para la participación de las masas en la vida política: el cambio debía ser gradual; quienes sí apostaban por la propuesta de que el pueblo debía participar directamente eran los denominados radicales. El liberalismo pasó por una serie de transformaciones durante el siglo XIX y a mediados se volvió más pragmático y pedía una mayor participación del Estado en el plano social, sin desligarse de la defensa del individuo. (De Ravago Bustamante, 2007, pág. 16 y 30).

El autor incide en la precariedad de los estudios del constitucionalismo en el país, debido a las consecuencias de la guerra de independencia y la lucha de los caudillos militarista por el poder. A ello contribuye también el hecho de que no se han desarrollado estudios de este tipo en la joven república. A los mucho existen dos manuales: **Lecciones del Derecho Público Constitucional** de Ramón Salas (1821) y **Compendio de Derecho Público Interno y Externo** de Silvestre Pinheiro (1848), que en la introducción tiene los comentarios de Bartolomé Herrera. Durante los debates entre los liberales y conservadores, que se van a desarrollar para poder implementar las constituciones del primer tercio de la vida independiente está la figura de fortalecer la autoridad presidencial, situación que será establecida en la Constitución de Huancayo.

Alejandro Rey de Castro Arena (2010), en **Republicanismo, nación y democracia. La modernidad política en el Perú, 1821 – 1846**, plantea que la introducción de la modernidad en el Perú, que se dio durante los siglos XIX y XX, gira en torno a la figura de la construcción de la ciudadanía, ya que esta situación era clave para la construcción de una nación moderna. Una de las ideas claves que presenta es la idea del republicanismo, que sería clave para la coexistencia de la colectividad nacional, donde se respetaría sus voluntades, lo cual implica la destrucción de las desigualdades características del antiguo régimen. Para el funcionamiento de esta comunidad de pares era necesario el respeto de las reglas, es decir de las normas legales, de allí la necesidad de tener una constitución basada en ese principio. Por ello, el autor asume que la constitución es el marco legal obligatorio que la clase dirigente debe obedecer, sumándoles la idea del gobierno representativo. Todas estas propuestas se cumplirían en el republicanismo. (Rey de Castro Arena, 2010, pp. 94-95 y 102).

El autor considera que la cultura política peruana de los inicios de la República están marcadas por la inestabilidad, donde los caudillos tratan de reforzar su poder reelaborando los conceptos de ciudadanía, opinión, constitucionalismo, con el fin de poder legitimar sus acciones y fortalecerse en el poder, y en donde finalmente lo que les daba el reconocimiento era la fuerza de las armas, de allí que sea constante el rompimiento constitucional (Rey de Castro Arena, 2010, pp. 176-177).

El estudio de la sociedad de mediados del siglo XIX, su pensamiento, sus acciones, son parte también del orden republicano que se trata de presentar en el estudio, de allí que sea importantes las obras de Carlos Forment (1997 y 2012), Pablo Wipple (2013).

El texto de Carlos Forment, *La sociedad civil en el Perú del siglo XIX...* (1999), ilustra la importancia de las asociaciones cívicas y políticas que servirán para institucionalizar la sociedad civil. El espacio público será utilizado convenientemente para poder aumentar e incrementar la participación de la sociedad en las asociaciones; estas influirán en la transformación del Estado y enseñaron a sus integrantes a generar espacios de opinión pública. La construcción de estos permitieron que las personas de menor nivel pudieran integrarse a los niveles de

socialización y democratización; de esta manera, se formaron tipos de modelos cívicos que influyeron en la construcción de estados democráticos.

Además, se muestra la importancia de los salones familiares, como los que había en Lima, Arequipa y Cuzco, justos para la socialización, en donde la participación de las mujeres, como agentes que transmiten información de los grupos conservadores, es así que los hogares se transformaron en los baluartes de estos grupos. Otro escenario que plantea el autor es el aumento de la vida asociativa, a circunstancia de la disminución de la violencia caudillista. En esta inserción, tendrán una participación clave los grupos profesionales quienes serán los que empiecen a plantear las reformas.

Resulta justo remarcar la formación de asociaciones, debido a que Bartolomé Herrera en su proyecto de Constitución de 1860, ya exigía la importancia de la formación de corporaciones donde se encuentren «representados los intereses permanentes de todas las clases sociales acabando con nuestro individualismo y nuestro anarquismo institucional» (Pareja Paz-Soldan, 1943, pág. 111).

El texto de Pablo Whipple (2013), *La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano*, nos introduce a los estudios de los remitidos, es decir, las publicaciones pagadas y publicadas por personas de la élite, de la década de 1820 y 1830 y los años iniciales de 1840, es decir los inicios de la república, donde se ve que la elite, a través de la prensa, evidencian sus conflictos y problemas judiciales. Lo interesante del texto es que nos describe el mecanismo de cómo funcionan los principales medios de la época, como el Mercurio Peruano, el Telégrafo y El Comercio y como sus constantes problemas judiciales termina afectando el sistema jurídico. Los remitidos seguirán en plena vigencia años después. Para el periodo de la década de 1850, época de estudio, continuarán publicándose remitidos con notas respecto a la defensa de la Constitución de 1856. Unos plantean la necesidad de reformarla, varios atacarán al gobierno de Castilla, acusado de perpetuar los males del país y otros remitidos imputaron al congreso de 1858 de provocar rebeliones y desestabilizar la precaria institucionalidad del país.

En el plano regional, es necesario entender el descontento contra el centralismo, por ello el estudio de Natalia Sobrevilla (2005), *Conflicto regional, guano y poder*, nos presenta la situación de que en los conflictos regionales, los caudillos no van a

desaparecer ni siquiera con la llegada del guano, sino que ambas variables problemáticas del país, se van a reformular con la llegada de ese recurso. Además, nos permite apreciar como el general Castilla logró sofocar rápidamente la dicotomía entre caudillismo y regionalismo, particularmente en el sur, como Arequipa, que constantemente desafiará al orden establecido desde Lima, coyuntura percibida con mayor inquietud entre los años de 1854 y 1857, fechas donde se suceden los conflictos que atraviesan todo el territorio. Asimismo, Sobrevilla presenta a las insurrecciones como hechos nada novedosos porque siempre han ocurrido alzamientos y revoluciones contra Lima y el Gobierno central, como en el sur, en donde Arequipa aglutinará el esfuerzo contra el liberalismo de la Convención Nacional, sintetizada en la Constitución de 1856.

En conclusión, los distintos textos que hemos utilizado para apreciar el contexto y teoría, contribuyen a establecer que los distintos proyectos que se elaboraron impulsaron una política de construcción de una ciudadanía moderna a través de la figura de los programas liberales. Estas ideas encontrarán una serie de limitaciones y críticas, que la prensa de aquellos años trató de demostrarnos. Es en esa situación que los textos abordados nos presentan el escenario, que es parte del contexto, pero la gran ausencia es la falta de un estudio detallado, minucioso y profundo sobre como esos debates que se gestan en la prensa, los panfletos y libros, terminan influyendo en el imaginario de la construcción de un país y de su progreso; los denominados liberales y conservadores nos dejan en sus escritos los lineamientos de sus programas, y es esa situación de poder aportar a la historiografía, lo que impulsa a investigar.

## **Bases teóricas**

### **Teoría constitucional del siglo XIX**

Durante el siglo XIX, la teoría constitucional peruana giro en torno a la búsqueda del orden que se había carecido durante gran parte de las primeras décadas de la república. En ese sentido los principales pensadores constitucionales, como Silvestre Pinheiro, Bartolomé Herrera, José María Quimper, Toribio Pacheco y otros, asumen una concepción de que las constituciones que se elaboraron en el país sirvieron para

organizar al naciente Estado republicano, de acuerdo al pensamiento vigente de la época, donde lo fundamental era lograr una adecuada organización de los poderes del Estado, y posicionar la idea del bien común en favor de la comunidad, sin promover el individualismo liberal. Las diferentes constituciones del siglo XIX, así como los proyectos que se presentaron, tenían esta característica, donde no se inclinaban por crear valores superiores que de garanticen los derechos fundamentales (Mesia, 2012, p. 352).

Por lo tanto, la constitucionalidad peruana no está marcada por el contrato social planteado por el *Iusnaturalismo* vigente, sino influenciado por los designios de del mantenimiento del orden. Esta idea sigue la tradición europea, señalada por Benjamín Constant, que entendía a la Constitución como una fuente articuladora de los poderes del Estado, por ello, según su opinión, la legitimidad política reside en las autoridades. Para evitar la crisis de falta de institucionalidad era necesario establecer ese nuevo orden, marcado en un régimen presidencialista. Este *iusnaturalismo* del siglo XIX plantea la libertad individual y la razón en el derecho natural, ello permite entender la importancia de la defensa del derecho a la propiedad, a los contratos como parte importante para poder organizar a la sociedad, en la búsqueda del ansiado bien, pero respetando las tradiciones, sea la autoridad de un líder o el poder de la religión no deben ser perjudicados. Por ello, en esta tradición del derecho del siglo XIX, la búsqueda de la legitimidad moral era significativa, por esta situación en el derecho peruano del siglo XIX, no hay un acercamiento a los grandes pensadores del liberalismo, como Adam Smith, John Locke, pues lo que ha conseguido es encapsular las ideas liberales en los parámetros de los valores tradicionales, con ello el derecho del siglo XIX contribuyó a evitar la democratización de la sociedad.

Esta situación será clave para poder entender porque los padres de la patria se encargaron de hacer normas legales, proyectos de constitución que no fueran contra la realidad, no pueden haber innovaciones innecesarias que pudieran ir contra el orden de las clases gobernantes, es decir no se promueven las libertades individuales, ni la igualdad natural. De lo que logra realizarse es hacer una conciliación entre lo tradicional y la modernidad, tiene que trabajarse de una manera adecuada una serie de conceptos, por ejemplo la libertad, que no es lo mismo que plantean los liberales,

ya que es visto como algo subversivo; la igualdad fue trabajada como un concepto alejado de la realidad social, con la finalidad de evitar desmanes y demandas, por ello las leyes deben ser regidas en un campo neutro, porque de lo que se trata finalmente, es tener un Estado debidamente diseñado por las normas jurídico legales, es por ello que se explica la importancia de poder elaborar constituciones que se encargue de normar este equilibrio entre lo moderno y lo tradicional.

### **La modernización tradicionalista**

El siglo XIX es una etapa de grandes contrastes ya que la aparición del liberalismo transformaba a la sociedad occidental, inoculando en ella la idea del progreso y de cambios. En nuestro país, la modernización no seguirá el camino propuesto por el occidente capitalista, es decir, no supondrá una modificación de los patrones de comportamiento social; esto supone que la clase dirigente peruana elude las reformas que supongan afectar su posición y estatus, no aceptan que se cambie el derecho, las creencias, la religión; asimismo, lo que se tiene en las relaciones económicas, es seguir el cultivo de la fidelidad del trabajador hacia el patrón, como en la época colonial, mas no se encargaba de fomentar la competencia de aquella masa laboral.

Lo que se tendrá, producto de la modernización tradicionalista, es la sobrevivencia del orden social que sigue excluyendo de la ciudadanía a las mayorías; en este caso hay una gran parte de la población que no tiene acceso al voto, por lo tanto, no pueden participar de las decisiones, pero se les reconoce la categoría de peruanos; de la misma forma, se establecen libertades pero que enmarcadas dentro de los límites que proponen los legisladores. Esta modernización tradicionalista es impostergable, ya que la élite, que apuesta por estas ideas, tiene ante sí a una enorme población inmersa en el tradicionalismo, y sigue postergada, tanto en la teoría, como en la práctica. Surge una nueva aristocracia que se dedica a imitar los patrones que provienen de occidente; en los escritos constitucionales puede apreciarse esta circunstancia, pues siempre realizan el parangón con los acontecimientos que han ocurrido en EEUU, Inglaterra y Francia; producto de ello, en el plano económico, se promulga un nuevo código comercial, civil, además, de toda una serie de normas legales que expresan esta modernización, pero manteniendo la estructura social

tradicional. Nuestras clases políticas tradicionales de la época, tanto liberales como conservadores, siguen impulsando este modelo que beneficia a una minoría, perpetuando las conductas discriminatorias, encareciendo el costo de vida de Lima, y va forjando dos realidades en el país: *la urbana costeña*, que se inserta poco a poco a la modernidad, y *la rural serrana*, que continua con las formas de dominación tradicional y arcaicas: es el inicio de las grandes disparidades que golpean al país. No hay un camino hacia el progreso, lo que se mantienen son patrones tradicionales de dominación; por lo tanto, es una estrategia de adaptación para poder adaptar el liberalismo de mediados del siglo XIX. Es la introducción de ideas individualistas, como la defensa del derecho a la propiedad, la tolerancia religiosa, la abolición de privilegios estamentales, que fueron con el objeto de liberalizar la propiedad de la tierra para la nueva élite, mas no supuso una igualdad a todos los integrantes de la sociedad porque no se rompió los moldes de la dominación tradicional.

### **Teoría de la ciudadanía**

La ciudadanía moderna es una categoría social construida por la teoría sociológica la cual la define como un concepto sociopolítico que es consecuencia del proceso de igualación de las condiciones sociales, políticas y de la participación en las acciones del Estado. Thomas Humprey Marshall en la obra **Ciudadanía y Clase Social** (1949) realiza el estudio clásico sobre la ciudadanía, donde menciona:

«...el elemento civil está compuesto por los derechos necesarios a la libertad individual –libertad de la persona, libertad de palabra, pensamiento y acción, libertad de propiedad y de contrato y el de derecho de justicia-. Este último derecho a defender y afirmar todos los derechos de uno en términos de igualdad con otros gracias al proceso de la ley...» (Marshall 1949:302-303).

El siglo XIX, por lo tanto, es testigo del fortalecimiento político de la ciudadanía, donde las libertades civiles se difunden en todo occidente. La pugna la encontramos en torno a la representación política que es una cuestión que solo atañe al sector burgués, que tienta la consolidación de la ciudadanía en la representación política. La circunstancia es que solo una minoría racional es la que está dispuesta a participar en el ejercicio del poder político. En esta circunstancia, se comprende que las libertades



civiles son esenciales en la construcción de la ciudadanía política y esto se demuestra con la participación de la población durante la década de 1850, en el levantamiento contra el orden político vigente, lo que desencadenó en la caída del gobierno de José Rufino Echenique en la guerra civil de 1854 – 1855; asimismo, en la etapa de la Convención Nacional de 1855, los diferentes escritos que circularon (panfletos, impresos y los proyectos constitucionales), apelaron a la conciencia ciudadana para cristalizar un nuevo orden que impulse el progreso del país. En la figura de demandar el apoyo de la población para la construcción de la ciudadanía, se exige que se otorgue una serie de oportunidades, donde es el Estado el encargado de lograr la satisfacción de las necesidades de la población, el cual incluye el otorgamiento de los derechos civiles; esta posición se encuentra impulsada por la prensa de la época. Por ello es importante que en los proyectos constitucionales, se trate de definir el pensamiento sobre quienes constituyen esta categoría de ciudadanos, quienes la pueden alcanzar y quienes no pueden ejercer tal categoría.

Hannah Arent en sus escritos nos presenta la forma de establecer la construcción de la ciudadanía en las distintas sociedades; para dicha autora, los espacios públicos son fundamentales para poder tener ciudadanos activos, es decir, individuos que han alcanzado la modernidad y que dan una completa relevancia a los compromisos cívicos que afectan a la comunidad política. Esto es importante, ya que estos compromisos revitalizan el pacto de los ciudadanos con su comunidad y a su vez, está más comprometido con la institucionalidad de la república. Para poder lograr aquel compromiso se recurre al debate público, pues en ese escenario, es donde se toman en cuenta la agenda política que impulsa la colectividad, y de esta forma, se consolida la construcción de la ciudadanía en el país.

### **Teoría del republicanismo**

Durante los últimos años, una de las teorías que ha cobrado notoriedad en los estudios sobre los inicios de las noveles repúblicas latinoamericanas, es sobre el republicanismo, el cual sostiene que los nuevos Estados al proclamar sus respectivas independencias, adoptaron el modelo republicano. Según las lecturas que se han realizado, este republicanismo era apreciado como la única institución que proclamaba la existencia de los derechos de los ciudadanos, la separación de

poderes, las libertades civiles y establecía la constitución de un Poder Legislativo que se iba a encargar de asegurar los intereses de las nuevas clases dirigentes de las nuevas repúblicas. En esta propuesta, la república era vista como la fórmula política que aseguraba el sistema representativo de gobierno y consolidaba la independencia; por ello era necesario, que esta forma de gobierno asegure la institucionalidad de sus respectivas naciones. Para poder entender esta forma de organización republicana, el eclecticismo es esencial, ya que lo que se buscaba era asegurar un orden basado en la igualdad ante la ley, donde los ciudadanos estén en la capacidad de dirigir sus destinos. Para conseguir aquellas demandas debía posibilitarse una fórmula, en la cual, los ciudadanos puedan canalizar sus demandas mediante la representación política, que finalmente, era el mecanismo que permitía que las distintas comunidades aseguren su participación en la política; para ello, se requería la confianza entre los ciudadanos, ya que si se perdía, las instituciones podían salir resquebrajadas, afectando por ello la representatividad y la gobernabilidad del país.

Por ello el republicanismo se convirtió en la forma de gobierno que fue aceptado por las diferentes naciones sudamericanas, antes que el liberalismo. Con la promesa del republicanismo, es posible entender como como se aseguraba la libertad e igualdad de los ciudadanos a pesar de las limitaciones. Era imposible solicitar que en las nuevas repúblicas se impusiera libertades civiles a todos los integrantes, no obstante, lo que se practicó fue otorgar la ciudadanía y derechos civiles a las personas que tuvieran aptitudes, como saber leer y escribir, y solvencia económica. Solo este tipo de hombres están en la capacidad de poder construir el arquetipo de la república, estos ciudadanos son los que están dispuestos a anteponer sus intereses por los del país. (Brading, 2004, pp. 96 – 98).

Esta idea del republicanismo, tiene un impacto mediático, ya que permite entender porque la promesa del liberalismo no encajaba en el patrón para explicar las prácticas liberales en la región; la mítica lucha, entre liberales y conservadores durante el siglo XIX, finalmente puede entenderse, ya que los diferentes conflictos civiles, económicos, caudillismos que se desarrollaron en Hispanoamérica, se entienden con la idea republicana, sin embargo, el bien común de los habitantes del territorio, no es la idea del bien individual que proponían los liberales.

El liberalismo, como ideología que se impone en el país, será a partir de mediados del siglo XIX, cuando las ideas modernizadoras de las revoluciones liberales recién se establezcan, antes no, por esta situación la idea de tolerancia de cultos, abolición de fueros privativos y corporativos, recién se emprenden desde la segunda mitad de ese siglo. Por ello, la idea del modelo republicano encaja en el Gobierno el cual refleja los intereses de las corporaciones. En nuestro país las diferentes constituciones del país, lo primero que establecen es la garantía del orden republicano, en nombre de una pertinente organización que va sueña con el bien común de los habitantes de la república. No hay menciones, ni en los escritos de la época, de la búsqueda del enriquecimiento; incluso la idea de la religión no se encuentra reñida con el republicanismo, ya que aquella era necesaria para salvaguardar el bien común de la sociedad. Esto permite entender en el país, mucho de nuestros políticos que a pesar de tener ideas reformistas no deseaban una ruptura abierta con la iglesia católica, pues se aseguraba que la influencia de la religión aseguraría la virtud de los ciudadanos.

### **La República Corporativa**

Durante el siglo XIX la república peruana, al igual que las otras latinoamericanas, se encuentran organizadas bajo los cimientos de la tradición, no ha ocurrido una ruptura total con la herencia colonial, se conservaron los fundamentos económicos, como las haciendas, las minas; el orden social basado en las jerarquías se mantenían incólumes; en el ámbito legal se mantenía las mismas normas, la justicia no se había adentrado a las normas modernas, en fin toda una supervivencia del edificio del antiguo régimen en la república. El mantenimiento de cuerpos corporativos es parte de la república, es así que apreciamos la existencia de comunidades indígenas, la Iglesia, el ejército, profesionales con cierta preeminencia en la participación política, como corporaciones no como individuos. Es allí que el discurso liberal que exaltaba individuos no tendrá un éxito en nuestro país, no hubo un discurso consistente, así como también de los grupos conservadores, por forjar un proyecto inclusivo y democratizador.

Una de las investigadoras que trabaja este concepto es Alicia del Águila, quien en su tesis, *La República Corporativa* (2010) plantea que nuestro país durante el siglo XIX

la construcción de la república se realizó sobre el orden tradicional corporativo y sobre un país territorialmente fragmentado, donde a pesar de todo la elaboración de constituciones fue clave para el discurso político, ya que en ellas se puede apreciar como hubo una diversidad en las concepciones ideológicas, en particular del liberalismo, y ello se trasluce en el constante fraccionamiento y la debilidad de las clases dirigentes que no supieron imponer el orden adecuado, por ello se vieron desbordados por los militares y el desorden. De allí que resultó clave que se desarrolle la ciudadanía corporativa, término con el cual este Estado corporativo quiere integrar pluralmente a las élites de los diversos grupos con la finalidad de participar en el orden republicano. Esto encaja con la pretensión del republicanismo, es decir, de reconocer como ciudadanos a un cierto grupo de la sociedad, que contenga ciertos requisitos, esto también lo señala la autora, cuando comenta sobre la pluralidad de la ciudadanía corporativa (Del Águila, 2010, pp. 7- 26).

## **Organización de la investigación**

En el primer capítulo que se titula **El liberalismo y el republicanismo en el Perú en la década de 1850** se presenta una visión panorámica sobre cómo se encuentra las jóvenes repúblicas hispanoamericanas al iniciarse su vida independiente. Se presentará la visión del republicanismo en la región y su relación con el liberalismo. Lo que se va dar es una constante imitación de los modelos democráticos que son importados del occidente los cuales no guardan consonancia con la realidad del país. Por ello, dentro de la búsqueda de la justificación para nuestras jóvenes repúblicas, la idea de la soberanía popular será adoptada para justificar la ruptura y en el modelo republicano para poder justificar nuestra existencia, junta a las instituciones que se elaboraron. Por ello una de las cuestiones más estudiadas es la constitucionalidad que se encargó de enmarcar el ordenamiento jurídico legal de la estabilidad, limitando la ciudadanía a ciertos sectores, ya que la sociedad que se tiene no posibilita cambios radicales.

En el segundo capítulo, que lleva por título **1850 una década de conflictos y de constituciones**, contextualizo la década de 1850 con las etapas políticas que la caracterizaron. Como se produce el ascenso liberal al iniciarse la década, que tiene

las primeras elecciones modernas del país y que dan la victoria al general José Rufino Echenique cuyo régimen fue cuestionado por el *escándalo de La Consolidación* que desencadenó la guerra civil de 1854 y terminó con el triunfo liberal en alianza con Castilla. En este punto, se realiza un estudio panorámico sobre la Convención Nacional de 1855 y todo el debate que en torno a su convocatoria. La figura del general Castilla en estos procesos políticos son estudiados, ya que es innegable que él representa a un proyecto político que ha logrado tener un impacto mediático en la vida política del país, además este personaje, es interesante estudiarlo ya que el moviliza a los sectores populares en aquellas campañas políticas. Finalmente se verá el papel que se desarrolló en torno al Congreso Extraordinario de 1858 y toda la lucha que ocasiono con Castilla.

El tercer capítulo denominado **Las propuestas constitucionales de 1855: el camino a la Constitución de 1856** está dedicado a estudiar las aspiraciones de cambio constitucional que se dieron en 1855. En un primer momento se presenta la crítica que se dio contra la Constitución de 1839, una carta que fue objetada por su extremo conservadurismo, ya que planteaba garantizar las relaciones entre los diferentes actores políticos del país, situación que nos llevara a presentar quienes son los conservadores. Después apreciaremos como al estallar la guerra civil de 1854 se levantaron voces que solicitaron la reforma constitucional y que iban de forma paralela con los planteamientos liberales. La consolidación de la democracia, conceptos como libertad, opinión, soberanía, progreso debían hacerse extensivas al resto de la sociedad. Además, había que hacer una reformulación de los poderes del Estado, otorgándole un mayor peso al Legislativo para que sirva de contrapeso a los otros poderes. Finalmente el capítulo estudia la Constitución de 1856, donde se señalaran las fortalezas y debilidades de este documento político, que sin duda alguna, su promulgación tuvo muchos comentarios, tanto de los sectores liberales como de los conservadores.

El cuarto capítulo titulado **La construcción de la Constitución de 1860. Los proyectos y sus planteamientos** se indican, en una primera parte, los argumentos que se lanzaron para reformar la Constitución de 1856, la cantidad de escritos que incidirán en las incongruencias de la Constitución; luego, se señalaran cuáles fueron los puntos más críticos y todo el debate que se organizó por la defensa de los

privilegios corporativos, y la feroz crítica a la descentralización y a las municipalidades. Posteriormente, se analiza los proyectos constitucionales de Felipe Pardo y de Bartolomé Herrera, quienes son la expresión del conservadurismo triunfante, realizó la Constitución de 1860 (de tipo conservador), pero con una serie de detalles, que mantuvo partes del programa liberal.

# **Capítulo I: El liberalismo y el republicanismo en el Perú en la década de 1850**

## **1. La búsqueda del orden en América Latina**

La década de 1850 es una década de constantes cambios políticos en el país. Nuestros liberales llegan a tener una connotada presencia política y se sienten determinados a imponer una serie de cambios en nuestra república, con la finalidad de poder alcanzar la modernidad, una nueva generación de personajes influidos por el liberalismo: ellos se consideran decididos a implementar las reformas que lleven al cambio. Es una tarea ardua y difícil, pues la pesada herencia colonial no ha podido ser cortada de raíz, dado que se sigue con un esquema de marginación contra las poblaciones mayoritarias (indígenas y castas). A pesar de poseer un discurso democrático, la realidad era que el país se asentaba en una compleja situación de exclusión, fomentada desde el discurso constitucional, ya que lo único que sirvió fue para justificar legalmente el control de las elites criollas, dejando a un lado a las mayorías, lo que significó que se procedió al impulso de la modernidad tradicionalista (Rouquie, 2011, p. 20).

Una serie de ideas heredadas de la ilustración y que serán aplicadas en nuestros territorios, como la soberanía popular, empezaron a servir como base para justificar la ruptura con la metrópoli hispánica, pero también valieron a las clases dirigentes criollas para legitimar el orden que lograron recrear donde el lenguaje legal clave fue que la soberanía se encargaría de derogar los privilegios, y se procedió a la promoción de las libertades civiles y al establecimiento de la separación de poderes. Eso se apreció en las primeras constituciones del país (1823, 1828, y 1833) las cuales siguieron el camino marcado por la necesidad de transferir el poder a la nueva clase dominante; es decir, un grupo de ciudadanos, con sentido de virtud y sacrificio, debían guiar inicialmente la República en el camino a la búsqueda del bien común y la ampliación de la ciudadanía otros sectores. Hay toda una serie de estrategias para adaptar las nuevas ideas extrapoladas de occidente, a nuestro sistema tradicional; sin

embargo no hubo un impulso por crear algo nuevo, la nueva forma de gobierno republicano no implantó la democracia liberal.

Esta situación es perfectamente justificada mediante la celebración de elecciones, que nada de democrática tuvieron, pues los encargados de participar en aquellos procesos electorales (1829, 1833, 1840, 1845 y 1851), fueron los denominados ciudadanos, que eran vecinos, residentes, con propiedades, además de alfabetos. Por lo tanto, los únicos capacitados en participar en estas elecciones eran los sectores que se encontraban en la capacidad de ejercer su racionalidad en beneficio de la república. Era una situación claramente restrictiva contra los sectores populares, los cuales los calificaban de no hacer uso de la razón y por ello son susceptibles de ser manipulados por algún sector en disputa por el poder.

Una situación que es interesante en destacar de nuestros pensadores de la primera mitad del siglo XIX es que en su idea de poder construir una nueva realidad política en el país, van a buscar imitar los modelos democráticos liberales- Este es el punto de partida que ha ocasionado una serie de conjeturas y errores, por la creencia de que el liberalismo es la ideología que siempre ha regido al país desde la independencia; esto es parte del mito fundacional de las nuevas repúblicas. Se ha señalado que esta ideología era muy artificial para el desarrollo de nuestro país, pues contravenía constantemente el orden social vigente. El mito del siglo XIX trata darnos a entender ello y se ha fortalecido porque el liberalismo no ha logrado articular una base de apoyo social fuerte por lo que era considerado de ir contra de la realidad de los nuevos estados. Lo cierto es que el liberalismo como ideología política y económica, me atrevo a decir, recién se inserta con éxito a mediados del siglo XIX, cuando América Latina logre insertarse de lleno a la »globalización capitalista del siglo XIX, recién allí importará, con relativo éxito las bases del liberalismo.

La emancipación nos trajo un vacío de poder, que debía ser ocupado con nuevas instituciones, funcionarios, y una legitimidad construida, no necesariamente bajo las bases de la democracia, ni del igualitarismo. Santiago Távara, uno de los más importantes estudiosos de los partidos políticos peruanos del siglo XIX, escribió la siguiente: « (...)es de destacar que la ignorancia y la inexperiencia la que abunda al comenzar el estado republicano (...)» (Távara, 1951, p. XLVI). En esa labor, los nuevos ciudadanos que han surgido con la ruptura política deben trabajar con mayor



fuerza y voluntad para construir un nuevo orden. ¿Quiénes son los ciudadanos en este orden? Definitivamente son hombres que tienen una serie de capacidades, como ser alfabeto, tener moral y honra y un capital económico. Son personas que deben contribuir a luchar por el bien común de las diferentes poblaciones, deben forjar una forma de gobierno adecuada, en este caso es la república, el cual ha buscado a lo largo del siglo XIX, a través de la ley, la construcción del bien común. Es por ello que los diferentes gobiernos que se establecieron en la región, constantemente han buscado reflejar la voluntad de sus dirigidos. Esto se ha tratado de instrumentalizarse desde las diferentes constituciones.

La primera ruta de nuestra vida republicana, que va de 1821 a 1844, es el derrotero de encontrar la justificación jurídica legal de nuestra existencia y la construcción de instituciones, por ello es que cuando se da la aparición de las repúblicas hispanoamericanas, que fue uno de los grandes acontecimientos del siglo XIX, el origen de todo gira en torno a la idea de la soberanía popular, por ello adoptaron las formas de gobiernos democráticos. Este argumento será clave para poder justificar la ruptura con la metrópoli colonial, ante el vacío de poder ocasionado por la independencia. Los dirigentes criollos del continente apreciaron en la democracia, una fuente legal para encarar la nueva era de la modernidad, es por eso que dentro de esta construcción de las nuevas repúblicas era imprescindible que las diferentes constituciones que se van a elaborar emplearon la idea de la soberanía popular y en nombre de ella se justificó la ruptura con el pasado colonial, se establecieron las libertades civiles y la separación de poderes. En todo Hispanoamérica, el final del antiguo régimen, aparentemente debía traer una nueva era de orden y prosperidad, pero lo que va a venir en las primeras décadas de la vida republicana serán grandes convulsiones políticas, donde el fenómeno del caudillismo azotó al continente, y el rumbo ideológico será también clave para poder justificar esta nueva era.

Eran las constituciones las que debían convertirse en el sostén de esta nueva era, así tenemos que se van a promulgar muchas de ellas con la finalidad de establecer una nueva era de democracia, pero lo que verdaderamente ocurrió fue la dar una serie de justificaciones legales y jurídicas que permitan la dominación de las nuevas clases dirigentes criollas. Se seguían proclamando las libertades y la igualdad para los ciudadanos de las nuevas repúblicas, pero lo que se va a dar es una transferencia de poderes hacia las élites criollas. El pueblo quedó marginado en esta primera etapa de

la construcción de la institucionalidad republicana, ya que no tenía las suficientes condiciones para poder participar en la vida política de sus respectivos países (Rouquie, 2011, pp. 17 – 21). En el Perú la situación será de suma complejidad, pues la exclusión de la categoría de ciudadanos a las mayorías, no evitó que en los primeros años de la vida republicana algunos de esos sectores marginados puedan participar en la vida política del país; como bien se ha señalado en algunos estudios de la década de 1830<sup>1</sup>.

Cabe destacar que en esta construcción del modelo republicano las contradicciones son muy notorias. Por un lado, la democracia estaba embanderada por los sectores dirigentes, que plantean el establecimiento de la igualdad y la soberanía se convierten en los pilares de las nuevas repúblicas democráticas; sin embargo, lo real es que se tiene una sociedad mayoritariamente basada en las desigualdades heredadas de la colonia y una multiculturalidad muy notoria. El escenario era de incertidumbre.

Se tiene que construir un edificio institucional que legitime el liderazgo de las élites criollas, para ello, el liberalismo se convirtió en la herramienta ideológica que permita construir la institucionalidad y el sufragio se convirtió en el vehículo que le dio legitimidad a los gobernantes, por ello la práctica electoral fue un elemento clave de la formación de las instituciones.

Cuando se estudia los diferentes derroteros que siguieron las naciones hispanoamericanas para legitimar el poder de las élites en las nuevas democracias del siglo XIX, el sistema representativo es una idea que estará presente en todas sus constituciones. Además, debe apoyarse en el sufragio como ya se comentó. En esta circunstancia uno de los temas que causó grandes debates era el derecho al voto, pues la situación en todas las repúblicas eran las mismas, ¿Quiénes debían votar? ¿Qué requisitos debían tenerse? El drama es que las mayorías no son consideradas con la suficiente capacidad para poder emitir el sufragio. Resulta importante entonces las ideas que se van a establecer porque se empieza a señalarse que solo los ciudadanos son los capaces de emitir su voto y para serlo debían poseer propiedades, como lo señala Benjamín Constant. El ciudadano que es solicitado en las diferentes

---

<sup>1</sup> Cecilia Méndez en su obra “La república plebeya” señala que en la provincia de Huanta durante la década de 1830, algunos connotados jefes guerrilleros de origen popular como Tadeo Choque, José Antonio Huachaca entre otros, le fueron dados la categoría de buenos ciudadanos. De esta manera Méndez nos presenta estas complejidades del liberalismo peruano.

repúblicas hispanoamericanas, es un hombre que tiene la categoría de **ciudadano activo**, este tiene la capacidad de poder racionalizar sus acciones, consciente de elegir y gobernar. La situación nos lleva a reflexionar que no es una democracia liberal la que quieren experimentar las clases dirigentes criollas, al menos hasta mediados del siglo XIX. No hay una completa búsqueda del liberalismo, tal como lo conocemos.

Cuando se estudia los diferentes derroteros que siguieron las naciones hispanoamericanas para legitimar el poder de las élites en las nuevas democracias del siglo XIX, el sistema representativo es una idea que estará presente en todas sus constituciones. Además, debe apoyarse en el sufragio como ya se comentó. En esta circunstancia uno de los temas que causó grandes debates era el derecho al voto, pues la situación en todas las repúblicas eran las mismas, ¿Quiénes debían votar? ¿Qué requisitos debían tenerse? El drama es que las mayorías no son consideradas con la suficiente capacidad para poder emitir el sufragio. Resulta importante entonces las ideas que se van a establecer porque se empieza a señalarse que solo los ciudadanos son los capaces de emitir su voto y para serlo debían poseer propiedades, como lo señala Benjamín Constant. El ciudadano que es solicitado en las diferentes repúblicas hispanoamericanas, es un hombre que tiene la categoría de **ciudadano activo**, este tiene la capacidad de poder racionalizar sus acciones, consciente de elegir y gobernar. La situación nos lleva a reflexionar que no es una democracia liberal la que quieren experimentar las clases dirigentes criollas, al menos hasta mediados del siglo XIX. No hay una completa búsqueda del liberalismo, tal como lo conocemos.

## **2. La republica contra la democracia**

Estudiar la constitucionalidad de las diferentes jóvenes republicas hispanoamericanas es importante y en nuestro caso en particular, pues nos encontramos enfrentando a uno de los principales dramas políticos, que era la de organizar de forma pertinente a la república, así que había que construir instituciones duraderas y definir la forma de gobierno que favorezca los verdaderos intereses de la nación; de esta manera, se van

a enfrascar en debates constitucionales para justificar el camino adecuado para el país. En esta construcción, nuestros legisladores van a tomar modelos prestados de occidente, el norteamericano, el francés y el británico; es decir, los legisladores van a imitar estos modelos creyendo que era la panacea para una adecuada organización.

La república fue la forma de gobierno aceptada y defendida por diversos pensadores de la independencia (Francisco Miranda, Simón Bolívar, Manuel Lorenzo de Vidaurre y José Faustino Sánchez Carrión) y quienes presentaron un modelo de organización republicano que aprobado en toda la región. Empero, en Latinoamérica se llamaría una *república epidérmica* porque de fachada adoptaron una serie formas republicanas liberales burguesas como gobiernos electivos, separación de poderes, derechos individuales y constitucionales; pero la realidad era que se mantenía desigualdades y privilegios que terminaban condicionando su desarrollo. (Aguilar, 2002, pp. 72 – 74). Este ideal del republicanismo permite satisfacer las necesidades de los grupos dirigentes quienes heredan la pesada legislación colonial que sirvió a sus intereses, pero no hay un completo programa de transformar la economía, la política y la sociedad. Habría que esperar la década de 1850 para poder ver como se introducen las reformas.

Las constantes innovaciones que se realizaron en las nuevas repúblicas debieron hacerse en nombre de los nuevos valores liberales, pero con la predominancia de la élite criolla se buscó diversas alternativas para poder excluir a las mayorías y evitar la consolidación de la democracia burguesa liberal, la cual tampoco era una opción. Los responsables en articular el país, a pesar de todas las críticas que se les puede hacer, se preocuparon por darle al país una administración y fundamentos jurídicos que permitan construir el edificio institucional. El problema será cómo mantener la rígida estructura social heredada de la colonia en la nueva república porque el único cambio que se dio fue en la forma de gobierno, mientras que las estructuras socioeconómicas en nada fueron alteradas; por ello, uno de los dilemas de nuestras clases dirigentes del siglo XIX es la búsqueda de la legitimidad que necesariamente tenía que venir del pueblo.

En esa encrucijada de conseguir la legitimidad, nuestros dirigentes, sean liberales o conservadores, se encargaron de buscar una serie de mecanismos que les permitieran excluir al pueblo de las decisiones del país. Debe tomarse en cuenta que el sistema

democrático era imposible de hacerse realidad con el panorama social existente, es por ello que se caerá en constantes aberraciones del sistema democrático. Empieza a plantearse que la racionalidad debe ser empleada para definir quiénes pueden participar en el sistema político, así en nombre de la razón se inicia la exclusión de los sectores populares. De esta manera, la mayoría de la población son apartados del rango de ciudadanía y la soberanía popular empieza a plantearse reside en la razón (Rouquie, 2011, pp. 41 – 43). En un país como el Perú esta era muy notorio, pues los grados de contradicción entre los diferentes grupos sociales devinieron desde las primeras etapas de la vida republicana, donde la prensa y los próceres de la república eran conscientes de la caótica situación que habíamos heredado. No se logró formalizar siquiera algún proyecto político común e los años iniciales de nuestra vida republicana (Rey de Castro, 2010, pp. 105 – 107).

Durante la segunda mitad del siglo XIX los ideales liberales son más consistentes que después de la independencia, ahora si podemos decir hay una clase liberal que está dispuesta a iniciar una serie de transformaciones en la república. Es cuando el discurso de educar a las masas es más convincente ya que se empiezan a plantear una serie de metas dentro de las cuales se traza educar al soberano pueblo, pero hasta que logre darse esa solución, continuará la soberanía de la razón. El triunfo de los liberales en Las Palmas en 1855 posibilitó introducir la reforma en el sector educativo. Fruto de ello es la promulgación del reglamento de educación de 1855 que ponía fin a la anarquía que reinaba en la educación peruana y se establece una educación integral y su perfeccionamiento en lo moral. Se reglamenta el funcionamiento de las escuelas, colegios y universidades de la República; asimismo, se norma las atribuciones del Estado en materia educativa.

Esta mejora en la instrucción educativa, definitivamente seguía el camino de formar cuadros civiles que puedan apoyar al Estado en sus diferentes labores para poder realizar el buen gobierno, pero, en realidad se trató de servir con mayor eficiencia a las nuevas elites que han surgido a mediados del siglo XIX. Además, el liberalismo oligárquico que triunfó en todo Hispanoamérica, en nombre de la soberanía del pueblo, instrumentalizó procesos electorales que le permitieron justificar el control de sus respectivas naciones. En este contexto, se observó irregularidades en el proceso electoral, acompañado del uso generalizado de la violencia y la corrupción, y esto desde la formación de los registros electorales, la lista de electores, y

finalmente de como los gobierno de turno se inclinaron por algún candidato Y son los prefectos los que coadyuvaban en ello.(Ragas, 2005, pp. 221 – 227).

En el Perú de mediados del siglo XIX, la irrupción del liberalismo es fuerte, su programa político, educativo y económico es ambicioso, ya que de por medio está la idea de crear una ciudadanía, pero con una mayoría de la población que es vista como bárbaros y salvajes; es esta limitación es la que va detener las reformas sociales, de allí el drama de la modernidad tradicionalista, se quiere crear una república sin ciudadanos<sup>2</sup>, donde a pesar de todo, se necesita el voto popular, pues este será la justificación de los gobernantes, para dirigir el país; por ello se aprecia un incremento de la participación política de los sectores populares en las elecciones de mediados del siglo XIX, desde las elecciones para la Convención Nacional de 1855 se manifiesta esta participación. Es un espectáculo que también es aborrecido por parte de los liberales, quienes son conscientes de las dificultades que ocasionaron, pues abrir la puerta a sectores poco ilustrados, se debilita la relación entre el interés real y la razón, ocasionando una convulsión en el rígido orden social (Peloso, 2001, pp. 6-7).

En busca de la *razón política* se van a cometer estas inconsistencias del sistema democrático liberal, que dicho sea de paso solo quedó en el nombre, pues la verdad lo que aconteció fue la ejecución de delitos con ayuda de los prefectos, pero también, de la iglesia ya que los registros cívicos eran confeccionados por el cura de la localidad que aumentaban el número de votantes con la inclusión de muertos y pobladores de pueblos lejanos. Las elecciones traían constantes episodios de violencia, a pesar de la prohibición expresa de portar armas en el día del sufragio, las peleas y trifulcas por las mesas de sufragio eran constante. Luego, todo terminaba en el Congreso que finalmente proclamaba al ganador (Ragas, 2005, 223 – 225). A pesar de los inconvenientes, las elecciones eran necesarias porque eran espacios donde los diferentes gobiernos republicanos, obtenían la legitimidad; pero, no eran espacios para la democratización.

---

<sup>2</sup> Este es el nombre de un capítulo del texto “Buscando un Inca” de Alberto Flores Galindo, donde refuerza la idea de que un grupo reducido controla un vasto y desarticulado país, la alianza entre la emergente burguesía costeña y/o limeña, junto con los hacendados serranos les permitió hacerse del control país.

Esta ficción electoral, representativa y democrática son parte de la ritualidad que los liberales implementaron con mayor consistencia desde mediados del siglo XIX, pero lo que realmente se sigue teniendo son las ambigüedades de la sociedad por un lado y por otro se aprecia la implementación de normas constitucionales que no dan una satisfacción adecuada de los derechos sociales, pues se pudo ocasionar un desborde social, en el Perú, las masas populares irrumpen con mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XIX y con el triunfo de Manuel Pardo se atestiguara esa realidad. Esta distorsión de la política latinoamericana nos colocó en dos actitudes que se confrontan: el *país legal* contra el *país real*, en la cual se pondrá en funcionamiento reglamentos y constituciones que eran la creación de un reducido sector de la élite criolla, incluyese a los liberales y conservadores, que no tenían sintonía con la realidad social.

Es por ello que la cultura política que se tiene a mediados del siglo XIX, nos permite apreciar las conductas concretas, actitudes y un marco institucional donde se desarrollan una serie de procesos histórico políticos (Knight, 2006, pp. 42 – 44) que nos confirma que en la realidad latinoamericana, se hace necesario contrastar a los dos grupos que expresan sus pensamientos: por una lado se hallan los *reformistas*, aquí podemos hallar a los liberales, pero también a conservadores moderados, quienes son conscientes de promover una serie de cambios mediante el ejercicio de las libertades. Aquí por ejemplo, tenemos a José María Quimper quien planteó que las libertades individuales son las que permiten establecer un orden democrático, y esto ocasionaría un impacto en el establecimiento del orden y progreso. Estos escritores buscan también impulsar la instrucción en los diferentes sectores sociales, ya que como se dijo, se tendría elementos civiles aptos para colaborar en la construcción de la república.

Por otro lado tenemos a los grupos, que son tildados de *pesimistas*, donde encontramos a conservadores pero también hay aquí liberales moderados, quienes aceptan que en la sociedad no puede darse un igualitarismo total. José María Quimper, asume que la igualdad no es completa y que son necesarias las jerarquías para evitar el caos y la anarquía. Otra figura mediática de este grupo, es el obispo Bartolomé Herrera quien en sus discursos comenta que el orden no está en manos del pueblo porque este no tiene la capacidad de poder dictar leyes, por ello en ese discurso la participación popular no tiene importancia:

« (...)si es necesario de todos modos el consentimiento, no hay porque negar, puede decirse, que el pueblo delega la soberanía; o esta es una cuestión de meras palabras, no lo es porque consentir no es delegar, porque el consentimiento es condición, mientras que la delegación se ve como el origen de la soberanía (...) » (Herrera, 1934, p. 29).

En esas palabras que Herrera nos deja se trasluce parte de esa idea de delegar a personas capaces el gobierno. Estos poseen el verdadero sentido de la razón. Para ellos la gran mayoría de la sociedad no está preparada aun para ejercer la democracia liberal y lo que importa es poder adaptarse a la realidad social del país; esto implica que debe aceptarse los regímenes autoritarios. Távara pone el ejemplo de Diego Portales en Chile, el cual era visto como el prototipo de gobierno autoritario, donde la población se sometió, no a la autoridad, sino al respeto de la ley. Se impulsó una revolución administrativa que cree un Estado debidamente edificado, es decir que debe contar con instituciones sólidas que trasciendan a las personas (Távara, 1953, p. LXVII – LXVIII).

Los sectores *pesimistas* o *conservadores* van a denunciar constantemente, a través del apoyo de la prensa, la inoperatividad de los distintos gobiernos, para desacreditarlos. Uno de los hombres que figura constantemente en la prensa es el diputado Evaristo Gómez Sánchez quien lanzó duras críticas al gobierno de Castilla, especialmente a su segunda gestión, pues allí el liberalismo es fuerte. Sus constantes publicaciones inciden a demostrar los desvaríos constitucionales que se realizan en ese gobierno. Lo acusa de infringir las leyes y tomar al país como su botín; pero en el trasfondo se quiere tener una serie de gobiernos con poder y autoridad. Si hay que denunciar la debilidad de ellos, hay que hacerlo sin importar el costo político; esa situación es la que constantemente trae la inestabilidad a los sucesivos gobiernos y como la idiosincrasia de nuestros pueblos es sufrir constantes anarquías, hay que buscar a los hombres providenciales, que con la fuerza traerán orden.

La segunda etapa del general Ramón Castilla en el poder estatal fue una etapa de grandes cambios en donde se empezaría a imponer el orden liberal deseado y liderado por personajes liberales como como los hermanos Gálvez, José Simeón Tejeda y Manuel Toribio Ureta quienes fueron la clase intelectual que sirvió de manto a los militares para inocular en el país a la denominada *modernidad*



*tradicionalista*. En la prensa de la época, principalmente El Comercio desde 1848, se publicaron escritos que empiezan a exigir el orden y el respeto a la ley. A partir de 1855, con estos intelectuales liberales a la cabeza, se intentó establecer la república liberal, que si bien es cierto fueron luego apartados con el golpe de 1857, parte del imaginario político de los liberales se implementó en 1860. La presentación de los proyectos constitucionales de esos años son parte de la cultura política de la época, donde los denominados hombres del partido liberal o conservador pretendieron introducir en las constituciones y sus escritos, definir la libertad, la propiedad, la influencia de las costumbres y como estos deben servir para poder realizar un ordenamiento jurídico adecuado; por lo cual, la denominada *modernidad tradicionalista* se orientaba a los intereses del republicanismo, ya que de esta manera, se alcanzaría el bien común de esta propuesta, pero también tiene el manto liberal: la idea del progreso también está de la mano.

En los próximos capítulos apreciaremos con mayor precisión como se encuentra el país en la década de 1850, una etapa clave para el ordenamiento jurídico del país. Es una década de constituciones, y de estas convivieron en la mentalidad de los pensadores, y detrás de cada una de ellas, hay un relativo esfuerzo por imponer el orden, uno de los bienes más buscados.

## **Capítulo II:** **1850 una década de conflictos y constituciones**

### **1. El ascenso de los liberales y la Convención Nacional de 1855**

El inicio de la década de 1850 estuvo marcado por una aparente estabilidad política. Después de la violenta “Anarquía Militar”<sup>3</sup> había ascendido a la presidencia de la República el victorioso general Ramón Castilla quien en su primera gestión de gobierno (1845 – 1851), logra establecer la ansiada estabilidad que permitió una sucesión presidencial relativamente tranquila que solo se vio perturbada por la campaña electoral de 1851, en donde el enfrentamiento de clubes políticos, hicieron que dichas jornadas se tornen inusitadamente violenta y frenética, y todo por la sucesión presidencial. Parecía lejano aquel reciente pasado anárquico. Era toda una novedad apreciar como el mecanismo electoral preparaba el relevo de gobierno, con ello se confirmaba el establecimiento de una nueva etapa de orden. Eran las primeras elecciones que expresaban el camino a la modernidad mientras que la efervescencia política iba a posibilitar la ampliación de la acción política, donde los sectores plebeyos fueron partícipes del proceso. La campaña electoral de 1851 enfrentaba a una serie de candidatos que tenían el apoyo de sectores de la sociedad. Esto fue posibilitado por la ampliación de la ciudadanía a los sectores indígenas y mestizos que se dio en 1849.<sup>4</sup>; Durante la contienda electoral, por un lado, tenemos la candidatura del comerciante y hacendado Domingo Elías, que junto a sus seguidores establecieron el *Club Progresista*, que tenía como lineamientos en suel instituir un gobierno basado en el elemento civil, que promoviera los valores de la democracia liberal donde era necesario que dé una constitución que formalice dichos logros, además, debe haber una fuerte opinión pública que señale el camino de la modernización. Para complementar esta tarea tenían su periódico llamado *El*

---

<sup>3</sup> Se denomina así al periodo comprendido entre 1841 y 1845 donde el país fue gobernado por seis presidentes, salidos de las filas del ejército y llevaron al país a un completo caos, dejando un casi nulo papel a la búsqueda del progreso del Perú.

<sup>4</sup> Alicia del Águila en su texto del 2013, tomando como referencia a Basadre, comenta que fueron incorporados a la ciudadanía indígenas y mestizos, casados o mayores de 25 años, que no sepan leer y escribir. Ellos podían ejercer su derecho de sufragio en las elecciones.

*Progreso* que se encargó de difundir sus planteamientos y doctrina ante la opinión pública urbana.

El otro candidato que aparece en escena es el general José Rufino Echenique, quien recibe el apoyo del gobierno, por ello en la campaña plantea la defensa de lo conseguido por Castilla; para ello, se había organizado el club de la *Sociedad Conservadora de la Constitución y de la Paz*, cuya maquinaria electoral contaba con el apoyo de los prefectos provinciales, acompañado del diario *El Rímac* que apoyaba sus iniciativas (Aljovín, 2005, pp. 60-62). Había también un tercer candidato en disputa, el general Manuel Ignacio Vivanco, que no logró consolidarse en la campaña electoral, salvo en la provincia de Arequipa, donde tenía una fuerte influencia.

La jornada electoral otorgó la victoria al candidato oficialista, que se dispuso a gobernar con el respaldo de la población y del Congreso del momento (Casos, 1854, p.5). La línea ideológica de este gobierno fue de cariz conservador gozando con la legitimidad que le dieron las elecciones, la situación política se vio alterada por una serie de reclamos contra el presidente Echenique, ya que al asumir sus funciones se desarrollaron algunos alzamientos promovidos desde la ciudad de Arequipa que fueron rápidamente sofocados. Una vez controlada la situación, el Gobierno procedió a establecer los lineamientos constitucionales basados en la Constitución de Huancayo, es decir se siguió promoviendo una política centralista donde la figura del ministro Juan Crisóstomo Torrico se tornó confrontacional contra los críticos del gobierno; además había un Congreso dócil a los designios del Ejecutivo, que se complementaba con el ruido político que provenía de los liberales quienes adjetivaban al Gobierno de faltar a las libertades y realizar una gestión con claras prácticas autoritarias.

La fragilidad del Gobierno salió a relucir con el escándalo de la consolidación, el cual le restó credibilidad al presidente y a sus funcionarios. La crítica de los liberales fue cada vez más fuertes, tanto así, que se pusieron en evidencia que alrededor de dos mil personas, allegadas al círculo del gobierno, se habían beneficiado con aproximadamente 24 millones de pesos, cifra muy significativa. Una de las preguntas recurrentes por aquellos días era: ¿Y porque el presidente Echenique no hizo nada por evitar esta terrible corrupción?

Definitivamente el tradicional intento de querer mantener la estabilidad política a costa de formar una red de clientelaje, que incluía la corrupción, llevó al Gobierno a pasar por alto las denuncias (Quiroz, 1987, p10).

La crisis se profundiza cuando Domingo Elías denunció, en una serie de cartas que publicó en el periódico El Comercio del mes de agosto de 1853, como se lleva a cabo el reparto de vales y como se falsificaban aquellos documentos para poder conseguir mayores cifras de las que se debía originalmente, esto causó una indignación de la opinión pública contra el gobierno. En los días siguientes, el presidente Echenique responde a las cartas de Elías, acusándolo también de haber participado en aquel festín, además de pedir favores al Gobierno. Esta acusación fue rechazada por el comerciante quien al año siguiente, en 1854, en la provincia de Ica realizó una rebelión contra el Gobierno, cuya escalada se tornó en la vasta insurrección liberal de 1854 que buscaba derribar la gestión de Echenique.

Son los liberales quienes van a tomar las riendas de la revolución, sus ideales serán abrazados circunstancialmente por el expresidente Castilla, el general San Román y personajes del ámbito civil como el periodista Fernando Casos y entre otros. Ellos abrazaron las banderas de la moralización y la búsqueda de reformar aquella sociedad tan conservadora y exclusionista. Habrá oportunismo político de algunas personalidades de la época, pero eso no pone en duda los deseos de los liberales por impulsar reformas que lleven al país a la era del progreso y la modernidad. Los liberales planteaban la necesidad de la reforma constitucional; es así que se pone en tela de juicio la Constitución de Huancayo (1839), la cual era acusada de perennizar el autoritarismo de los militares, de complicar el funcionamiento del aparato estatal, obstaculizar el desarrollo y el avance del país. De esta manera, la precariedad afectaba a todas las instituciones políticas, los favoritos al régimen se habían adueñado de cargos estratégicos, como los cargos de prefectos y subprefectos, con los cuales habían accedido al control de las provincias y anarquizado el interior del país; por ello, esta situación debía cambiar urgentemente (Ulloa, 1854, pp. 13-14).

La fractura que había entre el Gobierno y el resto del país se manifestó en El Comercio del 5 de abril de 1854 donde se reproducía un pronunciamiento del periódico cuzqueño *Del Triunfo del Pueblo*, que había sido publicado el 18 de marzo

de ese año. En dicho pronunciamiento se denuncia que el presidente Echenique no ha sabido cumplir con la confianza que la nación había depositado en él, ya que había incumplido su programa político e instituido una tiranía que se encargaba de perseguir a los ciudadanos que manifiestan su malestar lo que desembocó en el destierro de los extranjeros por el mismo motivo. Asimismo, se enrostra que el presidente ha destruido las leyes fundamentales del país, además ha corrompido a diversos funcionarios del gobierno; esto es una demostración que las libertades, se encuentran gravemente amenazadas, ya que el gobierno en su afán de controlar a la ciudadanía, ha coactado la libertad de imprenta, presionando para que solo las publicaciones oficiales sean las que circulen. Es así que el comunicado cierra con esta frase: «...el pueblo tiene la facultad de deponer al empleado que no cumple con [la] legalidad y buena fe de los compromisos que ante el contrajo...» (El Comercio, 1854, 5 de abril).

El gobierno de Echenique también utilizó a la prensa para defenderse de los ataques liberales y de los diferentes pronunciamientos que acosaban al régimen. Las críticas apuntan a la conducta de algunas personalidades que encabezaban la insurrección, entre ellas destaca la figura del general Castilla, el cual es acusado que son sus ambiciones personales las que lo movilizan, su sed de poder lo ha llevado a sublevarse, influenciando y manipulando a la población. Otro personaje expuesto a la crítica es el comerciante Domingo Elías a quien se le acusa de querer aprovecharse de estas circunstancias, por ello su alianza con Castilla. En un remitido escrito por el mes de 1854, se espera que el gobierno de Echenique logre triunfar para poder acabar con las ambiciones de tales personas que están llevando al país hacia el desastre (El Comercio, 1854, 14 julio).

La guerra civil de 1854 – 1855 fue violenta y se dirimió en la batalla de La Palma (5 de enero de 1855) donde la victoria se decanta por el general Castilla. Esto repercute en el triunfo del liberalismo en el país. Durante la guerra se habían dado dos decretos emancipatorios que le dieron credibilidad ante los sectores populares: la supresión del tributo indígena y la liberación de los esclavos, con los cuales los liberales, y en particular la figura del general Castilla, quedaron como los impulsores de medidas que los acercaban a los sectores populares. La estrategia fue exitosa, a que miles de indígenas apoyaran la causa de Castilla durante aquel conflicto (Pinto, 2016, pp. 554 – 556). Los liberales procedieron a asumir el poder e iniciar su

programa de reformas que van a transformar el orden tradicional vigente. El objetivo es impulsar el programa del liberalismo republicano, que ya se exigía desde la independencia, es decir la república debe encargarse de crear las condiciones para que el ciudadano goce de la libertad e igualdad (Brading, 2004, pp. 128 -129).

Este ideal del republicanismo que ha sido examinado en México con mucho éxito para mediados del siglo XIX, ha sido también el caso de nuestros reformistas liberales, para quienes se aplica tal método de estudio, ya que esta situación se puede distinguir durante el desarrollo de la guerra civil, donde se habían dado dos medidas que buscaban crear nuevos ciudadanos: la abolición del tributo indígena y de la esclavitud de los negros. Estas reformas fueron, sin lugar a dudas, trascendentales para poder legitimarse ante la opinión pública y al pueblo, así tenemos a una nueva generación de liberales se había elevado en el espacio público, de esta manera se consolida una nueva generación de liberales, muchos de ellos de origen provinciano, tomaron el protagonismo de este liberalismo. Así tenemos a los hermanos Gálvez, Pedro y José, Manuel Toribio Ureta, José Simón Tejeda, Fernando Casos, Luciano Benjamín Cisneros, Ignacio Escudero, personajes que están sumamente deseosos de establecer las reformas, dejando el lado teórico y llevando a la práctica sus propuestas con la finalidad de implantar la modernidad.

El nuevo gobierno liberal se hizo denominar «El gobierno de la moralidad» que encargo la presidencia de la República a Ramón Castilla. Los diversos ministerios, fueron dirigidos por liberales como Pedro Gálvez (Justicia, Culto y Beneficencia), Domingo Elías (Hacienda), Manuel Toribio Ureta (Gobierno y Policía) y finalmente al general San Román (Guerra). En el ámbito del legislativo había que definir todavía la situación, es así que por decreto del 5 de febrero, el gobierno estableció la convocatoria a elecciones para elegir una Convención Nacional de representantes del país, que se encargaría de elaborar una nueva carta magna que logre repensar la política, reflexionar el papel del Estado en la sociedad y la aplicación de las y las medidas ad hoc. Para ello los debates serán claves ya que lo que se busca en ellos es lograr que se llegue a la mayor cantidad de sectores de la población para que se pueda consolidar la opinión pública (Aljovin, 2000, p. 103).

Una de las mayores novedades que trae las elecciones para nombrar esta asamblea constituyente y legislativas el establecimiento del sufragio universal

directo<sup>5</sup>, que a pesar de las críticas que se dieron por parte de la oposición conservadora, nos demuestra el deseo liberal de incluir a amplios sectores de la sociedad en el orden republicano. Se esperaba que los sectores de la sociedad apoyasen las reformas, forjando así un pacto silencioso, que de una manera u otra los legitimaría en el poder (Peloso, 2001, pp. 6-7).

Lo cierto es que estas medidas eran arriesgadas porque se alteraba el orden tradicional y el modelo corporativo quedaba resquebrajado por las reformas que se dieron. Esa situación anómala fue la que se desarrolló durante la campaña electoral para elegir a los diputados de la Convención y fue muy criticada, llegándose a denunciar una serie de irregularidades y excesos; las acusaciones que se hicieron era denunciar que aquellas elecciones se habían envilecido debido a la participación de los sectores populares, que son consideradas inferiores (Barriga y Álvarez, 1855, p. 69). Las críticas que se hicieron fueron una demostración de que los liberales intentaron construir una democracia efectiva; situación que no era extraña ya que por aquellos años esta se practicaban en las asociaciones cívicas y económicas, donde los que querían dirigir aquellas asociaciones debían debatir, ofrecer alternativas y luego informar sobre sus acciones durante su gestión (Forment, 2012, p. 17).

El año de 1855 es un año muy explosivo, políticamente hablando, pues aparte de esta convocatoria a las elecciones, se van a dictar una serie de sanciones hacia los militares que sirvieron al gobierno de Echenique. En este panorama de grandes transformaciones, uno de los poderes del Estado fue objeto de reformas este fue el Poder Judicial, donde el ministro Pedro Gálvez promovió cambios en la judicatura, especialmente, respecto al número de jueces, ya que estos debían estar en correlación con el número de Cortes de Justicia. Otra situación que se denuncia es con respecto al presupuesto de la República, especialmente, del periodo de 1854 - 1855, que había sido adulterado. Asimismo, en el plano educativo se aprecia el establecimiento del nuevo *reglamento de instrucción pública*, que desea implantar un orden en el sistema educativo. Ante tantos escándalos y falsificaciones de documentos ligados a *la consolidación*, se formó una comisión denominada la

---

<sup>5</sup> En aquellas elecciones no se exigiría los tradicionales requisitos de renta, profesión o saber leer y escribir. Los únicos que quedaban excluidos de aquel proceso electoral eran los que habían sido parte del gobierno de Echenique.

*Junta de Examen*<sup>6</sup>, que tenía la misión de investigar el escándalo de la Consolidación, que era denunciado en la prensa.

Es una etapa de grandes transformaciones que afectó a distintos ámbitos, especialmente el religioso, donde había una onda expansiva de políticas anticlericales que prevalecían en diversas naciones hispanoamericanas que abrazan el liberalismo de mediados del siglo XIX; si n embargo en el caso peruano a diferencia del mexicano no se llegó al ateísmo (Aguilar, 2011, pp. 140 – 141).

La prensa se convierte en un vehículo decisivo para poder formar opinión y ciudadanía y en ella se abordan los temas que generan una mayor controversia y cambios en los distintos sectores del país, y el tema religioso es el que genera la exacerbación política. En cuanto a la prensa liberal, se nota que a pesar de que son el grupo triunfante, no poseen una homogeneidad, ya que al interior de ellos existen divergencias. Por un lado se tiene a los denominados *radicales*, a los cuales se les acusa de fanatismo, ya que eran ellos quienes promovían una serie de cambios revolucionarios para la época. Desde los escritos y la prensa se tratará de impulsar cambios en una serie temas tan sensibles para el país, como lo fue el de la religión; desde aquellas tribunas que impulsan la cuestión de la tolerancia religiosa, como en el periódico el *Católico Cristiano* y la publicación de una serie de remitidos desde El Comercio que apoyaron dicha causa. Los sectores conservadores y tradicionales, ante esta afrenta a los denominados *intereses sagrados de la religión* responden con la publicación de *El Católico*, medio oficial que asumirá la defensa del catolicismo y opuesto a la posibilidad de establecer la tolerancia religiosa. La pugna en la prensa fue tan feroz que creo el caldo de cultivo para una confrontación abierta; por ello, el gobierno en la figura del ministro de Justicia, Pedro Gálvez, publicó una nota en *El Peruano*, donde recomienda a los prefectos del gobierno a controlar la información sobre asuntos de religión, recalca que estos asuntos debían discutirse en la próxima Convención Nacional (El Peruano, 1855, 27 junio), era situación que evidenciaba una dura pelea ideológica. La prensa liberal acato la medida del gobierno, todo lo contrario hizo la prensa conservadora que haciendo caso omiso de las advertencias

---

<sup>6</sup> El Peruano, 7 de febrero de 1855. En este número de este periódico se informa lo que se espera de esta Junta, que también es estudiada por Alfonso Quiroz en su historia de la Corrupción, pp. 182 – 183.



del gobierno siguieron publicando su defensa de la religión, razón por la cual el gobierno cerro por unos días el periódico *El Católico*.

Este debate será retomado en la Convención Nacional en los primeros días de octubre, cuando se ponga en debate la cuestión de la tolerancia religiosa en el país; donde se debatirán los dictámenes que presento la comisión de constitución, el informe de la mayoría resalta: « (...) la religión del estado es la católica apostólica romana. La nación la protege por todos los medios conforme al espíritu del evangelio (...)»<sup>7</sup>, mientras el informe de la minoría se destaca: « (...) el único culto público que la nación protege y mantiene es el católico apostólico y romano (...)»<sup>8</sup>. El debate en La Convención giro en torno de que si la religión necesitaba ser protegida por el Estado o no lo requería, en este sentido el diputado Ignacio Escudero plantea que la República como la Iglesia deben marchar por caminos separados, por lo tanto, no debe insistirse en imponer el compromiso de la protección de la religión por parte del Estado. Tras una serie de tensos debates, se decidió aprobar el dictamen del informe de la mayoría, que se plasmó en el artículo 4 de la constitución de 1856.

Esto es un ejemplo sobre como los liberales peruanos desde los espacios de la Convención Nacional de 1855, presentaron su visión de cómo organizar el país en la búsqueda por modernizar una sociedad anclada en las tradiciones coloniales, se trata de renovar el país, de darle nuevas bases jurídicas y legales en consonancia con el triunfante liberalismo, que es la ideología triunfante en toda Hispanoamérica; hay que señalar que la historiografía contemporánea, desde los estudios de Charles Halle<sup>9</sup> plantea que los denominados conservadores son catalogados como liberales y que hay un consenso, junto con los liberales, sobre las maneras en que hay que llevar a la nación a una nueva era de orden, progreso y estabilidad para modernizar la república, claro está dentro de los límites de la modernidad tradicionalista.

---

<sup>7</sup> Dictamen de mayoría propuesto por los diputados Juan Gualberto Valdivia, Santos Castañeda, J.B. Goyburu, José María Hernando, José Antonio Terry, Julián del Águila, Ángelo Cabero y A. de la Roca, que había sido presentado ante la convención el 18 de setiembre de 1855.

<sup>8</sup> Ese dictamen fue defendida por los diputados Julio M. del Portillo, Juan Bautista Zavala, Manuel G. León; fue presentada el 26 de setiembre de esos años.

<sup>9</sup> Charles Halle en su obra *Mexican Liberalism in the Age of Mora, 1821-1853* presenta las similitudes de los denominados conservadores y liberales, y presenta la idea de que América Latina y México había nacido bajo la influencia del liberalismo.

## 2. El ocaso de la Convención Nacional

La obra política de la Convención Nacional era criticada por los sectores opositores, ya que por los meses de setiembre y octubre de 1857 circulaban escritos por la ciudad que ponían objeciones a su forma de actuar y ponían en tela de juicio la Constitución de 1856. Una serie de situaciones amplían las críticas a su labor, como por ejemplo su enfrentamiento con el Poder Ejecutivo donde los constantes choques entre ambos poderes del Estado se avivaron en el transcurso de la guerra civil, especialmente cuando empezaron a circular notas sobre la posibilidad de una negociación y amnistía con los rebeldes de Arequipa. Esta circunstancia genera una creciente hostilidad de los seguidores del Ejecutivo quienes denuncian tal comportamiento: «...sorprendente es este paso que [ha] dado la Convención Nacional y más sorprendente cuando en lugar de castigar a un pueblo rebelde que se arma contra la Constitución, se trata de premiar...» (El Comercio, 26 octubre 1857). La irritación por tratar de negociar con los arequipeños no es entendida por el Ejecutivo porque realizar posibles negociaciones con ellos, siendo esta una ciudad que constantemente se ha rebelado contra diferentes gobiernos y que debería recibir su castigo (indica los opositores a La Convención Nacional), no había cabida para las negociaciones.

Al transcurrir los días, llega a sugerirse en la prensa que el presidente provisional, el general Ramón Castilla ha sido destituido, o más bien, la Convención tiene toda la intención de destituir al presidente; se señala que en sesiones secretas que ha tenido la Convención Nacional ya se había decidido la suerte del general Castilla<sup>10</sup>. Son rumores que se extienden por la capital que constantemente se publicaron en la prensa, lo cual ocasionó un enrarecimiento de las relaciones entre ambos poderes del Estado. La incertidumbre que hay, aumenta día a día, ya que en las publicaciones se interrogan sobre qué tipo de relación sostiene La Convención y el presidente, y se acusa que la Asamblea busca acabar con la guerra civil de 1856,

---

<sup>10</sup> Se acusa que en sesión reservada del 26 de Octubre, la Convención Nacional emitió el siguiente proyecto: «...Resuelve: El Consejo de Ministros, encargados de la presidencia de la República, convocara a elecciones de presidente y vicepresidente de la República, y de diputados a Congreso y diputados departamentales, quedando modificado el artículo 3.º, y derogado el artículo 4.º, de las disposiciones transitorias de la ley de 20 febrero de 1857...». Más adelante en el artículo 5.º dice: «...el decreto de convocatoria se expedirá inmediatamente que las fuerzas revolucionarias se hayan sometido al Gobierno, que se haya alzado el sitio de Arequipa, y reducido el ejército al número fijado por la ley de presupuesto...».

sin consultar a Castilla y a su gabinete. Se sostenía que aquel conflicto se trata de una pugna de dos caudillos irreconciliables que habían llevado al país a un violento conflicto civil, según comenta el diputado Rafael Velarde.

Esta información influye para que la Convención Nacional se decida a negociar una salida al conflicto con los arequipeños, de allí que empieza a comentarse la posibilidad de entablar conversaciones, circunstancia que desde el Ejecutivo ocasionó críticas al actuar de La Convención y que le motivo una oleada de críticas. Además, se llegó a saber que hubo un aumento de las asignaciones pecuniarias:

«La Convención Nacional después de dos años y medio de funciones, ha aprobado en sesión secreta el proyecto presentado por el señor diputado Tadeo Duarte para que se aumente a dos pesos diarios las dietas de los Convencionales, y que este aumento se considere desde el día que se instaló La Convención; es decir, que se entregue a cada diputado 2500 pesos por lo bien que lo hacen, lo cual equivale a repartirse entre ellos cerca de trescientos mil pesos» (El Comercio, 31 de octubre de 1857).

Se pone en tela de juicio la moral de los convencionales, por lo que se puede inferir que esta publicación apunta a demostrar el interés económico de sus diputados y que no poseen una preocupación por los intereses de la nación. Se les acusa que solo desean perpetuarse en sus escaños para poder usufructuar de más ingresos. El manejo de la información también es interesante para apreciar como presentan algunos grupos allegados a la Convención dicha información. La defensa que esgrimen parte de la Asamblea parte de que el costo de vida de la ciudad de Lima ha aumentado, por lo tanto los 8 pesos que reciben son completamente insuficientes para poder vivir dignamente como representantes de la nación y era legítimo aumentar sus ingresos a 10 pesos diarios, circunstancia que no debería ser criticada sino apoyada, pero lo que genera el rechazo es el pago retroactivo que pretenden hacerse. (El Comercio, 31 de octubre de 1857).

Días después los defensores de la Convención Nacional insisten en el hecho del por qué los opositores no se quejaron cuando se incrementaron las pensiones a los militares, a los oficiales de los ministerios, a los vocales de la Corte Suprema y Judicial, y a varias dependencias del Gobierno. Al respecto no se dijo absolutamente nada, es cuestión de justicia lo que ocurre. En esa circunstancia la prensa juega un

papel clave porque se utilizó ese escenario para reivindicar a La Convención. (El Comercio, A los enemigos de la Convención Nacional, 2 de noviembre 1857). En su defensa los miembros de la Convención aducen que esta descabellada propuesta fue hecha por un solo diputado, el señor Duarte, y que la mayoría de los presentes en esa sesión se opusieron, por ello que ese proyecto no se convirtió en ley y no fue publicada en los periódicos como algo oficial. Algunos diarios opinaban que a la Convención debe juzgarse por las acciones que desempeña y no por proyectos que no se han aprobado; de esta manera argumentan los defensores de la Asamblea (El Comercio, Aumento de Dietas, 3 de noviembre de 1857).<sup>11</sup>

Los primeros días de noviembre empezaron a desarrollarse una serie de episodios críticos de la historia institucional donde se enfrentaron nuevamente La Convención y el Ejecutivo, que finalmente sería el último ya que la primera fue cerrada intempestivamente. Ese día ocurrió el atentado protagonizado por el teniente coronel Pablo Arguedas quien ordenó al subteniente Cuba disolver la Convención Nacional mediante el uso de la fuerza armada; los diputados trataron de defenderse de los ataques. En unas misivas que cursaron los señores diputados Fernando Céspedes Escudero y José Luis Quiñones, secretarios de la Convención Nacional al ministro de Culto y Obras Públicas, detallan la clausura violenta de la Asamblea:

«...a las tres y cuarto de la tarde, hora en que la asamblea se encontraba en el ejercicio de sus funciones, fue invadido su local por una fuerza del batallón Castilla, al mando del comandante don Pablo Arguedas, quien con el subteniente don José Cuba, comandante de la guardia sublevada, mandó a decir: “viva la Constitución”, “viva el general Castilla”, “retirarse de aquí”. Como a pesar de la intimidación, no se movía de sus asientos los señores diputados, mandó retirar los centinelas, preparar y apuntar las armas; distribuyendo simultáneamente hombres que impidieran la salida. Inmediatamente después, el oficial indicado penetró en el salón –con un piquete de soldados, bayonetas caladas-, para expulsar individualmente a los señores que se encontraban en él. Reconvenido de este trance por el señor presidente, qué orden tenía y de quien la había recibido, contestó que su jefe es el comandante Arguedas y de la inspección general del ejército, siendo este hecho grave» (Benvenuto, 1926, p. 213).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> El artículo llega a plantear lo siguiente: «La proposición Duarte es uno de los hilos de la odiosa red que se trama para quitar en medio el único cuerpo que sostiene la Constitución y las libertades públicas...».

<sup>12</sup> La Crónica Parlamentaria del Perú refiere al brutal cierre de la institución política. En el periódico *El Comercio* del lunes 2 de noviembre de 1857 también se registró el hecho.

Con esta narración se cierra este episodio político de la Convención Nacional, un interesante proyecto político que llegó a implementar los ideales liberales. En los días siguientes las autoridades de la Convención y el Consejo de Ministros empezaron a intercambiar escritos para ver qué se podía hacer. Los convencionales trataron de restaurar la Asamblea, pero la respuesta que dio el ministro Juan del Mar fue contundente:

«Contestando a la nota de V. E. que en la tarde de ayer (3 de noviembre) que han fallado mis convicciones sobre el completo restablecimiento del orden, por haberse descubierto después la excitación de la mayor parte de la fuerza que guarnece esta plaza. Mientras el Gobierno pueda allanar los obstáculos que se presentan, y que está a la penetración de V. E. No puedo garantizar la seguridad de la Convención en sus sesiones. Lo que tengo el honor de comunicar a V.E. por acuerdo del Consejo» (Benvenuto, 1926, p. 214).

El Gobierno se desentiende del reclamo del presidente de la Convención lo que no impidió que se realizasen intentos para poder restablecer la Asamblea. Estos intentos fueron frustrados por la actitud que mostraron los miembros del Gobierno. A la par, los diputados de La Convención realizaron esfuerzos por revertir esta adversa coyuntura, es así que el presidente de la Asamblea, el diputado liberal Manuel Toribio Ureta, nos deja su testimonio sobre lo que se desarrolló en aquella jornada:

«Aunque la Convención Nacional fue disuelta a bayonetazos por la tropa del batallón Castilla (...) en la tarde del dos del presente noviembre, los señores diputados, sin tener en cuenta los peligros, ni averiguar las condiciones de su seguridad, deseosos de salvar únicamente a todo trance las instituciones, nunca más digna de respeto que cuando se combate por ellas al absolutismo estrechado en Arequipa, se reunieron en la noche para continuar con la sesión pendiente y oír en ella al ministro del Gobierno» (Benvenuto 1926: 214).

A pesar de los intentos de los diputados, todo se frustró, pues los militares que habían protagonizado la asonada, recorrieron varios puntos de la ciudad anunciando que su medida lo hacían para proteger la figura del general Castilla que se encontraba amenazada por el accionar de la Convención; además procedieron a vigilar a los diputados Manuel Toribio Ureta y José Gálvez quienes eran las figuras más notorias de la Convención liberal. El Consejo de Ministros, encargado del Gobierno por aquellos momentos, procedió a tomar una serie de medidas para mantener su neutralidad y no chocar con los intereses del Ejército. La milicia

después de perpetrar el golpe del 2 de noviembre, para protegerse de las críticas, como se comentó, inmediatamente empezó a poner en circulación una serie de panfletos en los cuales justificaban su proceder. En ellos se lee una serie de mensajes como ¡Viva el general Castilla! ¡Viva el Ejército! ¡Abajo la Convención!, con el fin de legitimarse.<sup>13</sup>

A pesar de la situación confusa que se desarrolló en los días siguientes al golpe militar, la libertad de imprenta lo que permitió conocer las posturas combativas de los grupos que apoyaron y criticaron a la Convención liberal. Se observa en los comunicados que presentan ambos grupos enfrentados el grado de ciudadanía que se está logrando desarrollar, ya que se exclama que el respeto a las instituciones políticas es lo más importante para poder construir la República. El grupo que demuestra su oposición a La Convención hace resaltar que la acción del coronel Pablo Arguedas es un acto que debe elogiarse dado que se ha acabado con una asamblea que solo quería beneficiarse con el aumento de ingresos (El Comercio, Dietas, Lima 7 de noviembre de 1857)<sup>14</sup>. Ante ello, se culpa a La Convención Nacional, que a lo largo de su periodo de legislatura, alrededor de dos años y medio en ejercicio de sus funciones, ha llevado al país a una serie de errores y que provocó graves conflictos. En otros escritos se comenta que si ellos hubiesen seguido y trabajado en función de la opinión de la población, nada de estas terribles situaciones se hubiesen dado y el desarrollo del país sería diferente<sup>15</sup>

Otra de las acusaciones que se da contra la Convención es la usurpación de funciones. Se les acusa que habiendo cumplido su labor con la promulgación de la Constitución de 1856 debieron haber renunciado y dar a paso a la convocatoria de un Congreso Ordinario, pero al no darse esta situación se empezó a darse críticas en varias publicaciones contra aquella usurpación. Se denuncia que los diputados de La Convención han infringido el artículo 33 de la Constitución Su ilegalidad es evidente, según se advierte, por ello se refuerza la idea de que el cierre de la Asamblea era ya esperado, por haber roto las normas legales; de allí que se justifique este violento proceder del Ejército que con ello se ha evitado que dicho cuerpo

---

<sup>13</sup> Noemí Goldman. *Legitimidad y deliberación: el concepto de opinión pública en Iberoamérica, 1750 – 1850*. En Iberconceptos, 2009, pp. 981-982.

<sup>14</sup> En este escrito se comenta: «Los diputados quisieron lana y salieron trasquilados. Sabemos que hasta hoy no se les paga las dietas de octubre. He aquí el complemento de la disolución de Arguedas...».

<sup>15</sup> Convención del Perú. En *El Comercio*, Lima 7 de noviembre de 1857.

legislativo se vuelva vitalicio<sup>16</sup>. Además se comenta en otros escritos que a pesar del cierre de La Convención, la vida política del país continua, no hay que hacer un drama sobre aquel acto porque el Gobierno seguirá existiendo, la Constitución y las normas legales continuarán, lo que se busca es confundir a la opinión pública, para generar inestabilidad y ocasionar la caída del legítimo gobierno de Castilla y beneficiar a los convencionales<sup>17</sup>.

La defensa de la labor de La Convención será también puntillosa. Sus argumentos se plantean en el respeto de la institucionalidad del país, de la democracia y el progreso; este ímpetu por alcanzar la reforma del país ha sido detenida por las ambiciones del Ejército que solo busca mantener sus fueros y prerrogativas, es uno de los grupos corporativos que se niegan a la modernidad, por ello el poder civil se ve amenazado por este fatal proceder. En esta compleja circunstancia se hace necesario saber, quiénes son los que apoyan con sus críticas la caída de La Convención, ya que allí se sabría quienes se oponen a la modernización del país. Es así que empieza a denunciarse a quienes saldrían favorecidos por esta situación, en primer lugar se hallan los empleados públicos, quienes han sufrido el recorte de sus privilegios y se les ha disminuido sus ingresos.

Otros de los interesados en que se derrumbe La Convención son los militares quienes ya no pueden improvisar la carrera militar. Se detalla que la Convención iba a establecer una ley orgánica en el ejército que afectaría el ascenso y promociones. También se denuncia que individuos inescrupulosos se aprovechan de los montepíos, de las pensiones y los cobros indebidos. Naturalmente las personas que apoyan la rebelión de Vivanco están interesados en el cierre de La Convención; finalmente otro de los grupos interesados son los eclesiásticos quienes habían sufrido la eliminación de sus privilegios, ellos esperaban el restablecimiento de sus privilegios.

Una circunstancia digna de destacar sobre las publicaciones es la crítica a la actitud de la plebe limeña, que ante la convulsión política que ocurre en la capital demuestra una serie de actitudes. En muchos escritos se les presenta como personas

---

<sup>16</sup> La Opinión Pública y La Convención. En *El Comercio*, Lima 6 de noviembre de 1857. Llega a comentar que el cierre de la Convención Nacional ha producido alegría general en todo el pueblo, llegando a decir que las plazas y calles se llenaron de felicidad por lo acontecido.

<sup>17</sup> Las instituciones y la Convención. En *El Comercio*, Lima 6 de noviembre de 1857.

preocupadas por malas conductas y de ser indolentes; pero ello no evita que acusen a La Convención de realizar malas prácticas, por ello apoyan el cierre de aquel poder del Estado. Esta ambivalencia de la plebe podemos hallarla en la siguiente descripción:

« (...) el inocente pueblo, ignorante en su mayor parte, el Pueblo, abrumado bajo el peso del trabajo que apenas le produce un miserable sustento el Pueblo peruano sobre quien ha pesado hasta hoy cada especie de cadenas, toda especie de cargas, ese pueblo bueno y sufrido, agobiado bajo el peso de su miseria, aun no tiene el tiempo suficiente... para pensar un instante en su lamentable suerte. El pueblo calla, porque aún no sabe hablar; el pueblo se muestra indiferente a cuanto a su alrededor pasa, porque aún no tiene la conciencia de sus derechos; y más bien sumiso y obediente, se presta a forjar el mismo las cadenas de su opresión y padecimientos (...)» (El Comercio, 11 noviembre de 1857).

Es una descripción realista sobre la plebe de Lima cuyas necesidades y situaciones por las que pasan los hace susceptibles de ser manipulados. Es una época en la cual la plebe es considerada como irracional, es acusada de tener una serie de vicios como el alcoholismo y la vagancia. De allí que parte del discurso es presentar a la plebe como despreocupada por los problemas importantes que aquejan al país, por ello hay que tomar con pinzas algunas publicaciones con respecto al apoyo popular a determinado grupo político. Pero también es cierto que los sectores populares apoyaron la figura del general Ramón Castilla, quien había sabido capitalizar, durante estos años, el respaldo de la población gracias a aquellos decretos liberales que abolían el tributo indígena y la esclavitud. Eso permitió que los indígenas y los negros se alinearan con Castilla. Situación que se desprende de las publicaciones que se dieron en el periódico El Peruano de 1857, donde numerosos pueblos de la sierra y de la costa se pronunciaban en favor del presidente (Pinto, pp. 577 – 576).

Entre tanto, por aquellos días, la prensa se vuelve contra la actuación del Consejo de Ministros porque, como se comentó líneas atrás, se dejó al sacrificio a La Convención Nacional y fruto de esa ambivalente actitud procedió a tomar partido por el presidente, sacrificando de esta manera aquella institución del Estado. Se argumenta que el Consejo de Ministros, con las atribuciones que le dan el artículo 89, no puede restituir La Convención, ya que su deber más importante es resguardar



el orden público<sup>18</sup>. En ese punto se remarca la autoridad del Consejo de Ministros el cual representa la autoridad de la presidencia de la República y del vicepresidente, y por tanto encargado de la seguridad del país<sup>19</sup>

También vamos apreciar publicaciones sarcásticas que parodiaron el cierre de La Convención, buscando ocasionar un impacto mediático en el lector, pues llevan por títulos: « ¡Arriba la soldadesca!, ¡abajo la Convención y sus leyes!, ¡a nuestras plantas el pueblo!». Su objetivo era influir y ocasionar alguna respuesta en los lectores. Con este tipo de publicaciones sarcásticas se pone en tela de juicios algunos conceptos políticos, así se termina ironizando que se ha acabado con absurdas ideas, como, soberanía popular, razón pública entre otras; ahora se va imponer es la fuerza de las armas, por ello primero se clausuró la Convención, pues apuntaba a eliminar sus privilegios<sup>20</sup>. Al leer este tipo de publicaciones, se busca generar indignación contra el poder militar que ha ocasionado una vez más otra crisis, que atenta contra el desarrollo del país, llevándolo a una situación de ingobernabilidad. Se hace presente que el militarismo es negativo, una manera de hacerlo notoria es presentarlo en forma de sátira.

De esta manera, concluye este episodio de La Convención Nacional en 1857, pero el debate continuó, ya que en los años siguientes se volverá a presentar para el Congreso Extraordinario de 1858, pues muchos liberales que pertenecieron a La Convención van a participar en ese Congreso y nuevamente se observaron conflictos motivados por el afán de revancha de los liberales quienes van a tratar de defender su obra cumbre: la Constitución Política de 1856. En el Congreso Extraordinario de 1858, las pugnas entre el Legislativo y el Ejecutivo serán motivos de otros debates, pero salen a relucir nuevamente los que giran en torno a la defensa de los ideales liberales, mientras los conservadores buscaron restablecer varias ventajas que gozaban en años anteriores. Asuntos como el debate religioso, la ciudadanía, la abolición de la pena capital, los poderes del Estado, la conducta militar golpista del

---

<sup>18</sup> El Consejo de Ministros. En: *El Comercio*, Lima 9 de noviembre de 1857.

<sup>19</sup> Acta. Publicado en *El Comercio* del 9 de noviembre. En esta acta se vuelve a remarcar la inconstitucionalidad de la Convención, pues ya había cumplido su mandato al promulgar la Constitución y ahora se encuentra usurpando funciones, por ello era legar su clausura, por más que el medio usado no sea el indicado, el comunicado concluye anotando que es inconstitucional el restablecimiento de dicha Asamblea.

<sup>20</sup> ¡Viva la fuerza bruta, viva el sable! ¡Abajo la Convención! En: *El Comercio*, Lima 4 de noviembre de 1857. En el escrito se comenta que ahora es el momento para consumir la restauración de su poder y van a volver a abrir las puertas de las revueltas.

coronel Pablo Arguedas, serán intensamente debatidas y publicitadas; finalmente, se discutió hasta el tipo de Congreso que debía conformarse y que se reflejará en la prensa y, la vida política.

### **3. La figura de Ramón Castilla, su relación con el poder y la sociedad**

El general Castilla es una de las figuras políticas más destacadas del siglo XIX. Su vida política es la de una persona que practica un pragmatismo político, que vamos a verlos virando de ser un simpatizante del conservadurismo a pasarse a las banderas del liberalismo. La vida política de Castilla es interesante, pues gracias a su estancia en la Fuerzas Armadas y su colaboración en los sucesivos gobiernos que surgieron después de la independencia hasta el ascenso a su primera presidencia, nos permiten ver que es un hombre con conocimiento de la geografía política del país. Su estadía como prefecto de Puno le será clave para poder entender la dinámica del país, además de los contrapesos y equilibrios que debe tener todo político. Castilla empieza a modelar un sistema político que fue denominado *Estado Patrimonialista Castillista*<sup>21</sup>. Dicho modelo político fue concebido con la finalidad de darle una notoriedad a la corporación del Ejército, el cual se encargaría de refundar el país amparado en la constitución y las leyes, de esta manera se llegaría al sendero del orden y se conseguiría crear la prosperidad de la nación. Definitivamente es una idea en la cual Castilla va a establecerla, a través del respaldo en el Ejército, eliminación de los faccionalismos que habían dentro de esta corporación, e indemnización a sus integrantes; todo esto gracias a los ingentes ingresos del guano que le permitieron adoptar dicha política de gasto.

El proyecto de Castilla implicaba que se debía echar mano de diferentes sectores sociales. Su estancia en Puno hace concebir a Castilla la necesidad de los civiles en su proyecto político. Era necesaria su ayuda para forjar sus planes. Uno de esos colaboradores claves fue el obispo Bartolomé Herrera quien se convirtió en el sostén ideológico de sus planes. El orden terminaba siendo clave en los planes de la

---

<sup>21</sup> El término que fue designado por Carmen Mc Evoy para entender como el Estado forjado por Castilla utilizó el dinero proveniente del guano, para poder legitimar el discurso cohesionador del "Bien Común", y lanzar complejos acuerdos políticos con diversos sectores para poder establecer un orden (Mc Evoy, 1997, p.24).

refundación del país. La República corporativa era la base con la cual contaba Castilla, y en ella se va respaldar, claro está, con el apoyo de la modernidad tradicionalista que logra el funcionamiento del Estado durante su primer gobierno (1845 – 1851), amparado en el ejército, cuyos miembros serán elevados al poder político, participando en cargos estratégicos como prefectos, que le permitirán a Castilla conseguir clientelas que los respaldaran en sus funciones. Estos prefectos que apoyaron a su gobierno mostraron la misma pericia que su general, es decir, un conocimiento del territorio y una capacidad para adaptarse a las situaciones (Mc Evoy, 2014, pp. 53 – 59).

Como se comentó, el modelo de Castilla basado en la milicia, era un proyecto en el cual los civiles también estaban inmersos, como el obispo Herrera, pero no fue el único; otros civiles, muchos de ellos apegados a la ideología liberal, también decidieron apoyar su proyecto, ya que una de las cosas que se aspiraba era la centralización política y la construcción de un Estado nacional. Para poder hacer realidad tal situación era indispensable la búsqueda de la institucionalidad, donde era clave la promulgación de códigos legales y sancionar una Constitución que pueda amoldar este proyecto, en fin había una creencia para enrumbar definitivamente al país.

Pero también los civiles eran conscientes que el militarismo de Castilla era también una amenaza al sistema político, ya que al querer congraciarse con las distintas corporaciones del país llevaba al país a darle una serie de favores que podían desequilibrar el funcionamiento. Esto justamente era lo que los liberales veían como una amenaza a la construcción del orden, pues ante todo debía eliminarse este viejo orden corporativo, y lo que debía darse, era fomentar el individualismo liberal, un escenario que todavía no se desarrollaría durante la década de 1850, pero lo que si podemos testimoniar es que se están sentando los cimientos de imponer la modernidad liberal. (Mc Evoy, pp. 60 -61).

Cabe acotarse cuál fue la participación de la plebe durante la construcción del modelo castillista. Como se mencionó anteriormente Castilla era un hombre pragmático, y por tanto no podía estar al margen de la actitud de la plebe, especialmente de los sectores indígenas los cuales eran el sector preponderante en la sociedad peruana. Los estudios del historiador chileno Julio Pinto Vallejos indican

que para lograr la denominada *Construcción social del Estado*, Castilla debió utilizar estrategias que le permitieran incorporar en la política a los sectores populares, de manera que ellos no cuestionen el orden dominante vigente ya que el modelo del general buscaba establecer, ante todo el orden. Como político calculador, como lo era Castilla, fue consciente que el apoyo de los sectores populares era clave para poder acceder al poder, y lo más importante, mantenerlo. Por ello que era necesario tener un control de esta indiada. (Pinto, 2016, pp. 550 – 552).

Durante su primer gobierno, el general Castilla trataba de llevar una política de buenas relaciones con los sectores populares, pues estos son los que lo iban a ayudar en los momentos críticos; por ejemplo, es conocido que cuando ascendió a la presidencia emitió una circular a sus prefectos donde les informaba que llevaran buenas relaciones con las comunidades campesinas y evitar que se realice contra ellos arbitrariedades, despojos de tierras y explotaciones laborales. En el periódico oficial *El Peruano* se puede apreciar todas estas notas hacia sus funcionarios; esto nos haría creer que había una sensibilidad hacia ellos, que se buscaba un progreso social, pero lo real es que el general Castilla era una figura práctica, oportunista, sabía de la mentalidad corporativa de los indígenas, aparecía ante ellos como la figura paterna que los protegía de los abusos de las autoridades, buscaba mantenerlos en orden y tranquilidad. Este contexto convenía a su proyecto político, no era estratégico hostilizar y volver conflictivos a los indios, hay que esa posible situación podía ser aprovechada por sus adversarios políticos, por ello había que mantener en calma a las comunidades, y de esa manera se contribuía al orden que tanto buscaba el modelo de Castilla. En un reciente artículo el historiador Julio Pinto escribe lo siguiente:

«Todos los estudios sobre la sociedad andina durante la república temprana advierten que entre el Estado central y las comunidades campesinas existían múltiples otros actores con intereses cruzados y potencialmente antagónicos, lo que daba lugar a múltiples y cambiantes alianzas y conflictos, así como una interacción política muy compleja» (Pinto, p. 563).

Por ello era indispensable que para el mantenimiento del orden se impusiese alianzas con estos sectores. Uno de los momentos donde se puso a prueba ese modelo de clientelas fue en la primera elección moderna del país, es decir el proceso electoral

de 1851 se puso a prueba el modelo de Castilla, la ampliación del voto a sus clientelas indígenas fueron determinantes para que Castilla y todo el aparato estatal a su servicio le permitiera transferir el poder a su sucesor militar, el general José Rufino Echenique, quien se vio favorecido por aquellas prácticas políticas.

El modelo de Castilla que se había legitimado con la elección de su sucesor José Rufino Echenique (1851-1855) empieza a colapsar durante esta gestión y llevaron a los grandes escándalos de La Consolidación. Esto conllevó finalmente a la guerra civil de 1854 que terminó en los campos de Las Palmas (1855) y la victoria de Castilla, quien se alió con los liberales, a quienes ya hemos mencionado al inicio del capítulo. En esta segunda etapa del castillismo, había algo diferente, no había podido utilizar su esquema del primer gobierno, su red de clientelaje que lo apoyó estaba al margen del poder, en cambio tenía a su lado a los liberales quienes estaban deseosos de emprender grandes reformas, que colisionaba con los intereses de la república militarizada que creó Castilla. Los liberales no estaban tan comprometidos con el proyecto de Castilla, habían estado al margen del primer gobierno, durante la guerra civil desempeñaron roles activos y estuvieron presentes sus ideales en la promulgación de los decretos históricos que abolieron el tributo indígena y la esclavitud.

Esta alianza de Castilla con los liberales fue un constante dolor de cabeza para el caudillo presidente ya que se empezó a cuestionar el modelo corporativo que había posibilitado la existencia de la República. Desde la Convención Nacional de 1855, como hemos señalado, se empiezan a trazar medidas como la abolición de los fueros corporativos de la milicia, la iglesia, eliminación de privilegios hereditarios; todas estas nuevas normas implementadas por los liberales ocasionaban fricciones entre el Ejecutivo y el legislativo<sup>22</sup>, las tensiones aumentaron cuando finalmente se promulgó la Constitución de 1856, la rebelión de Vivanco en Arequipa y el estallido de otra guerra civil permitió a Castilla dar un viraje a su política, el Ejército se encargó de apartar la amenaza de La Convención, mediante el golpe del coronel Arguedas en 1857 neutralizó por el momento a los liberales, quienes se encargaron de oponerse a sus medidas. Nuevamente se dio el retorno de los conservadores al poder, muchos de los políticos que fueron afectados en la guerra civil de 1854

---

<sup>22</sup> En el texto de Mario Bazán (1958) se cataloga que la relación entre Castilla y la Convención Nacional eran antitéticos

regresaron, nuevamente el obispo Bartolomé Herrera se convirtió en el portavoz de este grupo, quienes finalmente estarían a cargo de la elaboración de la Constitución de 1860, pero lo que hay que destacar es que el modelo de Castilla, ya en la década de 1860 empieza a ser cuestionado, las crisis económica ya se encuentra a ciernes, el sistema económico rentista del guano empieza a mostrar sus fallos, ya no era posible mantener el sistema corporativo que tanto éxito le había traído a Castilla. Sobre la conducta de Castilla, que podemos decir, que era una persona pragmática, buscaba las alianzas más inverosímiles. Podemos ilustrarlo con esta cita:

«Examínese la conducta pública del general Castilla desde 1844 y dígasenos su gobierno no ha sido una serie de golpes de Estado, ¿Qué han sido para él las Constituciones – (y ha tenido tres y un estatuto) – las leyes los congresos y cuantas instituciones han existido en el Perú? Instrumentos que ha sabido manejar a su antojo según las circunstancias y según la conveniencia» (Basadre, 1978, p. 45).

De esta manera la personalidad del general Ramón Castilla durante sus años de gobernante, en los dos periodos, será la de iniciar la articulación del Estado. Sus colaboradores, sean conservadores o liberales, estaban conscientes que el verdadero camino para sacar al país del marasmo del caos era apostar por una figura fuerte que logre enrumbar al país a la modernidad republicana, bajo las banderas de la modernidad tradicionalista.

#### **4. El Congreso Extraordinario de 1858 y la lucha constitucional**

Tras la caída de la Convención Nacional en 1857, el presidente provisional Ramón Castilla convoca a una nueva asamblea legislativa que se iba a encargar de la reforma de la Constitución y de esta manera asegurar su mandato sobre el país; es así que utilizando la Constitución de 1856 y la ley electoral, se hizo el llamado a elecciones para que se elija un nuevo Congreso Extraordinario. Asimismo se convocaba a elecciones presidenciales donde él mismo se presentó como único candidato y terminó siendo elegido presidente. El Congreso reunido tuvo el carácter de extraordinario, donde no participaron los líderes de los liberales, pero varios diputados elegidos pertenecían al liberalismo de la fenecida Convención y que no estaban dispuestos a que se pierdan los logros obtenidos por aquella asamblea liberal

de 1855 y la Constitución de 1856. A pesar de la aparente derrota de los liberales, la confrontación estaba asegurada, ya que las figuras del liberalismo como Francisco de Paula Vigil, José Gálvez, José Paz Soldán organizaron prontamente la oposición política al gobierno conservador de Castilla; asimismo, los liberales dispusieron de un órgano de prensa que fue el periódico *El Constitucional*, desde el cual se encargaron de iniciar una campaña mediática para articular el liberalismo, y de paso poder contener las medidas conservadoras del Ejecutivo. Desde el primer número de este periódico, se advierte del proyecto de querer reformar la totalidad de la constitución por parte del gobierno, esto llevaría al país, según denuncian, al camino del caos y a otro periodo de crear innumerables constituciones, por ello se opondrían férreamente a este proyecto anticuado. Para corroborar sus ideas en el encabezado del primer número del Constitucional citan a George Washington: «si la constitución es defectuosa, enmiédese; pero no se permite sea ultrajada mientras tenga existencia» (El Constitucional, 3 de abril 1858, p.1).

Las elecciones de 1858 presentaron el mismo esquema que Castilla había implementado en 1851, es decir se usó la maquinaria estatal, la interferencia de los prefectos y subprefectos, posibilitaron que se desarrollase una serie de irregularidades debido a las denuncias que se presentaron. Según el diputado Evaristo Gómez, en este proceso electoral se tuvo muchos más votantes que los que estaban registrados en el padrón electoral (Basadre, 2005, p 293). Esta victoria electoral de Castilla le permitió legitimar su periodo de gobierno hasta el año de 1862, asimismo, se eligió al Congreso que debía reformar la Constitución de 1856. Este se instaló el 12 de octubre de 1858 y proclamó la victoria de Castilla, quien en su juramentación, se proclamó como amigo de las asambleas legislativas. El presidente realiza este gesto con la intención de que este Congreso se disponga a ejecutar sus deseos de reforma constitucional, pero lo que se dio en el transcurso de los meses fue un creciente enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que el congreso se encargó de fiscalizar los actos de los ministros de Castilla, se interpellaron a varios ministros de su gobierno, ocasionando que las relaciones sean tirantes entre el gobierno y el Congreso.

En el Congreso, los liberales se negaron al cambio constitucional, por lo tanto era comprensible que los conflictos aumentasen. La publicación de una serie de escritos marcó una dura batalla entre los grupos en disputa. Los partidarios del

gobierno de Castilla plantean que el grupo liberal del parlamento son conspiradores contra el orden, presentan el discurso que el país está agotado por tantos conflictos internos que han costado mucho al país. Los liberales consideran que lo que necesita el gobierno de Castilla es asegurar la paz y el orden, esto va de la mano con la reforma de la Constitución de 1856, ya que los electores peruanos le han dado esa legitimidad al gobierno para que a través del congreso de 1858 empiece la ansiada reforma (El Comercio, 22 setiembre 1858). Se aprecia entonces como el Gobierno y parte de la clase política tiene insertada la idea del orden para poder iniciar las reformas de la modernidad tradicionalista.

Uno de los primeros temas que se empiezan a discutir en los primeros días de octubre de 1858 es señalar sobre qué forma debe adoptar el nuevo Congreso, si será constitucional o constituyente. Francisco Gonzales de Paula Vigil que es uno de los diputados liberales que participó en dicha asamblea, comenta que en las elecciones de 1858 hubo un importante número de electores que no expresaron su verdadero sentir, es decir, no están a favor de la reforma constitucional; según Vigil, a esto hay que sumarle, que los electores que quieren la reforma, desean que se aplique la fórmula que ya ha establecido la carta de 1856, que había planteado que la reforma se desarrolle en tres legislaturas ordinarias distintas. Visto de esta manera, los electores no buscan que se desarrolle un Congreso Constituyente, por ello, los seguidores de Castilla mal harían en apoyarse con esos votos. El diputado Vigil afirma que el Gobierno ya está decidido a convertir el Congreso de 1858 en constituyente, con la finalidad de implantar sus indicaciones. (El Comercio, 9 octubre 1858).

De esta manera, los debates que se desarrollaron en los sucesivos días, estarán en torno sobre quiénes son los más beneficiados con la reforma constitucional; definitivamente el mayor interesado es el Gobierno, de quien ya se sabía que intenciones perseguía, para ello los prefectos y subprefectos habían estado trabajando para favorecer a los candidatos del gobernó. El segundo beneficiado, según se denuncia, es la Iglesia, institución que desde el púlpito de sus templos están promovieron en los creyentes apoyar la reforma. Se ha encontrado una denuncia en el periódico *La Unión* de Cerro de Pasco, del 13 de agosto de 1858, donde el gobernador eclesiástico de la región ha dado indicaciones a los párrocos para que recomienden a las personas que apoyen a los candidatos que promuevan la reforma



constitucional, ya que la eliminación de los fueros eclesiásticos es ir contra la religión; además, con esto contribuyen al orden de la República (El Comercio, 26 octubre 1858).

Conforme transcurrían los días las publicaciones que van apareciendo, buscan la defensa de la constitución liberal, en ese sentido se recalca que el Congreso de 1858 al declararse constitucional debe respetar la constitución vigente, implementar otra constitución es destruir una obra basada en los intereses de la población. El mantenimiento de la libertad y el progreso debe ser trabajo del Congreso, por ello no puede restablecerse normas que van contra la modernidad, como por ejemplo, rehabilitar la pena de muerte y restituir el fuero eclesiástico. Lo que debe efectuarse es la mejora de la Constitución, ver que artículos pueden reformarse, para ello se reclama que la Cámara de Diputados presente un proyecto de constitución que logre establecer el orden político deseado. (El comercio, 10 enero 1859).

Los primeros meses de 1859 transcurren con los debates en ambas cámaras sobre la reforma constitucional, las discusiones sobre la sustitución de artículos de la constitución del 56, enfrascan a los senadores, por ejemplo en la discusión del artículo 6 que trata sobre la eliminación de los privilegios hereditarios y fueros personales, vuelven a repetirse los debates que anteriormente se habían desarrollado en la Convención liberal, debían darse normas que favorezcan a la República y no a intereses particulares. Esto se volvió a repetir en la discusión sobre las ventajas de la abolición de los diezmos, donde nuevamente el discurso que triunfo fue que el mantenimiento del diezmo permite mantener la carga que conlleva al atraso de las actividades económicas, especialmente en la agricultura; finalmente se mantendrá este parte del discurso liberal, pues está en consonancia con la modernidad que se desea implantar en el país.

Las tensiones en el Congreso vuelve a aflorar cuando el sector ligado al Gobierno empieza a ver que los plazos dados por el gobierno no se van a cumplir, argumentan que la reforma de la Constitución está avanzando de una forma lenta, por ello para evitar la repetición de las críticas que sucedió contra la Convención de 1855, había que terminar las sesiones a finales de abril de 1859, y no esperar que el próximo Congreso ordinario termine esa labor. Esta propuesta estará respaldada con una serie de escritos que se irán publicando a lo largo del mes de abril, en donde

anotan que si se pasan del plazo dado por el Gobierno, el cual no debía exceder los cien días dado su carácter de urgente. El Congreso Extraordinario no tendrá la legitimidad y para salvar la situación se recomienda que el Congreso se declare en receso, dejándose la pauta al siguiente (El Comercio, 12 abril 1859).

La Cámara del Senado finalmente aprobó la moción de concluir sus funciones el 10 de mayo cuando parecía que la situación se mantendría en calma. En la Cámara de Diputados se desencadenó el enfrentamiento contra el Gobierno. El Congreso deseaba que se castigase a los infractores de la soberanía del poder legislativo, es así que se plantea el asunto de los militares como el de Pablo Arguedas, que había dado el golpe contra la Convención Nacional en 1857 y por este hecho no había recibido una sanción, quedando la sensación de impunidad para este militar. Asimismo, también está la cuestión del teniente Julián Carrión que había injuriado al diputado Evaristo Gómez Sánchez en el presente Parlamento. El Congreso decreto inhabilitarlos del servicio y privarles el ejercicio de otros cargos, además, se recomendó investigar a los militares superiores de estos oficiales mencionados.

El conflicto con el Gobierno vuelve a un punto alto, el recuerdo del funesto militarismo en la vida de la República vuelve a plantearse. La aparición de una emergente clase económica que se incorpora a la élite de la época, durante mediados del siglo XIX, empieza a cuestionar aquel predominio de los militares que llevaban al país a constantes crisis y episodios de violencia política (Mücke, 2010, pp. 66 – 67): estamos ante la génesis del civilismo que posteriormente logra acabar con el denominado primer militarismo. Por ello, se acusa que los militares son los causantes de los dramas del país, gracias a ellos no se podía tener una institucionalidad adecuada, por lo tanto, no es conveniente que el Congreso entre en receso en un momento en que las Fuerzas Armadas le restan ingresos al país, desplazar quince mil hombres a la guerra reduce la mano de obra para las diferentes actividades económicas de la República, el tesoro del Estado es dilapidado innecesariamente en el mantenimiento de la Fuerzas Armadas; además, son acusados de sacrificar la vida de miles de peruanos desde los inicios de la República. Se llega a contabilizar que 61 000 peruanos han sido víctimas del militarismo y durante la gestión de Castilla se contabilizaron a 18 000 fallecidos, por ello era erróneo pedir que el Congreso entre

en receso en un momento donde los militares desean establecerse firmemente en el poder (El Comercio, 10 mayo 1859).

Los choques entre los partidarios del gobierno y del parlamento serán cada vez más fuertes, pues se alega que el Congreso está violando la soberanía de los poderes del Estado, ya que al juzgar a los militares Arguedas y Carrión se invade la esfera del poder judicial. El legislativo es acusado de conspirar contra el orden, los seguidores del general Castilla, los responsabilizan de querer demoler la estructura institucional del país, como antes ya había sido acusada la Convención Nacional. En esta nueva crisis política, que tiene como protagonista al Congreso, se empezó a interpelar a los ministros del gobierno de Castilla, causando definitivamente el malestar en el Ejecutivo. Por ello en los escritos que se publicaron por aquellos días, cuestionaron la credibilidad del Poder Legislativo:

«Dígame señor Congreso ¿para qué fue U. convocado, y cuáles son sus atribuciones, sujetándose, a los objetos de su convocatoria?

¿Si la constitución previene que U. señor Congreso, sea parte, acusador, juez, fiscal y verdugo de un reo?

¿Si antes que Ud. Viniese señor Congreso había alguna ley que determinase, pena a los que delinquieron o delinquiesen, contra la Convención?

¿Si Ud. señor Congreso, es dictador o es Ud., el que cierra todas las atribuciones que las leyes determinan a los tribunales y justicia de la república? (El Comercio, El Congreso Conspira, 19 abril 1859)».

De esta manera las críticas al Congreso, de parte de los sectores del gobierno, serán cada vez más fuertes incidiendo en la usurpación de funciones sobre el Poder judicial. El equilibrio de poderes ha sido roto según se denuncia, el Congreso debe dedicarse para lo que se le ha convocado, no debe llevar sus conflictos con el gobierno a los niveles vistos; se reitera que es el Poder Judicial el llamado a juzgar a estos militares infractores de la ley.

El debate político vía la prensa agitó la pugna entre el Gobierno y el Congreso; en uno de los escritos que apareció por aquellos días, aparece una propuesta controversial, el cual plantea la restitución de la Convención Nacional de 1855, lo cual definitivamente supone una afrenta al gobierno. Las circunstancias empiezan a teñirse de incertidumbre cuando el Congreso empieza a proponer la

vacancia de la presidencia de la República, debido a que el Poder Ejecutivo estaba violando el artículo 67 de la Constitución, en la cual se estipula la sanción al presidente, en caso de no hacer cumplir las leyes y disposiciones del Legislativo (El Comercio, Defensa de los representantes que votaron por si en la cuestión de la vacancia de la presidencia de la república, 27 abril de 1859).

En los días siguientes se denuncia que el Gobierno y parte de los miembros del Congreso, tratan de sabotear las funciones del Legislativo al darse la inasistencia masiva de varios de sus miembros a las reuniones del pleno con lo cual se puede validar la tesis, que el gobierno de Castilla busca todo lo posible obstruir las labores del Legislativo, esperando llegar al mes de mayo, ya que en esa fecha el Congreso debía entrar forzosamente en receso. Ante tales hechos, el Ejecutivo es acusado de ser los verdaderos conspiradores contra el orden de la república, buscaban sabotear el orden que hasta ese momento se tenía. Los defensores del régimen seguirán argumentando que es el congreso el perturbador del orden público, pues está violando las esferas de poderes; por ello el Ejecutivo no podía ser cómplice de tal hecho, es por eso que no debe hacerse un escándalo con el cumplimiento de la ley Arguedas y Carrión; ni tampoco debe darse oídos a publicaciones como la zamacueca y comparsa, que se dedican a difamar al gobierno. Los representantes del Gobierno están convencidos de que los partidarios del congreso, están abusando de las libertades (El Comercio, 29 abril 1859).

En aquellos tensos días entre ambos poderes del Estado, la cuestión constitucional vuelve a ponerse en primer plano, ya que se acusa que el obispo Bartolomé Herrera, que es diputado del gobierno, está proponiendo la restauración de la Constitución de 1839, con la finalidad de favorecer los intereses el gobierno, por ello que realizar tal propuesta en esos momentos, era retar públicamente a los elementos liberales del Congreso, quienes sin duda alguna hubiesen clamado fuertemente la destitución del presidente, esta propuesta no se llegó a plantear debido a que el congreso no tubo suficientes diputados para hacer quórum. Los liberales empezaron a catalogar como dictadura al gobierno de Castilla, pues se empieza a criticar la actitud del Ejecutivo, especialmente cuando el congreso envió una comisión al ejecutivo para solicitarle que cumpliera la ley que emitió la Asamblea Legislativa, la respuesta, según se denuncia, fue la siguiente:

«Que el poder legislativo no tiene autoridad sobre el poder ejecutivo, sino que más bien este era el celoso vigilante del cumplimiento de las leyes, en el ejercicio de sus funciones que desempeñaban los demás poderes. Que el poder Ejecutivo se opondría al cumplimiento y a la ejecución de las sentencias del Poder Judicial» (El Comercio, la maquina se ha salido de los rieles, 3 mayo 1859).

Por otro lado, al apreciar todas estas situaciones podemos notar que el Congreso Extraordinario de 1858 y la prensa fueron los encargados de construir la esfera pública, y lo que este intenso debate político consiguió, fue que hay un emergente grupo que buscaba demostrar que ya hay una conciencia política en varios sectores de la sociedad, por ello apostaban por construir instituciones republicanas que lleven al país a las transformaciones de la modernidad. Lo importante es que hay una conciencia que busca acabar con el caos, por ello hay que atajar los desvaríos constitucionales del Ejecutivo y del militarismo, pues solo han traído más episodios de violencia política, impidiendo de esta manera la construcción de un Estado más organizado.

En cuanto a la opinión pública, lo que se está desarrollando con estos episodios de crisis, es impulsar una mejor concepción de los sectores urbanos sobre la necesidad de poseer una institucionalidad que los proteja. De una y otra manera los sectores liberales y conservadores, buscan desde sus puntos de vista, influenciar en los espacios urbanos para poder legitimar sus posiciones. La figura mediática del general Ramón Castilla estará expuesta a las críticas liberales, que lo tratan de presentar ante la opinión, como una persona que no cree en las instituciones políticas, debido a su desprecio por el valor de los congresos; se acusa que su proceder es el de tratar de destruir la fuerza moral del poder legislativo; por otro lado, los seguidores de Castilla apuntan a señalar su prestigio en el éxito obtenido en la gestión de su primer gobierno, las victorias en las revoluciones de 1854 y 1856; además señalan que el Congreso Extraordinario de 1858 no ha cumplido la misión que le encomendó la nación, la cual era reformar la constitución de 1856. Además una de las figuras del congreso que es víctima de los ataques es el diputado Fernando Casos, quien es criticado duramente socavando su lado moral. Lo que se observa en esta confrontación política, es la constante defensa de sus intereses, pero también la búsqueda de la estabilidad, sea con el congreso o con el presidente, de la delimitación de las esferas de poder, de la legitimidad de las instituciones y la búsqueda de una constitucionalidad que ayude a modernizar a la República.

Por otro lado se tiene un Congreso que estaba fraccionado por los intereses ideológicos, y que incluso habían aprobado su receso para el mes de mayo; de pronto el asunto de castigar a los militares Arguedas y Carrión, termina por solidarizar a varios elementos conservadores del Congreso con la moción de los liberales; el diputado conservador Evaristo Gómez Sánchez fue víctima de los atropellos del militarismo, de allí que se entiende por qué la propuesta del Congreso, recibió un respaldo unánime de los hombres del legislativo. Los escritores del Gobierno, denominados ministeriales, enrostran el lado negativo a las funciones y logros del Congreso. El Parlamento va a defenderse de estos ataques, ellos señalaran que en un corto lapso de tiempo, han logrado la firma del tratado internacional de límites con el imperio del Brasil, también se consiguió la abolición de los diezmos, además de reformar varios artículos de la constitución de 1856 (El Comercio, El Congreso del 58, 7 mayo 1859).

Las pugnas entre el Congreso y el Gobierno concluirán cuando finalmente el legislativo entre en receso el 24 de mayo de 1859, Castilla en los días siguientes tenía que anunciar la convocatoria a una nueva asamblea o aceptar que el congreso que se había declarado en receso se vuelva a reunir el 28 de julio próximo. La solución que escogerá será la de decretar que el congreso no se volverá a reunir en el día señalado, pues ellos no tienen la potestad de volver a juntarse, ante ello decreta que se vuelvan a realizar elecciones para elegir nuevos representantes para el Congreso Ordinario que debía reunirse en julio de 1860. De esta manera, el Ejecutivo logra imponerse sobre el legislativo, donde los liberales se encontraban sumamente debilitados por el golpe que significó este decreto de Castilla (Basadre, 299, Vol. 4. pág. 299).

El ambiente dentro del cual se estaba desarrollando este conflicto se vio alterado por la insurrección que estalló en Ayacucho y Cuzco, en estas ciudades se realizan pronunciamientos que piden se declare vacante la presidencia de la república, pues el general Castilla, es acusado de infringir constantemente la Constitución, instaurando una dictadura. Ante tales infracciones, los ciudadanos del Cuzco llaman a los pueblos del país a restaurar el orden (El Comercio, Actas, 9 junio 1859); a esto se suma el alzamiento militar que se desató en la ciudad de Ayacucho, el coronel Herencia invita a las personas del departamento a secundarlo en su insurrección contra el gobierno; estas intentonas no tuvieron el éxito esperado, así concluye la década de 1850, con un Castilla encumbrado en la cima del poder, con

un Congreso que ha intentado imponerse al ejecutivo, fracasando en sus intentos: con la Convención de 1855 y el Congreso Extraordinario de 1858; los civiles una vez más son postergados de ejercer el poder político del país, y nuevamente se llamara a un nuevo Congreso para que cumpliera los designios del Presidente, ya que eran insistentes los rumores que si el Congreso Extraordinario volvía ser convocado, este se encargaría de declarar vacante la presidencia de Castilla.

Era necesario reunir una nueva Asamblea Legislativa con la consigna de elaborar una nueva constitución, es así que el Congreso de 1860 inmediatamente se aboco a la misión de elaborar la nueva carta constitucional, se pensaba que este Congreso iba a anular por completo la Constitución de 1856 y realizaría una carta constitucional más conservadora, ya que el presidente de este Congreso era el obispo Bartolomé Herrera, que en los primeros días había difundido su proyecto constitucional, que había sido criticado por ser ultramontano, dejamos este comentario, ya que más adelante comentare sobre la importancia de este proyecto. (Silva, 1874, p. V)

Para cumplir el encargo del Congreso, se nombró a la Comisión de Constitución que estaba presidida por Antonio Arenas, e integrada por José María Pérez, José Nicolás Rebaza, Ángel Ugarte, José María Jáuregui, Julián Sandoval y Pedro José Calderón quienes se encargaron de elaborar el proyecto de Constitución, que se encargó de rescatar los artículos que se pueden conservar de la constitución de 1856:

« (...) el dictamen afirmaba que se mantenía “todo lo conservable de la Constitución del 56, modificando o suprimiendo los artículos que la opinión consideraba como incompatibles o dañinos para el país, mejorando la redacción o distribución de otros e inspirándose, en todo momento, en la verdadera situación nacional» (Pareja, 1943, pp. 119 – 120).

De esta manera, esta comisión mantuvo, por ejemplo, la abolición de los fueros personales, las contribuciones directas, juicio de residencia a los empleados públicos la bicameralidad del Congreso, pero también se encargó de establecer innovaciones, como la creación de la Comisión Permanente del Congreso; todo siguiendo la idea de establecer el orden en la República, por ese motivo se abolieron las Juntas Departamentales, disminuyeron las figuras de las municipalidades y se suprimió el cargo de fiscal de la nación.

### **Capítulo III:**

## **Las propuestas constitucionales de 1855: el camino a la constitución de 1856**

### **1. Propuestas de cambio constitucional**

La construcción del Estado es una de las ideas que toma una mayor consistencia a mediados del siglo XIX. Una de las propuestas proclamadas consistía en consolidar el sistema representativo, ya que de esta manera se aseguraba la voluntad de las respectivas poblaciones. Por ello, una de las formas que asegura el sistema republicano era promover el equilibrio de poderes, el cual debía estar establecido en la Constitución, que debía de impedir las constantes fricciones y discusiones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo; de esta manera se conseguiría el establecimiento del orden. Uno de los pensadores europeos que permitió justificar la búsqueda del orden, fue Benjamín Constant, el cual fue utilizado por los ideólogos del conservadurismo hispanoamericano. En el convictorio de San Carlos, centro del conservadurismo en el país, era importante su lectura; lo que se destacaba de este autor es su idea del poder conservador, el cual servía como sostén ideológico de este grupo, ya que tenía como meta: “[proteger] al gobierno cuando los gobernantes se encontraban divididos y al pueblo de los abusos del gobierno” (Barron, 2002, p. 265).

Este conservadurismo hispanoamericano se nutrirá ideológicamente con ideas que provienen de una Europa que ha sido trastornada por los ideales de la Revolución Francesa y el imperio napoleónico; una de esas ideas que encaja con el conservar el orden, proviene de Madame Stael, la cual plantea la importancia del *poder conservador* el cual busca el sentido de moderar las relaciones de los pueblos que integran el Estado, de esta manera se garantizaría la estabilidad social; este poder no es reaccionario, en el sentido de querer sofocar los cambios. Por ello se plantea la figura política de un gobierno fuerte, que pueda evitar las constantes crisis políticas que aquejan a las distintas repúblicas de la región, además con ello se lograría darle



un rumbo y orden al republicanismo del continente. Los legisladores de 1839 imbuidos en ese afán de imponer estabilidad al país tras los episodios de la Confederación, deseaban ajustar y perfeccionar un poder Ejecutivo consciente de las realidades del país y que además sintonice con los verdaderos deseos de los ciudadanos.

Por ello, la construcción de una nación estable, junto a una ciudadanía responsable, con instituciones que aseguren el orden del Perú, ha sido parte de los objetivos de los distintos grupos políticos que participan en la vida política del país durante la segunda mitad del siglo XIX. Desde mediados de la década de 1840, el Estado nacional se encontraba con la posesión de los recursos guaneros lo que le permitió la posibilidad de potencializar las capacidades financieras que hasta ese momento había sufrido una constante falta de liquidez en las arcas nacionales. La situación del Estado peruano es diferente a décadas anteriores y los actores políticos estaban de acuerdo con el establecimiento del orden que debía estar en consonancia con las ideas de modernidad y progreso que se tiene para esos momentos.

Una serie de criterios se crearon para poder asegurar el orden; así por ejemplo, se insistió en que los ciudadanos estén consientes en la construcción de un nuevo orden; para poder conseguir este criterio, era clave la construcción de la ciudadanía ya que esta era necesaria para sustentar el proyecto del país; en donde también las instituciones debían cumplir su rol en estas transformaciones. Los ciudadanos que participen en la construcción del nuevo orden deben ser protegidos, es por ello que los distintos proyectos que se van a elaborar aseguraran las garantías individuales para consagrar la acción de los ciudadanos. También debía asegurarse que la parte religiosa apoye estas ideas. Lo podemos apreciar en el siguiente párrafo:

« (La constitución) es la piedra angular del edificio social; que pierda su nivel, que se descantille, y el edificio bambolea, se hace inseguro. Cuanto más civilizado un pueblo, tanto más celoso es de inmunidad de su Carta Fundamental... (Espinoza, 1855)<sup>23</sup>».

Una vez más la victoria del general Ramón Castilla en alianza con los políticos liberales nos llevaron a este camino de construir un nuevo sendero

---

<sup>23</sup> La referencia se halla en un diccionario publicado por aquellos años.

constitucional. La Constitución de 1839 estaba siendo puesta en tela de juicio, y a la caída del régimen de Echenique aparecieron escritos incidiendo en que cuestiones debe haber cambios. En todos los planteamientos que se mostraron en los diferentes proyectos, se ansió crear puentes para poder formar una ciudadanía activa, que a su vez favorecerá la construcción de una institucionalidad que pueda permitir un gobierno adecuado que acabe con las revoluciones militares y se logre el anhelado gobierno democrático liberal, con individuos que puedan ejercer sus derechos civiles. Con ellos el país ingresaría insertándose a la modernidad y se desmontaría el corporativismo republicano. Por ello es de destacar que los grandes reclamos que se encuentran en la mayoría de escritos, es denunciar la precariedad de las instituciones de la República, asimismo se subraya la falta de ciudadanos capaces que contribuyan a poder estabilizarla, que ha sido marcado por la anarquía militar. Durante estos años, los liberales procederán a presentar una serie de reformas, pero no fueron los primeros, ya que antes de ellos, son los sectores conservadores quienes desde 1842 empiezan a presentar un proyecto orgánico basado en el orden; para ello ya tenían el estímulo de la Constitución de Huancayo, en el cual se sentarán las claves del conservadurismo peruano y esto obtendrá como consecuencia una cerrada crítica de los sectores liberales.

## **2. Crítica a la Constitución de 1839**

Desde su promulgación esta Constitución fue expuesta a constantes críticas: La primera parte de la década de 1840 fue una de las más caóticas de la historia republicana: la muerte de Gamarra en Ingavi y la posterior anarquía militar, posibilitaron este ambiente político cargado de tensiones contra el Ejecutivo; además se suman las críticas y desazón hacia la carta constitucional de 1839, la cual era acusada de perennizar y eternizar el autoritarismo de los militares, con todo su despotismo y arbitrariedades que ocasionaban la situación caótica del país. A esto hay que sumarle la crítica que planteaban los liberales, en la que acusaban que esta Constitución dificultaba el funcionamiento del Estado peruano, obstaculizando el desarrollo del país.<sup>24</sup> Como se puede apreciar las mayores críticas que se hicieron a

---

<sup>24</sup> Ulloa, José Casimiro. *El Perú en 1853. Un año de su Historia Contemporánea*. Paris: 1854, pp. 13 – 14.

esta norma constitucional, giraba en el excesivo poder que le otorgaba al presidente de la República, el cual poseía demasiadas facultades, los demás poderes del Estado quedaban sujetos al Ejecutivo; además se condenaba el hecho de que no se había discutido convenientemente cada uno de los artículos. Otra de las acusaciones que se hicieron contra aquella constitución, es que fue forjada por personas sin ideales, ni principios, ni trayectoria, Vargas Ugarte relataba que este Congreso Constituyente carecía de relieve intelectual y autonomía política, por ello la carta constitucional de 1839 fue elaborada bajo el dominio de los militares, cuya figura predominante era el general Agustín Gamarra, quien luego de su triunfo en Yungay, de mano de los restauradores chilenos, deshizo la Confederación Perú – Bolivia.

Definitivamente las experiencias traumáticas que vivió el país entre 1834 y 1839, posibilitaron el éxito de las ideas conservadoras y centralistas que se experimentaron con la Constitución de Huancayo. No olvidemos que el tortuoso camino de nuestra joven república durante la década de 1830, fue realmente calamitoso, así tenemos la primera presidencia autoritaria del general Agustín Gamarra y las constantes conspiraciones que se tramaron contra su gobierno, agreguemos a este panorama caótico, el estallido de la guerra civil de 1834 que se desencadenó entre el general Pedro Bermúdez, aliado con Gamarra, y el general José Luis Orbegoso, que concluyó con la victoria de este último y el advenimiento liberal que intentó imponer la constitución de 1834, que a su vez ocasionó el descontento de grupos conservadores que apelaron a la figura del presidente de Bolivia, el general Santa Cruz, quien finalmente se adueñó del país logrando implementar su proyecto político.

El establecimiento de la Confederación Perú – Bolivia fue realizado en un escenario violento, que segó la vida del general Felipe Santiago Salaverry, quien finalmente fue vencido y ajusticiado en Arequipa. La clase dirigente peruana no estaba alineada con la política del supremo protector de la Confederación, de allí que cuando hicieron su ingreso al país las expediciones restauradoras que enviaron los chilenos, muchos peruanos se unieron a esta invasión, que terminó en las jornadas de Yungay. Uno de los grandes beneficiados con la disolución de la Confederación fue el general Agustín Gamarra quien fue nombrado presidente provisional. Desde la ciudad de Huancayo este caudillo procedió a realizar una nueva constitución que permita poner, una vez más, orden a nuestro inestable Estado.

Se hizo la convocatoria a un Congreso Constituyente que se encargó de legislar para lograr «(...)el arreglo y la felicidad del país»<sup>25</sup>, en esa ruta, lo primero que hizo fue declarar la muerte de la constitución anterior, la de 1834; luego se pusieron a censurar a los personajes que habían ocasionado la crisis anterior, nos referimos a la figura de los generales Orbegoso y Santa Cruz, asimismo el estigma cayó sobre las personas que habían participado en las asambleas que dieron origen a la Confederación.

La Constitución de Huancayo implementada en 1839, tenía mucho que legislar y censurar a su vez. De allí que las críticas contra esta carta sean constantes, especialmente de los elementos liberales quienes aducían sus falencias y limitaciones, que más adelante veremos; además, se imputaba que la Asamblea de Huancayo fue elaborada por personas que carecían de ideas reformistas. Esta crítica debía ser tomada con mucho cuidado, pues no se debe olvidar que la Constitución de 1839 respondía a las necesidades de la época. Las circunstancias políticas determinaron que esta carta magna dure mucho más tiempo que las otras (tuvo vigencia desde 1839 a 1854).

La figura de Gamarra y la de la Constitución quedaron entrelazados. Uno de los críticos fue el general Vivanco quien denuncia esta infortunada situación<sup>26</sup>. Además, su programa establecía ideas realmente revolucionarias (se acercaban mucho más a los planteamientos de los liberales) como el voto universal y directo, defensa de la descentralización política y administrativa, y en cuanto a la representación política pretendía la proporcionalidad de los congresistas con respecto al número de pobladores de sus provincias. (Del Águila, 2013, p. 129). Ya basándonos pertinentemente al orden constitucional, las críticas a esta constitución se

---

<sup>25</sup> José Pareja Paz – Soldán. *Historia de las Constituciones Nacionales*. Texto clásico que estudia y describe las cartas constitucionales, así como los Congresos constituyentes que se organizaron para poder dar estas normas.

<sup>26</sup> Exposición que hace el general Vivanco al Perú. En este escrito Vivanco describe su crítica a lo que paso después del establecimiento de Gamarra: «...Mandaba el General Gamarra por segunda vez la Republica, desde 1840, a consecuencia de la batalla de Yungay, y a la sombra de su autoridad germinaban de nuevo las semillas de la inmoralidad desparramadas durante su primer gobierno. Preveían los más entendidos, y la Nación entera presentía el funesto desarrollo que dejadas al tiempo llegarían a tener; por lo que haciendo urgente la necesidad de prevenirlo, se dio por primera vez en Arequipa el grito de Regeneración, que revelaba patente el noble designio de reconstruir el edificio público, fortaleciendo sus únicas, indestructibles y eternas bases, la religión y la moral, la familia y la propiedad...».

manifiestan durante el impopular régimen de Echenique. El asunto que hizo notar a la ciudadanía sobre las limitaciones de esta constitución, fue el problema que estallo entre el ciudadano Domingo Elías y el presidente general José Rufino Echenique. El escenario reflejó la precariedad de las normas del Estado peruano, se corroboraba una vez más, que la teoría va por camino diferente que el de la práctica; situación que había sido reclamada por Toribio Pacheco en su obra *Cuestiones Constitucionales* (Pacheco, 1854, pp 48 – 49).

La acusación que realizó el comerciante Domingo Elías en el periódico *El Comercio* hizo de conocimiento público, el escándalo de *La Consolidación*. Situación que ya era conocida y criticada en secreto, pero que nadie se había atrevido a ponerla en tela de juicio y a hacerlo público. En una serie de cartas que publico Elías, en el referido periódico, se demostró el nivel de corrupción a la que había llegado el régimen de Echenique. La respuesta del Gobierno fue ordenar la captura y expulsión del mencionado ciudadano. A partir de ese momento se inició la tormenta política contra el Gobierno y una serie de críticos hacia el régimen fueron perseguidos y desterrados. Se había destapado los límites de la organización del Estado peruano, de allí que los proyectos y reformas que surgieron en el transcurso de esos meses, apuntaban a reorganizar al Estado, había que hacer un nuevo pacto, esta vez definitivo que permitiera establecer las funciones para los poderes del Estado, así como resguardar las libertades individuales, que debían ser los nuevos pilares que surgiría cuando fuese derribado el decadente régimen del presidente general José Rufino Echenique.

Centrándonos en las críticas que se lanzaron a la Constitución de Huancayo, se denunciaba en que esta no velaba por el buen funcionamiento de las instituciones, las exponía a un constante fracaso, ya que maniataba el Poder Legislativo y Judicial a la potestad del Ejecutivo. Es por ello que en las publicaciones que se difundieron por aquellos años se pone el ejemplo de dos naciones que sí marchaban por el orden constitucional e institucional, como la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ambas naciones basaban su prestigio en la fortaleza de sus instituciones y el respaldo al sistema legislativo. En los escritos se plantea que el principio básico para poder proponer e implementar normas adecuadas, resulta del conocimiento básico de las

costumbres de las distintas poblaciones, solo así se podrían implementar normas adecuadas para la realidad del país<sup>27</sup>.

Estudiando las normas que se establecieron en la Constitución de 1839, los críticos señalaban que no había propuestas para ampliar la ciudadanía, sino que se encargaba de limitarla a un grupo cerrado, además se encargaba de limitar el derecho de sufragio, solo podrá ejercer sus derechos de electores aquellos los ciudadanos que puedan pagar obligatoriamente sus contribuciones al Estado; a esta crítica también se agrega el establecimiento de la cláusula de ser alfabeto para poder ejercer el derecho de sufragio, cuestión que era ya discutida en las constituciones y proyectos anteriores<sup>28</sup>. Otra de las grandes discrepancias que surgieron para alcanzar la ciudadanía giraba en torno a la edad (debía cumplir los 25 años). Aquí se contempla la hostilidad que tienen los legisladores de Huancayo, con respecto a la juventud lo cual es fruto de los desórdenes que se habían experimentado en la década de 1830, como ya se comentó. Una crítica más que se dio a esta Constitución, fue que era servil a los intereses de los militares, hecho que tal vez no importaba mucho a la población, pues la mayor parte de la sociedad está harta de la violencia política que los caudillos habían desencadenado, por ello, fruto del cansancio político, la sociedad estaba dispuesta a aceptar un régimen despótico, donde el establecimiento del orden, era la idea más consensuada, aunque no importaba con ello que se sacrificara muchas libertades ya que lo que importaba era conseguir el ansiado orden. Con el correr de los años se mostrara las falencias que adolecía esta carta constitucional y que posibilitó el establecimiento de una nueva Constitución, que fue la de 1856.

La Constitución de 1839 estableció un sistema centralista, que otorgaba al presidente facultades que le permitían controlar el interior del país, además se eliminaban los órganos de representación ciudadana al interior del país, como las municipalidades que fueron abolidas y los prefectos y subprefectos se encargaban de controlar y guardar el orden en representación del presidente; también los intendentes de policía quedaban encargados de la función judicial y el resguardo del orden.

---

<sup>27</sup> Toribio Pacheco en *Cuestiones Constitucionales* vuelve declara los beneficios del régimen parlamentario británico y los beneficios que trae ello, pp. 48 – 51.

<sup>28</sup> Alicia del Águila en su texto *La ciudadanía Corporativa. Política, constituciones y sufragio en el Perú (1821 – 1896)* se encarga de estudiar la democracia sin base, en la cual la Constitución de Huancayo se convierte en uno de sus principales íconos.

Durante el primer gobierno de Castilla, este sistema centralista favoreció a sus intereses políticos, y que de una y otra manera, le permitió tejer una red de clientelas en el interior del país, evitando el abuso del poder sobre las comunidades campesinas, las cuales se convertían en dóciles instrumentos del Gobierno.

### **3. El orden conservador y la soberanía de la inteligencia**

Después de la trágica anarquía que había sumida al país en un gran desorden, la figura mediática del general Ramón Castilla empieza a tener un protagonismo inusual. Su primer gobierno será testigo sobre como este respaldó ideológicamente en los conservadores, pero ya poco a poco este liberalismo empieza a tomar posiciones en el país, desde el punto de vista económico. El país estaba agotado y deprimido por las constantes pugnas entre los militares, la fragilidad de las instituciones y porque los sectores populares que eran arrastrados a este caos, siguiendo a uno y otro caudillo: había que culminar tal tragedia.

En la década de 1840, el discurso conservador empieza a ser mejor articulado y recibido por el país, empieza a fomentarse una serie de ideas como el apego a las tradiciones, los valores con la finalidad de mantener la estabilidad política y social, una de las definiciones que se da a este grupo es el siguiente

«Este vocablo se puede aplicar a una persona, partido político, gobierno o institución que se opone a las peticiones, proclamas y declaración de derechos que proponen los sectores liberales. Parte de la creencia de que las instituciones de la sociedad han evolucionado lentamente y permanecen gracias a que han resistido el paso del tiempo, teniendo como principal virtud a la cautela. La tarea del gobierno, según los conservadores, es proteger a los miembros de la sociedad, por medio de grupos institucionalizados y en la medida de lo posible reparar las injusticias y resolver problemas. Pues consideraba que algunas personas nacieron con habilidades superiores; que la propiedad privada es buena para la sociedad y para los individuos y se oponen a la intervención del gobierno, en especial, en la regulación de la economía» (De Rázago, 2007, pp. 73 – 74).

Es una conceptualización que nos define como este grupo político piensa y actúa, además tuvo una cabida en Lima, una ciudad que había logrado resistir con éxito el asedio del liberalismo económico, por ello se podía articular el discurso

conservador. En ello había en común un nacionalismo económico con prácticas restrictivas hacia el libre comercio liberal. Aquí la oligarquía costeña juega un papel importante en esta figura, especialmente los hacendados del norte, quienes se oponían con fuerza al liberalismo económico fomentando este proteccionismo, que calzaba con los intereses de las élites regionales, claro está exceptuando el sur del país que si está con la lógica del liberalismo económico, por ello se aprecia la desarticulación del país. Lima y el norte con la lógica proteccionista, y son los promotores del conservadurismo; y el sur del país, con Arequipa a la cabeza, que impulsa el liberalismo económico, pero también el político, en ese sentido el Perú se encuentra en un momento de fragmentación regional, política y social: además, hay que sumarle el problema de la geografía. (Gootenberg, 1997, pp. 73 – 86).

Como estábamos estudiando, este discurso ideológico conservador tendrá acogida en una serie de personajes de la élite limeña, de la Iglesia y de políticos, quienes empezaron a orquestar este discurso bajo la idea de resistir las innovaciones que desestabilizan la República: Uno de los primeros ideólogos que apuestan por el orden conservador fue José María Pando quien se encargó de modelar el discurso, basado en el liberalismo doctrinario francés que privilegiaba la autoridad, la clásica división de poderes y el sufragio censitario. Pando había defendido a los hacendados sobre sus derechos sobre la esclavitud; pero no fue Pando quien articuló el discurso conservador, sino el obispo Bartolomé Herrera quien se encargó de organizar concienzudamente este discurso ideológico. Desde las aulas del Convictorio de San Carlos, Herrera señalará uno de sus postulados más emblemáticos (la *soberanía de la inteligencia*), impulsará la defensa del clericalismo y la difusión del liberalismo doctrinario francés.

Bartolomé Herrera en uno de sus sermones, en las exequias a Gamarra (1842), plantea que la base para salir de esta inestabilidad política que afecta a la República, es el respeto al orden, que debería partir desde las autoridades, por ello era indispensable que se cumpla tal postulado, de esta manera Herrera inicia su prédica a favor del restablecimiento del orden en el país. Desde las aulas del Convictorio se empieza a difundir la *soberanía de la inteligencia*, que había sido tomada del español Juan Donoso Cortez, en la cual incidía que la inteligencia debía convertirse en el medio para gobernar. Se agrega que en la sociedad hay una serie de hombres destinados a mandar porque ellos poseen la razón y el amor a la patria y a



los justo, se entiende entonces que unos individuos han nacido para mandar y otros para obedecer, por ello debe restringirse el derecho de sufragio (Del Águila, 2013, pp. 112 - 113).

Herrera impugna el principio de la *soberanía popular clásico* donde el pueblo tenía una importancia en la participación del Gobierno. Herrera reformula este postulado y plantea que la soberanía no es sino el deber de los pueblos de acatar las órdenes de sus dirigentes, conforme a los designios divinos. En el sermón del 28 de julio de 1846, exclama:

«El hombre que ejerce la autoridad no es sino ministro de Dios para el bien. ¿Quién puede ser considerado como legítimo soberano? El que gobierna habitualmente conforme a la justicia, en la sociedad actual, el llamado por las leyes. ¿Si no hay leyes? Hay quienes están destinados a mandar; otros a obedecer. Para constituirse en soberano se requiere el consentimiento del pueblo manifestado en la obediencia. El pueblo no delega; consiente. (Basadre, 2005, IV, p.147)».

De esta manera Herrera explicó los beneficios de la soberanía de la inteligencia, posteriormente sostendrá un debate político con Benito Lazo, jurista liberal arequipeño, que impugno los ideales de Herrera; desde el periódico *El Comercio*, el obispo lejos de retirarse del debate, se encargó de sustentar una vez más sus ideas. En aquel debate sostiene que el pueblo no tiene la suficiente capacidad, ni la praxis para poder hacer leyes, ya que ellos no están habituados al duro trabajo intelectual, por ello señala, sería un absurdo encargarle a ellos el dictar las leyes, los que sí tienen esa potestad son los que tienen la capacidad de la inteligencia, ellos si tienen las facultades para legislar de manera pertinente (Basadre, p. 148).

Era indudable que el éxito de Herrera se debía a una mejor disposición al debate. Fue mucho más organizado que sus antecesores, y superó a Pando y a su grupo. Otro protagonista de este conservadurismo es José Domingo Choquehuanca, contemporáneo de José María Pando, quien también argumenta de manera consistente la soberanía de la inteligencia, en su texto *Complemento al régimen representativo para el establecimiento de sociedades de la formación de proyectos de ley para acelerar los adelantos de la ilustración y en consecuencia La Consolidación del gobierno que hoy rige el Perú* (1845) que fue escrito después de

la Constitución de 1839. En sus 102 páginas describe como es el Perú de aquellos años un país con riquezas naturales, con una población abundante, pero que necesita estar organizada bajo los preceptos de la razón. Pando plantea que la sociedad está organizada en las siguientes categorías: *Los ilustrados*, que son los destinados a dar las leyes; *los cultos*, que están en las clases profesionales y dan un bien al país; *los civilizados*, que son las personas alfabetas capaces de participar en la creación de la riqueza del país; y *los semibárbaros*, gente sin educación. En este incorpora a los indígenas y a los mestizos (Choquehuanca, 1845, 40 – 47).

En fin podemos resumir, como plantea Alicia del Águila, que estos proyectos eran elitistas y conservadores, convencidos de la *soberanía de la inteligencia*. Con ello se reforzaba las bases de esta República corporativa; así se evadía el principio liberal de la soberanía popular, evitando elecciones universales democráticas, pero permitiendo el sufragio censitario el cual era clave para poder sustentar el corporativismo.

#### **4. La contraofensiva doctrinal liberal: Los debates de 1849 y la organización del liberalismo**

Ante tales argumentos conservadores sobre su concepción política, y por sobre todo su manifiesto del orden, esta sería respondida por los sectores liberales, quienes sostendrán durante el año de 1849, un tumultuoso debate con Herrera; los liberales reaparecerán en escena y empiezan a refutar los argumentos de Herrera. Las discusiones desde el parlamento entre Pedro Gálvez y Bartolomé Herrera serán en torno sobre el sufragio de los indios. Allí cada uno argumentó sus posturas ideológicas; sumándole a esto la creciente rivalidad entre el Convictorio de San Carlos y el Colegio Guadalupe, que se convirtió en la base liberal para enfrentar el discurso conservador.

El debate sobre el proyecto que otorgo el derecho de sufragio y ciudadanía a los indios y mestizos entre Gálvez y Herrera se desarrolló entre el 6 y el 7 de noviembre de 1849. Herrera negaba la posibilidad a los indígenas de ejercerla por su condición natural y consideraba que por ello ninguna nación en su sano uso de la razón, ha concedido el sufragio universal a pueblos que no sepan leer y escribir,

además, la crítica iba para el resto de las razas y se encargó de demostrar el uso ambiguo de la palabra indígena. La respuesta de Pedro Gálvez fue contundente; en primer lugar, exclama que las capacidades no pueden ser el origen para limitar la ciudadanía a los indígenas, ello sería inhumano, e injusto. Más bien recalca que las leyes son ficticias y opresivas ya que la aptitud para elegir no puede determinarse por el hecho de ser alfabeto sino que todos los individuos poseen aptitudes para desempeñar alguna función, por ello apela a la dignidad humana (Basadre, 2005, IV, pp. 154 – 155). El debate se inclinó por Pedro Gálvez, ya que sus argumentos fueron suficientes para poder ratificar el derecho de los indígenas y los analfabetos a sufragar, aunque detrás de ello comenta Alicia del Águila, había más que una defensa a este ideal liberal. Lo cierto es que aquellos votos del interior del país, donde había una mayor masa indígena, daban representatividad a muchos congresistas (Del Águila, p. 135).

Esta cuestión no queda zanjada aquí, ya que la inevitable rivalidad de los centros ideológicos, el Convictorio de San Carlos y el Colegio Guadalupe, permitirán que el debate se amplíe durante los años 1849 y 1852, y cada uno se encargaba de instruir a varias personas con dichas ideologías. Jorge Basadre *Perú problema y posibilidad* nos describe como ambos centros se encargan de difundir sus posturas. San Carlos promoverá el sentido del orden, bajo el espíritu aristocrático se promueve la soberanía de la inteligencia, el sentido de la obediencia; en cambio, Guadalupe, que fue fundada por Sebastián Lorente y dirigido por los hermanos Gálvez, se encargarán de difundir el sentido de la libertad, el espíritu de la democracia liberal, el laicismo, la libertad de opinión, este debate se verá interrumpido cuando el gobierno de Echenique clausure el colegio Guadalupe.

La Iglesia no era un cuerpo homogéneo que había aceptado las propuestas de Bartolomé Herrera, durante los sermones del 28 de julio de 1847 y 1848, el clérigo Agustín Guillermo Charún en 1847, lanzo un discurso criticando a la monarquía absoluta, señalando las bondades de la monarquía constitucional y de la soberanía popular; al año siguiente en 1848, el clérigo Pedro José Tordoya en el sermón dado comenta que los soberanos no han recibido su poder de Dios, su legitimidad descansa sobre la elección del pueblo, ya que Dios les ha dado la potestad de organizar el poder y el derecho de elegir a las personas que se encargaran de elegir la soberanía (Basadre, 2005, IV, pp. 165 – 167).

## 4.1 El liberalismo y Arequipa

En ese sentido queda ahora la tarea de explicar quiénes son los liberales que van a surgir en esta época donde muchos de ellos no tienen su origen en Lima. La primera generación republicana del liberalismo no había conseguido difundir sus ideales, no había las condiciones adecuadas, geográficamente los liberales de las primeras décadas de la república, al menos en el sentido económico, estarán en el sur del país, en especial en Arequipa, donde la idea del libre comercio había estimulado que dicha ciudad abogue por el liberalismo. La actuación de los caudillos lograron movilizar a la ciudad con toda sus redes de clientelas, bajo una serie de promesas Arequipa y sus alrededores se sumergían en las prolongadas luchas de caudillos, dando la imagen de fortaleza entre la unión de los distintos actores sociales, por ello los diversos sectores sociales en la ciudad se fueron politizando, y los liberales tendrían una gran influencia lo que provocó que la ciudad adquiere conciencia política; de allí el apelativo que se le diese de *Ciudad Caudillo*.

Arequipa se convertirá durante el siglo XIX en el bastión de las revueltas, muchas de ellas teñidas, como comentamos, con el liberalismo; la razón de toda esta conducta es oponerse al centralismo limeño, que desde la época colonial ha presionado a la ciudad. Pasaron de una resistencia pasiva, evadiendo el pago de impuestos, hasta una resistencia armada donde apoyaron a una serie de caudillos que les prometían asegurar su modo vida que influiría en la economía y sociedad. Desde el plano económico, abrazaron el liberalismo económico, que estimulaba el libre comercio y la protección de su producción local. En ese recorrido se encuentra que las bases de este liberalismo económico arequipeño se debía a 4 factores: Su influencia en los mercados del sur, la distancia de la opresora Lima, las prácticas monopólicas y centralistas de la élite limeña, y las incentivos británicos hacia las exportaciones de nitratos, quinina y sobre todo lanas (Gootenberg, 1997, p. 67). El gran error de los liberales arequipeños, fue su incapacidad de poder articular un bloque regional sureño ante las pretensiones centralistas de Lima. Las prácticas económicas que desarrollaron permitió que la ciudad abrace el liberalismo político, por ello que la ciudad tendrá un discurso liberal, pero matizado con su realidad ya

que tiene que convivir con un catolicismo conservador acompañado de sus ideas populistas e igualitarias (Chambers, 2003, pp. 51 – 53).

El origen de este liberalismo político arequipeño está ligado al desarrollo de la negociación política que tuvieron que desarrollar en los procesos judiciales. Allí desempeñaron un papel clave los abogados quienes a través de la utilización de un discurso patriótico, el uso de la constitución para poder reclamar por las arbitrariedades de las autoridades del Gobierno central, permitió gradualmente que se ampliase su conocimiento sobre la ciudadanía y las garantías constitucionales. De esta manera, los sectores populares (como artesanos labradores) empezaron asumir su participación en la política. No fue *ipso facto* dado que el proceso empieza a cuajarse desde finales de la época colonial. Los arequipeños empezaron a participar en las luchas de los caudillos nacionales, con miras de poder obtener favores del Estado central; por ello, hay una notable politización de la población arequipeña, que es captada por las élites de la ciudad, que logra armonizar sus demandas con las de toda la población, dirigido contra el centralismo de Lima, atribuido de querer asfixiar a las regiones.

En esa coyuntura se forja la alianza de Arequipa y los caudillos, la ciudad y su entorno lucharan mano a mano con los caudillos que le diesen facilidades, es allí que se inserta la figura del general Manuel Ignacio de Vivanco, personaje que tendrá acogida popular en la ciudad y que es responsable de restaurar mucho de los beneficios de la ciudad, esto lo realizó cuando fue prefecto de la ciudad entre 1841 y 1844. Entre sus medidas que son recordadas fue la promoción del libre comercio en la región, la protección de las industrias, además en el plano político prometió un sufragio más amplio junto a la protección de las garantías constitucionales; es por ello que Arequipa lo respaldó en varios momentos de su vida política, como durante la llamada *Regeneración*, la campaña electoral de 1850 - 1851 y en la rebelión de 1856 contra su gran rival el general Castilla.

La población arequipeña, incluimos élite y sectores populares, se movilizaba bajo una sola voz, su activismo político se justificó en función de los derechos de los ciudadanos que habían conquistado en la República. Allí como se hizo notar los abogados desempeñaron un papel clave. Muchos arequipeños desempeñaron papeles importantes en la Corte Suprema, además de tener un impacto directo en la política

nacional, allí tenemos las figuras de Manuel Toribio Ureta, Toribio Pacheco, José Gregorio Paz Soldán, Evaristo Gómez Sánchez. Así tenemos que estos abogados arequipeños practicaron un liberalismo, con ideas europeas, pero estaba tapizado por la interacción con los sectores populares, es así que los liberales arequipeños promovieron los postulados del liberalismo político, como el libre comercio. (Chambers, pp. 243 – 264)

Personajes prominentes del liberalismo arequipeño son José Simeón Tejeda, el cual defiende el liberalismo librecambista Su obra más conocida es *Emancipación de la industria*, donde apostaba por el desarrollo de industrias en el país; otro destacado liberal que inicia su participación en la política es José María Quimper, que también promueve el libre mercado y la importancia del principio de la libertad ante el pueblo y las garantías civiles. Uno de los más destacados liberales es el clérigo Francisco de Paula que tendrá una influencia arequipeña, ya que él es de origen tacneño, y que planteó la importancia de las comunidades y asociaciones cívicas, además que centraba sus mayores críticas contra la Iglesia Católica (Chambers, pp. 257 – 262). De esta manera, Arequipa tendrá un papel importante en el desarrollo del liberalismo de mediados del siglo XIX, con el fin de pertenecer al discurso modernizador del país.

#### **4.2 El liberalismo y su conceptualización a mediados del siglo XIX**

Los liberales republicanos, en su segunda generación cuyos nombres se han comentado, proceden de las provincias del interior del país. Ellos estaban impulsados por la necesidad de imponer reformas y la campaña electoral de 1851 creó el momento clave para organizar los planteamientos liberales, los cuales no eran nada novedosos, dado que se esgrimía desde el momento fundacional de la República. Es preciso apreciar sus planteamientos, que podrían ser resumidos en los siguientes postulados:

- El desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de esta, por el progreso de la sociedad.

- El liberalismo implica prácticamente, que el hombre como ser racional, sea quien decida como pensar y de qué manera debe actuar; en sí, tener libertad de pensamiento.
- La libertad de tránsito.
- La libertad de educación
- La libertad de culto.
- La libertad de escoger a sus gobernantes.

Estos planteamientos no habían cambiado mucho, ya que los liberales del siglo XIX, argumentaban que estas propuestas, no implicaba que la democratización total de la sociedad dado que debía darse de forma lenta y paulatina. Esto los diferenciaba de los liberales radicales que si deseaban el cambio social inmediato.. El radicalismo estuvo liderado por el chileno Francisco Bilbao y Enrique Alvarado quienes enfilaron ácidas críticas a los liberales de 1855. Por ello se denota que el liberalismo de mediados del siglo XIX ha desarrollado un programa más pragmático que abogaba por una actividad constructiva del Estado en el campo social, manteniendo la defensa de los intereses individuales. Los defensores de este tipo de liberalismo argumentan que la Iglesia y el Estado no son los únicos obstáculos en el camino hacia la libertad, y que la pobreza también puede limitar las opciones en la vida de una persona, por lo que aquella debe ser controlada por la autoridad real (De Rávago, 2007, II, p.30).

De esta manera, nuestros liberales poseían un programa orgánico, que en la campaña electoral de 1851 se articula desde el club Progresista, que lanza la candidatura de Domingo Elías, cuyos puntos programáticos se verán difundidos desde el periódico *El Progreso*. En sus publicaciones incidirán, que el Gobierno civil es la alternativa que puede llevar al orden, rechazaba a los militares ya que estos no han sabido llevarnos al verdadero orden, y expresaba su intención de que el pueblo participará en el Gobierno y la opinión pública legitimaría y fiscalizaría sus acciones. Agregaba la recomendación de una vida asociativa que lograría la igualdad social, ampliaría las libertades y consolidaría la moral gracias al fortalecimiento del objetivo era fortalecer el poder civil local. Con estas ideas presentadas, presentaron su plan de gobierno que estaba organizado en dos puntos: en primer lugar las mejoras sociales, las cuales implicaba fomentar el progreso del individuo y de la sociedad, garantizando la propiedad, fomentando la educación, la industria y el comercio,

además de fomentar la migración extranjera; el segundo lugar, proponía las reformas políticas del Estado, el incluía la descentralización, la organización del Estado y la elaboración de censos; de esta manera se lanzaba estas propuestas, que posteriormente serán aplicadas por los liberales de la Convención Nacional de 1855.

Esta nueva generación de liberales que han entrado en escena promovió una serie de reformas políticas, económicas y sociales que finalmente encaminen al país al camino de la civilización y del progreso; en el plano económico defendían el libre comercio, la producción especializada y la vinculación al mercado mundial, esto implicaría el desarrollo de la instrucción de la población que es la que abastecería con su trabajo calificado el desarrollo del país; estos planteamientos se aplicaran durante la segunda mitad del siglo XIX, finalmente se desarrollara en la época guanera. A partir del gobierno de la década de 1850, veremos cómo los liberales empiezan a participar con mayor fuerza en el debate político. Primero en la campaña electoral de 1850 – 1851, luego en la crítica al gobierno de Echenique, después, en la guerra civil de 1854, dirigirán el país desde la Convención Nacional de 1855 y serán oposición al castillismo durante el Congreso Extraordinario de 1858 y el Congreso de 1860.

## **5. Las propuestas hacia un nuevo orden. El camino al triunfo Liberal**

Durante el estallido de la revolución moralizadora de 1854 aparecerán numerosos escritos que empezaron a reclamar como debe organizarse el país para un mejor desenvolvimiento de la institucionalidad, muchos de estos escritos están guiados bajo las banderas del liberalismo que buscan imponer un orden definitivo, para así poder iniciar una nueva etapa de prosperidad. Es por ello que para poder consolidar las nuevas ideas, era necesario que estas estas propuestas se logren plasmar en leyes que organicen la república y establezcan las bases de los derechos políticos de los ciudadanos, para ello era necesario el establecimiento de la Constitución, la cual era necesaria, por ello Felipe Masías nos dice:



«La constitución política debe ser aceptada por todos o al menos por la mayoría de los individuos que componen un país, a fin de que sus preceptos sean obligatorios, pues no siendo estos preceptos sino leyes, se requiere para su existencia y observancia la aceptación del pueblo, que en este caso debe ser expresa, puesto que dicho consentimiento es condición en que estriba la fuerza obligatoria de las leyes» (Masías, 1855, p. 59).

Por ello el deseo de poder articular estas ideas en la nueva constitución, permitieron que surgieran una serie de destacados personajes, que para mediados del siglo XIX, nos plantearon sus visiones e ideales sobre cómo organizar el país. Quiero empezar con la figura de José María Quimper, destacado político liberal arequipeño, que en 1854 escribe el texto: «Instrucción política y reformas para el pueblo. *Obra dedicada a las masas del Perú* (1854), texto que fue publicado en Arequipa, una de las principales ciudades opositoras al gobierno de Echenique. El texto es una justificación para explicar la revolución y los beneficios que espera conseguir el pueblo con estos cambios, claro está persigue la meta de mantener alejados del poder a los militares, ya que son acusados de habernos llevado a este calamitoso estado en que el país ha sufrido por este militarismo insensato.

La revolución moralista de 1854 era para los liberales la lucha por imponer en el país la democracia liberal. Los ideales democratizadores de 1848 habían llegado al país, por ello plantean que se debe realizar un cambio en las instituciones, instituciones y que deben acoplarse a los nuevos tiempos. Un factor clave que haría relevante estas transformaciones es el establecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos, estos son irrenunciables en esta nueva etapa. Hay toda una serie de ideas que deben ser realmente conocidas por los peruanos como la opinión, la soberanía, la libertad, el progreso público, entre otros. La opinión es uno de los pilares claves para poder transformar a la sociedad, esta surgirá cuando los pueblos se organicen y creen espacios para poder conocer, reflexionar y debatir sus distintos intereses, ya que al lograr realizar esto, el pueblo podrá articular su defensa, sus derechos y así podrá evitar que gobiernos ajenos a su voluntad traten de someterlos a su control. Por ello necesario que la sociedad civil pueda manifestar con claridad sus ideas, sus voluntades y de esta manera forjara su opinión, situación que le permitirá alcanzar la felicidad, en la cual debe estar comprometido todo el pueblo. (Quimper, 1854, pp. 10 – 11).

Todos los individuos tienen el deber de ejercer su opinión, según la mentalidad de los liberales, y claro si la persona siente que sus libertades son amenazadas, si aprecia que las instituciones políticas ya no cumplen sus funciones de satisfacer sus necesidades y las de los demás, es necesario que manifieste su opinión para que de esta manera las instituciones puedan cambiar, porque así también los individuos de la sociedad podrán expresar sus opiniones críticas a las coyunturas de injusticia, marginación y explotación. El momento posibilitó que se cree toda una corriente de opinión en todo el país, que obligara a impulsar cambios racionales, que permitirá expresar la verdadera voluntad de la sociedad civil. Para poder llegar a este punto, de poder contar con una opinión incisiva, se tiene que crear las condiciones básicas para la formación de la opinión, allí desempeña un rol especial la difusión de las críticas, para llegar a esta situación se tomó su debido tiempo; es así que los espacios públicos y privados, las asociaciones, la prensa se convertirán en el eje articulador de la difusión de las ideas críticas al gobierno de turno, donde el ideal de proclamar reformas deben ser escuchadas, en esa circunstancia las exigencias de poder ejecutarlas estarán en el campo del gobierno. Solo de esta manera se logra generar una corriente de opinión, que claro esta se estaba gestando por aquellos años, los acontecimientos políticos de mediados del siglo XIX, posibilitaban tal desarrollo.

El país era campo fértil para la difusión de tales escritos e ideas, puesto que habíamos tenido una serie de gobernantes que habían constantemente hecho caso omiso a las demandas de la sociedad civil de aquellos años, no olvidemos que los caudillos durante la década de 1840 habían llevado al país a sus horas más aciagas haciendo del país prácticamente ingobernable. Ya habíamos tenido gobernantes que se habían arropado de una serie de prerrogativas, se habían olvidado de sus deberes y manejaban a la ciudadanía a su antojo. Justamente esa situación que había azotado al país llevó en los años siguientes a formar una opinión que exigirá a los gobiernos de turno a implementar mejoras, de no hacerlo se estará incubando un escenario revolucionario. Esto finalmente aconteció durante el gobierno de José Rufino Echenique (1851-1854), donde su gobierno, como hemos expuesto, se caracterizó por una serie de situaciones que la opinión denunció.

El año de 1854 fue un año muy complicado para el desarrollo de la institucionalidad del país, ya que el gobierno de turno había perdido la confianza de los diferentes sectores sociales, dando inicio a la revolución liberal de ese año, que

acabara con la corrupta e inmoral gestión de Echenique; esta situación hacía forzosa la necesidad de realizar reformas en las instituciones porque esto era una exigencia que las publicaciones la solicitaban y esperaban que una vez caído Echenique, el nuevo Gobierno acometiera tales pedidos y que iba en armonía con la exigencia de la sociedad de pasar a una etapa de civilización y del progreso.

El escrito de Quimper, en otro de los puntos que toca, es apuntar a la revitalización de la figura de las libertades individuales, ya que esto permite defender el orden democrático de los pueblos, que son los pilares para poder establecer las reformas. Una de las ideas claves para los reformistas liberales era la soberanía popular, la cual es tratada por el autor de tal manera que ella debe abarcar a toda la nación, solo de este modo se conseguirá el ansiado orden público. Para poder realizar esta construcción debe fundamentarse en el respeto a la autoridad, factor clave para los reformistas. En las siguientes líneas el autor sigue empleando las ideas de libertad e igualdad, asume que el desarrollo de la igualdad no debe aplicarse para la totalidad de la población y declara que las jerarquías todavía son necesarias para evitar el caos y anarquía; esto nos permite apreciar la influencia del liberalismo doctrinario en este autor. Cabe resaltar que estas jerarquías no serán como las del pasado, sino que se basarán en las funciones que cada uno realice en la sociedad (Quimper, 1854, p. 29). Lo expresado por este liberal guarda consonancia con la idea de la modernidad tradicionalista, porque nuestra república posee una enorme masa de población indígena y de castas, que no estaban instruidas; por lo tanto no sabían de la importancia de la igualdad y solo los ciudadanos son los únicos capaces de gozar de la igualdad.

En cuanto a la libertad, ese bien tanpreciado en el ideal de los liberales, también debía tenerse sumo cuidado ya que gracias a ella se han ocasionado varios trastornos políticos. Para el liberalismo, la libertad es una idea clave, pues gracias a ella se permite el impulso de los derechos civiles y el establecimiento de las leyes, según comenta el referido autor. El arequipeño Quimper, en consonancia con el liberalismo burgués, plantea la existencia de las siguientes libertades:

- La libertad individual.
- La libertad de pensamiento y opinión.
- La libertad de imprenta.

- La libertad de industria y comercio.

Estas son libertades civiles con las que se alcanzará un legítimo progreso, y consecuentemente se construirá una nueva realidad; pero se tener debe mucho cuidado con este concepto ya que se puede mal emplear como había sido común por aquellos años. Su errónea utilización ha desembocado en la anarquía y dentro de las reformas que debían implementarse en el próximo gobierno era necesario que estén inscritas en la nueva carta magna. Esta idea es la demostración que no todos los liberales son parte de ese radicalismo o jacobinismo que algunos los denuncian, hasta podríamos establecer que guardan muchas semejanzas con los conservadores, esto se debe a que se nutren del liberalismo doctrinal.

Fruto de las ideas sobre la libertad, se desprende que para el mantenimiento del buen gobierno se requiere el establecimiento del *orden público*, planteado como la base para que toda sociedad alcance el progreso: de no haber alcanzado el orden, no se podría aplicar las doctrinas que buscan transformar al país. Solo una sociedad organizada puede hacer triunfar el deseo del orden y los individuos que conforman la sociedades deben tomar precauciones, como por ejemplo estar atento que la justicia sea clara a sus integrantes, que se ejerza una adecuada seguridad a sus integrantes y que se proteja el acceso a la propiedad y al trabajo. Solo con estas medidas, la sociedad peruana podría marchar de manera positiva y estaría enrumada en el ordenamiento liberal del orden y del progreso.

La idea de la soberanía popular es otro concepto defendido por los liberales, pero a la vez es muy discutido puesto implicaba que toda el cuerpo social fuera integrado, esto es siguiendo el ideal propuesto por la Revolución Francesa de 1789, en donde se destaca que « (...) cuando hablamos de la soberanía popular, nos referimos no a ciertas clases de la sociedad, sino al todo o a la reunión de los individuos que la forman». Esta idea será determinante para poder plantear las siguientes reformas en el país y alcanzar la democratización. El individuo debe tener que unir sus voluntades con otras personas, así se conseguirá, mediante una libre elección integrarse con otros seres con los que compartan las mismas expectativas, de allí resulta claro formar una comunidad soberana, integrada por sus habitantes libres; esta figura se encuentra en la constitución de 1856, la cual establece en su artículo primero que «la nación peruana es la asociación política de todos los

peruanos» y se reafirma en el artículo tercero en donde indica que «la soberanía reside en la nación, y su ejercicio se encomienda a los funcionarios que establece esta constitución». Allí está claramente la idea de que esta soberanía es la que va permitir el desarrollo de la institucionalidad. La cual debe estar en sintonía con la idea del orden, dentro del cual se podrá desarrollar la soberanía (Quimpo, 1854, pp. 19 – 24).

Una obsesión constante de los escritores es el de representar los vicios que tiene el gobierno es por eso que buscan acercarnos a lo que ha estado fallando en la construcción del orden republicano. Uno de esos escritores que nos presenta esa descripción es Toribio Pacheco, destacado jurista de mediados del siglo XIX, quien durante los años de 1854 dirige el periódico *El Herald*. Él es testigo de los cambios por los que atravesaba el país durante esos años, producto del progreso que trae consigo la era del guano. Este personaje está insertado dentro de los que se llamó el *tradicionalismo modernista*, el cual combina el conservadurismo de las clases dirigentes. Junto con el liberalismo, se trata ante todo de adaptar algunas ideas liberales a los intereses de la élite dirigente, aplicar el dogma liberal hubiera supuesto demoler el edificio tradicional del país. Pacheco desde este sistema tradicionalista modernista nos deja traslucir parte de ese imaginario político que plantea parte de las élites.

En la ciudad de Arequipa, desde el periódico “El Herald”, se publicó en 1853, el texto «*Cuestiones Constitucionales*» el cual contiene la mentalidad del proyecto *tradicionalista modernista*. Con la caída de Echenique se publica en Lima una segunda parte que lleva por título *Reforma Constitucional* donde nos muestra cómo debe organizarse el país, dándole un énfasis al Poder Ejecutivo, ya que de él dependía la debida gobernabilidad del país (Ramos, 1993, pp. 176 – 177).

La propuesta de un Ejecutivo relativamente fuerte, pero que no llegue a la autocracia es parte del accionar de Pacheco, quien comenta que para poder realizar una auténtica reforma que lleve a la gobernabilidad primero debe dejarse de imitar modelos que serían inaplicables a la realidad del país. Poor ejemplo estaba difundiéndose en una serie de escritos la idea de aplicar el régimen federal de los Estados Unidos que definitivamente es parte de una construcción política diferente a la nuestra, en nuestra realidad está el drama de no tener una población alfabetizada, que no es consciente de la importancia de las instituciones políticas, por ello antes de

pensar en cualquier proyecto que cambie el país es necesario instruir a la población para que tome conciencia de los cambios que se necesiten, solo así se podría seguir el camino hacia el federalismo. El drama al interior del país es notorio, pues en los departamentos de la República no hay una población que se encuentre alfabetizada. Estas se encuentran expuestas a minorías, que de una u otra manera intentan imponer sus criterios a las mayorías, por lo tanto se establecerá una suerte de aristocracia que fue criticada por grupos opositores con lo cual los departamentos se convertirán en escenarios de luchas intestinas. En esas condiciones el Estado central se verá incapaz de tomar decisiones, entonces el sistema provincial de descentralización es una tentativa que no traería los resultados deseados. (Pacheco, 1854, pp. 119 – 122).

Otros escritos plantean que el sistema descentralizado es necesario para la buena gestión del Estado. Se comenta entonces, que para no caer en la ambivalencia del federalismo, se debe impulsar el sistema municipal, el cual debe poseer una independencia del poder central y recursos financieros que les permita impulsar el gasto público en obras que benefician a las poblaciones. La importancia de las municipalidades está en el hecho de que finalmente se toma en cuenta a las localidades. Cada una de ellas velaría por sus intereses, en vez de que estas carguen sus demandas al Estado central. Otra ventaja que se hace notar es que este régimen municipal podría insertar a las poblaciones al conocimiento de la vida política, en la participación en los asuntos públicos, consiguiendo la posibilidad de poder insertarse en los manejos económicos de sus intereses; así se conseguiría la puesta en marcha del país, sin llegar a sacrificar los intereses de la nación en aras del federalismo. Esta propuesta liberal, finalmente será adoptada en la Constitución de 1856, donde los títulos XIV y XV, destinados a las Juntas Departamentales y a las municipalidades, impulsaban el régimen descentralizado en el país.

## **5.1 La importancia del Poder Legislativo y de la ciudadanía**

Otra de las ideas proyectadas en la nueva organización del país, después que se derrumbe el gobierno de Echenique, es apreciar cómo se organizaban los poderes del Estado. Uno de los poderes que debe ser organizado de una manera especial es el Legislativo, el cual se detalla, es uno de los más importantes. En él pueblo le delega la soberanía y por dicho motivo los legisladores deben gozar de la más absoluta

confianza de sus electores ya que serán los encargados de hacer las leyes en beneficio de la sociedad y no de intereses particulares; para poder conocer el papel de nuestros legisladores y sus obras, se hace necesario que estas normas deban publicarse en la prensa, para que las personas puedan conocerlas y tener la capacidad de organizar debates, formando opinión pública, el cual apreciara que puede ser aprobado o rechazado por la población. (Masías, 1855, pp. 11 – 15).

El Congreso es el escenario del desarrollo del Poder Legislativo, el cual debe estar integrado por un número determinado de representantes que a su vez deben poseer facultades y capacidades que demande la ley. Por ejemplo en la Constitución de Huancayo se estipulaba los siguientes requisitos: Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, treinta años cumplidos y poseer rentas de setecientos pesos. Claro está que estos requisitos fueron criticados por los reformistas liberales y serán cambiados en la Constitución Liberal de 1856. Este Congreso que debe establecerse en la nueva constitución debía ser bicameral, en donde una de las cámaras debe encargarse de examinar los intereses de comunes del país y la otra debe estudiar los intereses de sus circunscripciones territoriales, por ello deben establecerse la Cámara de Senadores y de Diputados. Esta dualidad ofrece la garantía de mantener la seguridad del país, a través de una mejor emisión de normas legales. La Cámara que deber ser la depositaria de la soberanía popular será la de Diputados, la cual encarnará la voluntad del pueblo, según lo plantea Masías en su escrito (1855, p. 70).

Para que se cumplan estas propuestas indicadas está la cuestión sobre quiénes son los ciudadanos, Ellos son los depositarios sobre quienes recae la soberanía, quiere romperse con la norma impuesta por la Constitución de Huancayo, pues se considera que es muy artificial y encasilla al ciudadano en el cumplimiento de una serie de parámetros que si no se cumplen, uno no puede accederse a la ciudadanía. Por ello se busca que en la nueva carta magna se establezca normas que definan, primero quienes son peruanos, que nos caracteriza como tal, por consiguiente en el estatuto provisorio de 1855, ya se esbozaba algo de lo que se planteara en la Constitución de 1856, el cual estipuló que todos somos libres, sean nacidos en el territorio o naturalizados. El problema que surgió es con respecto a la condición de los negros. ¿Acaso son peruanos?, ¿Pueden participar en esta construcción del país?, son las interrogantes que rondaban. Finalmente para la convocatoria a las elecciones

de La Convención se determinó la condición de su peruanidad y así pudieron participar en aquel proceso eleccionario.

La cuestión de la ciudadanía es crucial, por ello tenía que establecerse normas claras, por ello se criticó lo establecido por la Constitución de Huancayo que colocaba su ejercicio desde los 25 años, lo cual mostró una discriminación notoria hacia la juventud y ensañamiento a sus capacidades, ya que se duda que pueda ejercerlas. Cabe recordar que esta norma es fruto de los infaustos momentos que se vivió en la guerra de Salaverry contra la Confederación y Santa Cruz. La Constitución de 1856 determinó que la ciudadanía se ejerce desde los 21 años lo cual estaba en consonancia con el Código Civil que establecía que un individuo puede ejercer sus atributos desde esa edad. Hay una completa indefinición de los jóvenes entre los 21 y los 25 años porque se trata de un grupo que debería tener una conciencia política formada, de que sepan cómo elegir a sus candidatos y que tengan un juicio sobre la realidad del país; pero, ello no se daba llevando a los jóvenes a la indolencia política, como afirma Pacheco. En cuanto al atributo de saber leer y escribir, se consideró que si es necesario para el ejercicio de la ciudadanía y la comprensión y el ejercicio de las normas; por ello era indispensable que el Estado proveyera de servicios de instrucción a sus pobladores, en particular la educación primaria. Era indispensable que se estableciera su gratuidad, como finalmente ocurrió. Los pobladores que sin instrucción están expuestos a las manipulaciones de los políticos demagogos y pueden ser fácilmente engañados. La norma finalmente fue respetada por la Constitución de 1856. Finalmente el requisito de pagar contribuciones directas para ser considerado ciudadano, también es calificado como algo restrictivo dado que solo una minoría privilegiada con acceso a la industria y a la gran propiedad estaría beneficiada. Dicho requisito estaba en la Constitución de 1839 y con ello se violaría flagrantemente la soberanía de la nación y un grupo minoritario gobernaría al país creándose una oligarquía, según se denunció (Pacheco, 1854, p. 175). Los liberales en la constitución de 1856 finalmente no incluyeron dicha norma porque atentaba contra los intereses de la nación.



## **5.2. La posición de los Poderes Ejecutivo y Judicial**

En cuanto al Poder Ejecutivo este era necesario, dado que es el encargado de hacer cumplir las leyes que establezca el Legislativo; pero también está la idea de que el encargado de este poder no debe tener excesivas atribuciones porque lo llevarían a chocar con el Legislativo y las instituciones; además, está el hecho de que su periodo de gobierno no debe excederse los seis años, pues será considerado como excesivo, inclusive al ser elegido, su cargo dependerá de la confianza que tenga de los ciudadanos. El fin es evitar los males que se habían visto en los primeros años de la República, como cuando se tenía un presidente que ejercía un poder total, casi absoluto, que no tenía el más mínimo respeto por la institucionalidad, porque no teme cargar con las responsabilidades del cargo para el cual ha sido elegido y son constantes las arbitrariedades que ha hecho a lo largo de la historia republicana.

Para evitar toda esta serie de males que había traído el exceso de poder de la presidencia se plantean establecer una serie de limitaciones, que ya habían señaladas por ejemplo en la Constitución Francesa de 1848, el cual ponía una serie de limitaciones a la autoridad presidencial; de allí que se establezca la norma de prohibirle la disolución del Congreso. Asimismo, está también la figura de los ministros, estos apenas si son instrumentos de las ambiciones del presidente, por ello se plantea la idea de que los ministros gocen de mayor capacidad de acción, es decir que puedan tener más responsabilidades y además que justifiquen sus actos, propuesta planteada por los liberales.

Pero también está la oferta conservadora y del liberalismo doctrinario la cual sugiere que el presidente debe tener mayor poder ya que al ser elegido por voto popular, en el recae todas las responsabilidades del gobierno-. Ante ello, debe cumplir con una serie de obligaciones y ser y actuar con libertad a la hora de escoger los funcionarios que lo ayuden en el gobierno, sin la intervención del Legislativo u alguna otra instancia (ni siquiera debe señalarse que atributos deben tener los ministros, como lo había establecido la Constitución de Huancayo). De esta manera, es el presidente el que escogerá a las personas idóneas para los diferentes cargos administrativos – públicos para que se rodee de personas de su entera confianza que lo ayudarán eficazmente en su gestión (Pacheco, 1854, p. 286)

Entre las atribuciones que debe tener el presidente, según los proyectos presentados, en ese momento la mayoría de los liberales planteaban lo siguiente:

- «Suplir las disposiciones que hicieran falta al ejecutar alguna ley, de los que resulta la facultad de hacer decretos que es el resorte más prominente del poder administrativo.
- Hacer efectiva la responsabilidad de los empleados conforme a la sentencia Judicial que los inhabilite.
- Gozar del privilegio, como los presidentes de los demás poderes, de que el Congreso sea la autoridad, que mande hacer efectiva su responsabilidad conforme a la sentencia Judicial que lo inhabilite
- Disponer de la fuerza en tiempo de guerra.
- Sostener las relaciones exteriores que convengan.
- Dar cuenta al público de todo acto gubernativo por medio del periódico oficial el cual debe distribuirse en toda la República. Esta es una obligación común a todos los empleados, por lo que deben tener francas columnas de los periódicos oficiales, particularmente los presidentes de los poderes. Una de las principales razones es que deben poner en su conocimiento a la mayor brevedad todo lo respecto a su poder.
- Someter su manifiesto al juicio de cada legislador, como lo deben hacer los presidentes de los demás poderes, rindiendo los documentos de su administración; y pidiendo las leyes o reformas que hicieren falta a la Nación.
- Sostener los principios democráticos, a pesar de que se oponen abiertamente a su conveniencia particular» (Nájera, Cartilla del pueblo sobre principios democráticos, 1855, p. 68).

Así apreciamos que las funciones del presidente deben estar subordinadas a los manifiestos del Legislativo y conseguir la satisfacción de los intereses de la sociedad. Por eso, se autoriza que el Ejecutivo emita tres tipos de disposiciones (reglamentos, decretos e instrucciones) mediante los cuales se cumple la función ejecutiva de gobierno. Estas disposiciones jamás deben contradecir las leyes del Congreso, de lo contrario se llegaría a un choque de intereses. Lo que se debe seguir acotando es la importancia del poder Legislativo, ya que este es el verdadero representante de la soberanía nacional.

Otra de las funciones importantes que ejerce el gobierno es la administración del país el cual debe ejercerlo con eficacia ya que es que este debe satisfacer las demandas y necesidades del país. Para ello, se necesita la presencia de funcionarios que se encarguen de ejercer la administración en todo el territorio nacional. Para cumplir dichas funciones era necesario que tengan libertad de acción, que ejerzan sus funciones en nombre de la nación, y así se conseguiría diferenciar los intereses

locales y los funcionarios podrán ver mejor sus necesidades; por estas razones el presidente debe organizar y dirigir eficazmente todo el aparato administrativo de la República. En la constitución de 1856 esto será finalmente seguido como se aprecia en el artículo 89 donde se verán estos puntos de vista.

En cuanto al Poder Judicial, se detalla la necesidad de su existencia pues es el encargado de establecer la relación entre las personas y la ley. Este deberá ser ejercido por personas capaces de tener los conocimientos adecuados, como los abogados, y también incluirse a personas notables que inspiren la debida confianza. Esta situación nos hace inferir que este poder carece de personas capaces que puedan llevar con éxito los juicios, por ello se hacía necesario recomendar reformas que deban aplicarse en dicho poder y que deberán estar en la próxima Constitución, es decir la de 1856. La justicia necesita pasar una serie de cambios que agilicen los trámites y no sean lentos, de allí que se plantee el establecimiento de dos instancias, una Corte Superior y una Corte Suprema; asimismo, el ciudadano que dirija este poder del Estado debe tener todas la atribuciones y prerrogativas. Por otro lado, el Estado no debe promover el establecimiento de tribunales espaciales, puesto que esto conlleva a la ruptura del principio de la igualdad ante la ley y se romperían las normas democráticas (Nájera, 1855, pp. 85 – 87); de esa forma, el liberalismo plantea romper el espíritu corporativista de la república criolla. Lo que debe estar garantizándose es la realización de juicios ordinarios que deben ser solventados por el Estado, así se evitaría las suspicacias que despiertan los tribunales especiales, pues esos son sinónimo de privilegios y solo benefician a los individuos que tienen la capacidad de solventar el proceso judicial. Esto fue recogido por la Constitución de 1856, que en su artículo 129 prohíbe los juicios por comisión. En suma, apreciamos que el planteamiento demandado por los escritos será escuchado y aplicado en la nueva carta constitucional.

Para evitar estas contrariedades es necesario que el máximo dirigente del Poder Judicial tenga una serie de obligaciones, entre las cuales se puede destacar la de velar por la conducta de los funcionarios de este poder, sean jueces, vocales y fiscales. Es un deber también del que preside este poder de asistir al Congreso con la finalidad de informar que leyes necesitan ser cambiadas con la finalidad de asegurar un adecuado funcionamiento del aparato legal del país. Asimismo debe oponerse a cualquier intento de usurpación de la autoridad judicial por parte de otros poderes. La

Constitución del 56 hizo eco a estos llamamientos y en su artículo n.º 124 señala quien debe administrar la justicia son los tribunales y juzgados; así también en el artículo n.º 126 y n.º 127 se señala como debe estar organizado este poder.

## **6. La cuestión religiosa un nuevo debate entre liberales y conservadores durante La Convención Nacional**

Al iniciarse el año de 1856 se podrá apreciar un nuevo debate entre los liberales y conservadores, esta vez el tono de la disputa giró en torno a cómo considerar a la religión dentro de la nueva constitución. Los liberales buscaban establecer la doctrina regalista, donde el Estado tuviera participación y control de aquella institución, por otro lado encontramos a los denominados ultramontanos, donde se destaca la nítida figura de Bartolomé Herrera, y una serie de clérigos que van a luchar para que la Iglesia Católica mantenga sus fueros y privilegios (Ruiz, 2013, pp. 48 – 49).

En los meses previos a la convocatoria de la Convención Nacional de 1855, los ánimos se encendieron debido a los planteamientos liberales regalistas que partía por el asunto de la tolerancia religiosa, el cual era visto por los conservadores como un ataque al orden existente. Los liberales conscientes de los cambios que tratan de imponer desean establecer la tolerancia, que es percibida como una medida que traería el triunfo del Estado republicano liberal. Esto forzaría cambios como la eliminación de sus fueros y sujetarlos a las leyes civiles; asimismo, controlar sus rentas económicas; si a esto le sumamos el deseo del Estado de querer establecer un control de la tasa demográfica del país y que hasta ese momento estaba en manos de la Iglesia. En consecuencia, es razonable la injerencia de las autoridades civiles sobre la jurisdicción eclesiástica, la idea del regalismo se impone en el Estado peruano.

Es en este ambiente tenso donde se destaca la figura del chileno Francisco Bilbao, liberal radical, que con sus escritos encenderá el debate especialmente cuando aparezca su obra *«El Gobierno de la Libertad»*, donde se permite expresar su radicalidad liberal y plantea que el precio de esta radicalidad es la universalidad de la libertad, en donde el pueblo debe tomar las riendas de su destino (Bilbao 1855:

IV)<sup>29</sup>. En su obra se puede apreciar su llamado al compromiso de la participación ciudadana, que se puede impulsar desde la prensa, que es percibida como el espacio donde se debate los asuntos de intereses públicos, y donde hay una racionalidad que nos expresa que existe una esfera de opinión pública interesada en los problemas del país<sup>30</sup>. Es en esa *búsqueda de la libertad*, como lo detalla en las páginas de su obra, que llega a plantearse que debe suprimirse la ligazón entre la Iglesia y al Estado, esto es el Patronato, que es considerado como una tara para el desarrollo de la nación. También plantea que por ende que deberían abolirse las contribuciones eclesiásticas obligatorias porque no contribuyen al desarrollo productivo de la nación (Jiyagón, 2014, pp. 74 – 75).

El liberalismo radical que asume el chileno Bilbao, será muy atractivo para ciertos sectores de las clases políticas, por ser un discurso que atrae mucho, pues debemos entender que está cerca el contexto de las revoluciones liberales de 1848, que había asolado a la Europa occidental y sus ecos llegaron a sentirse en estas regiones. Ese nuevo credo que promueve Bilbao, el de la libertad, escandalizó a varios actores políticos y reforzó las propuestas de los liberales. En las campañas contra la Iglesia, sobresale Enrique Alvarado, un joven liberal destacado, quien desde el periódico *El Porvenir* se lanza a una campaña para poder imponer el programa liberal, además de trascender a las personas, para que estas puedan asimilar tales ideas<sup>31</sup>.

Ante esta intensa campaña liberal, surge la publicación periodística que se enfrenta a esta aterradora posibilidad: *El Católico*, fundado por el obispo Bartolomé Herrera quien se convierte en una de las cabezas pensantes para la defensa de la religión y que con esta publicación se opuso a los liberales de tendencia anticlerical. Desde su primer ejemplar, *El Católico demuestra* su postura e interés para enfrentarse a la marea liberal. En su primer número afirma:

---

<sup>29</sup> Es en la introducción de esta obra cuando Bilbao menciona su célebre frase que simboliza lo estéril de la revolución de 1854: «...jamás ha habido revolución más justa y jamás ha habido después de la victoria, revolución más infecunda...».

<sup>30</sup> Debemos estar consciente que esta idea planteada por Habermas, aplicada a nuestra realidad, es todavía limitada a las élites y sus clientelas que se favorecen por el discurso que está circulando en el imaginario nacional.

<sup>31</sup> Basadre en la *Historia de la República* y en *Perú, Problema y Posibilidad* remarca la actuación de una prensa liberal que busca una serie de cambios y destaca la figura de Enrique Alvarado joven promesa del radicalismo liberal que agito las aguas desde esa tribuna periodística, pero su temprana muerte le arrebató a los liberales radicales uno de sus principales líderes.

«...sostener la causa santa del catolicismo, contra los furiosos ataques de que hoy es blanco, tal es y debe ser nuestro objeto, por conciencia y por razón... necesario era pues entrar en la lid, y henos aquí dispuestos al combate. Pero antes de trabarlo, se nos ha permitido el arma que manejaremos...La lucha es de principios, queremos afrontar a la irreligión los absurdos de que adolece; pretendemos vindicar a la Iglesia católica de las calumnias que se la prodigan tal vez por hijos desnaturalizados, nuestras armas por tanto serán las que sugiere la sana filosofía...». <sup>32</sup>

En los siguientes números de este periódico aparecen ideas caracterizadas por su marcada defensa de los intereses eclesiásticos y conservadores; para demostrar que tiene llegada a amplios sectores y grupos de la sociedad van a publicar una serie de manifiestos desde diferentes departamentos del país que resaltaron la fuerza y poder de convocatoria de este grupo. *El Católico* es el bastión de los grupos ultramontanos, se prosigue con la publicación de artículos; los editores comentan, y es una prueba de como los enemigos de la cristiandad se sirven de la prensa para defender sus creencias,; para ahogar el error, surge una prensa que intenta evitar que el país caiga en las «mentiras de los liberales». <sup>33</sup>

Los primeros días de octubre la Convención Nacional debatió el asunto que había desencadenado meses atrás la tormenta política, finalmente se debatiría en sus interiores la cuestión religiosa del país y como se inscribiría esta cuestión en la Constitución. El día 29 de setiembre una publicación ya empieza a sacudir el ambiente: se acusa que el diputado Santiago Matute conspira contra el país, pues en vez de plantear cuestiones constructivas como la del voto, se está preocupando por promover un proyecto antirreligioso que solo hostiga a la Iglesia y ocasiona una implosión social que lleve al país al desorden <sup>34</sup>.

Llegó el día 2 de octubre donde finalmente La Convención empezó a discutir los dictámenes elaborados sobre la tolerancia de cultos. Se habían formado dos comisiones de diputados que llegaron con sus planteamientos: uno de mayoría y otro de minoría. En el dictamen de la mayoría se resalta que «...La religión del Estado es la Católica Apostólica Romana. La Nación la protege por todos los medios

---

<sup>32</sup> El Católico, Lima, Sábado 5 de mayo de 1855, numero 1. aquí contiene todo su programa de acción política.

<sup>33</sup> Periódico Religioso, filosófico, histórico y literario. Año 1, número 1, Lima, sábado 5 de mayo de 1855.

<sup>34</sup> Proyecto Antirreligioso del Señor Matute. En: *El comercio*, 28 de setiembre de 1855.

conforme al espíritu del Evangelio (...)»<sup>35</sup>; y en el siguiente dictamen, que era el de la minoría se destaca que «El único culto público que la Nación protege y mantiene es el Católico Apostólico y Romano...»<sup>36</sup>.

Tras presentarse las propuestas inmediatamente empezaron las impugnaciones, la cuestión era ver si la religión necesitaba ser protegida por el Estado o no lo requería. Dicha circunstancia fue la que llevó a la agitación política, pues desde la prensa se movían y defendían las posturas de ambos grupos. Los liberales regalistas planteaban que la Iglesia no necesita la protección de nadie. El diputado Ignacio Escudero comenta «...la República y la Iglesia deben marchar por separado. La República con las leyes y políticas civiles y la Iglesia con las bienaventuranzas y por los medios del Evangelio... es una tiranía instituir la obligatoriedad de la religión en un Estado, es un desatino ridículo...» (Anónimo, 1855c, pp. 3 – 4). Esto dará pie a que se comente, que la Convención establecerá una nueva religión. Esta idea insensata fue de plano rechazada, ya que hay una amplia mayoría de la población que acepta tácitamente el catolicismo.

El discurso a favor de la tolerancia del diputado Escudero ofrece las ventajas que traen a los pueblos civilizados la tolerancia religiosa y trata de presentar una justificación económica y el impacto positivo de una futura migración:

«No hay un solo representante que no esté penetrado de estas ventajas; nuestros áridos desiertos, nuestros bosques necesitan brazos que los cultiven y estos brazos no vendrán con la intolerancia porque como he dicho nadie emigra sin llevar sus dioses. Por otra parte se calcula que hay entre nosotros cinco mujeres por cada hombre, y con la inmigración se multiplicaría los matrimonios y la población, ganando nuestra raza en espíritu y homogeneidad. Nuestros pueblos necesitan que se les ilustre, que se les de hábitos de industria y economía».<sup>37</sup>

Se argumentan las ventajas y beneficios que llegarían al país si se logra eliminar la protección que goza la Iglesia junto a sus privilegios, lo cual llevaría a tener grandes logros e incidiría en el desarrollo material del país. El diputado

---

<sup>35</sup> Este dictamen de mayoría fue propuesto por los diputados Juan Gualberto Valdivia, Santos Castañeda, J.B. Goyburu, José María Hernando, José Antonio Terry, Julián del Águila, Ángelo Cabero y A. de la Roca, fue presentado el 18 de setiembre de 1855.

<sup>36</sup> El dictamen de la minoría fue planteada por los diputados Julio M. del Portillo, Juan Bautista Zavala, Manuel G. León. Se trajo presenta a la asamblea el 26 de setiembre de ese año.

<sup>37</sup> En ese discurso también se plantea el diputado unas repreguntas, en resumen se puede llegar a la conclusión que el diputado establece que el clero no debe exigir al Estado protección alguna.

Mesones para complementar la idea sustentada, menciona que la tolerancia debería ser un dogma político, ya que está de la mano con el progreso del país, por ello el Legislativo debía establecer la tolerancia. El argumento del convencionalista liberal José Gálvez, sigue la lógica regalista, pues comenta que no solo se trata de discutir que el Estado Peruano tenga como única religión a la católica, sino también debe discutirse por qué debe excluirse a otras religiones, pues de establecer eso, caeríamos en la intolerancia y concluiría en una discriminación a los ciudadanos extranjeros (Jiyagón, 2014, pp. 93 – 94).

Los diputados que quieren que el Estado proteja la religión católica, y que además esta sea la única del país son los que están en contra de los argumentos de la tolerancia. El diputado Pedro José Tordoya será el primero que enérgicamente rechazó la propuesta de la minoría; para él no puede haber ningún pueblo que se atreva a despreciar la religión, ya que esta es imprescindible para sentar las bases morales de la nación y de esta manera se establecerá el respeto, que es necesario para lograr el orden del país; por ello, plantear la tolerancia es un completo absurdo para nuestra realidad. Lo que en verdad debe darse, argumenta este diputado, es que se aprueben buenas leyes que favorezcan las garantías de los extranjeros que protejan sus propiedades, incluso plantea que deberían concederles derechos políticos. Si nuestro país se encontrase en orden y paz, la migración sería fácil y no tendría que discutirse la cuestión religiosa. El diputado Felipe Cortez complementa la idea anterior, al mencionar que los migrantes no van a venir al país por la tolerancia religiosa, dado que las distancias con el Perú, son muy extensas y lejanas. Lo que lo atraerá es que le den garantías para que puedan hacer grandes labores económicas (Anónimo, 1855c, pp. 13 – 14).

Finalmente el asunto religioso, concluyó con la aprobación del artículo sobre la unidad de la religión en torno al catolicismo, y circularon escritos felicitándose sobre el triunfo de la religión, como se observa en la siguiente cita:

«Los principios disolventes del tolerantismo nunca creímos que podían ser admitidos en el suelo peruano, sin que los representantes del pueblo traicionaran la confianza de sus omitentes. Los actuales legisladores nombrados por el sufragio universal directo, no son sino los fieles intérpretes de la voluntad de los pueblos. Estos no quieren la tolerancia.... Legisladores habéis satisfecho los deseos



de los pueblos, asegurado la tranquilidad de la conciencia »<sup>38</sup> (El Comercio, 10 de octubre 1855).

De esta manera, se cierra este evento sobre la tolerancia de cultos y la cuestión religiosa con respecto a La Convención, pero esto no quedará aquí, pues para el año siguiente, es decir en 1856, la confrontación en torno a materia religiosa se desarrolla nuevamente, esta vez los puntos giran en torno a la abolición de los diezmos y los fueros eclesiásticos, donde se crisparon los ánimos. Los ultramontanos desde *El Católico* vuelven a calificar absurda a la política liberal de La Convención por querer poner a alguien que no que no perteneciera a la organización eclesiástica que los juzgue; así se inicia la batalla por la defensa de los fueros eclesiásticos que terminó como sabemos cuándo se promulgó la Constitución de 1856, abolió los fueros y los privilegios de la Iglesia. Las propuestas de los diputados Gálvez y Álvarez serán contundentes al señalar que estriban en los planteamientos de las autoridades civiles de que los asuntos de materia civil imperan sobre lo eclesiástico (Dancuart, 1926, pp. 30 – 49).

En cuanto a la abolición de los diezmos fue también una lucha que ya estaba condenada para la Iglesia que desde años atrás se venía intentando acabar con los privilegios de ella. Los Congresos de 1849 y 1853 habían ya intentado eliminar los privilegios eclesiásticos, pero no lograron establecerse en aquellos momentos, ahora la coyuntura había cambiado radicalmente, a partir de 1855 con los ideales de construir un Estado moderno por parte de los liberales; mantener los privilegios iba en contra de la vertebración de esta idea (García, 1991, pp. 108 – 109). Para 1856 las cosas habían cambiado; detrás de la aparente lucha religiosa, existen una serie de intereses económicos que anhela acabar con los obstáculos que hay para el desarrollo agrícola de la nación y por ello empieza a acabar con las vinculaciones de la Iglesia con la tierra, a pesar de la oposición de los sectores de la Iglesia, ya había un consenso de una mayoría de diputados que estaban a favor de la supresión del diezmo (Armas, 2006, pp. 29 – 30) que finalmente se aprobó el 4 de agosto de 1856, esta medida también se ratificara por el Congreso de 1860.

---

<sup>38</sup> El artículo lleva por título *Honor y Gloria a la Convención Nacional*, por Justo Aurelio.

## **7. La Constitución de 1856: Fortalezas y debilidades**

La promulgación de esta Constitución fue resultado de arduos debates en la sala de la Convención, la comisión de Constitución presentó su proyecto a la Asamblea que finalmente la aprobó en el mes de octubre, mes que fue muy agitado debido a que el Ejecutivo en los primeros días de octubre había objetado varios artículos de la constitución. El ministro Juan Manuel del Mar puso énfasis en aquellos artículos que le quitaban autoridad al Ejecutivo; finalmente Castilla decidió juramentar la constitución el 18 de octubre, que fue promulgada al día siguiente, dirigía la presidencia de la Convención el general San Román.

Las críticas a la Constitución de 1856 serán lideradas por los sectores que resultaron siendo afectadas por sus reformas e innovaciones, es por ello que uno de los representantes de La Convención de 1855, el diputado José Gálvez destacó la importancia de aquella carta magna y todas las complicaciones que se tuvo para finalmente promulgarla. Este hace una serie de indicaciones donde comenta que esta Constitución ha recogido los aspectos positivos que se pueden rescatar de las anteriores cartas magnas, pues de esta manera lo que consiguieron fue el beneficio de la nación, en torno a cuales destaca los siguientes aspectos:

- La abolición de los fueros personales y de los privilegios hereditarios
- Es la nación y no el empleado quien tiene la propiedad del empleo público.
- Las contribuciones directas no podían imponerse si no por un año.
- La ley fija los ingresos y egresos de la nación.
- Todo empleado público, al cesar en su cargo será sometido a juicio de residencia, mientras no sea absuelto, no podrá ejercer el mismo empleo, ni otro alguno.
- La vida humana es inviolable; la ley no podrá imponer la pena de muerte.
- En la Republica nadie puede ser esclavo.
- Las leyes aprobadas, protegen a todos sus integrantes, nadie queda excluido; asimismo todos tienen una serie de obligaciones a la república.
- Se establece el sufragio popular directo.
- Se pierde la ciudadanía por recibir cualquier título de nobleza o condecoración monárquica, también se pierde por el tráfico de esclavos, aun en el exterior.

- No pueden ser representantes de la nación: los funcionarios del poder Ejecutivo, si no se hallan fuera de sus cargos dos meses antes de cualquier elección, también los funcionarios eclesiásticos que desempeñan la cura de las almas, asimismo, los vocales de la corte de justicia de los departamentos donde ejercen jurisdicción.
- Es atribución del Congreso declarar la república se encuentre en peligro, y es el que debe dictar las medidas pertinentes para poder salvarla.
- Es atribución del Congreso aprobar y desechar las propuestas del Ejecutivo para nombrar los jefes del Ejército y la armada.
- El mandato presidencial solo deber durar cuatro años.
- La vacancia de la presidencia de la república se realizara cuando el presidente atente contra la forma de gobierno vigente.

Son los principales puntos que se rescatan de la constitución, acordes con las ideas liberales de reforma, para implementar el progreso en el Estado y finalmente acabar con el interminable caos que había asolado a la República. Dentro de la Constitución uno de los puntos que es defendido es la descentralización del poder, donde al presidente de la República se le han recortado una serie de atribuciones que conllevaron a críticas del Ejecutivo a La Convención; una de los recortes al poder presidencial es la prohibición absoluta de otorgarle facultades extraordinarias, así como también la necesidad de ratificar ante el Congreso los ascensos en las Fuerzas Armadas. Asimismo, se le restringió otras funciones y le crearon un órgano adjunto con el cual debía coparticipar en las acciones gubernativas, nos referimos al *Consejo de Ministros*, el cual con la ley orgánica que se aprobó el 4 de diciembre de 1856 confirmaba la situación de recorte de la autoridad presidencial. El objetivo de este consejo era el de dar unidad a las acciones del Gobierno, así como tener un mejor acierto en la administración pública. Esta norma poseía 37 artículos donde se detallaba cada función. Es preciso afirmar que al leer el artículo 31 de la norma orgánica, el cual estipula que «...si hay desacuerdo entre el presidente y uno de los ministros, resistiendo aquel rubricar algún decreto, o este autorizarla, se someterá el asunto al Consejo de Ministros... ». Uno puede inferir esta limitación impuesta por La Convención al presidente de la República traería complicaciones más adelante situación que se reclamará posteriormente; también el Ejecutivo ya no podía suprimir las garantías individuales, que eran eliminadas en la Constitución de Huancayo. Incluso en la Constitución de 1856. Estas garantías individuales estaban en los

primeros títulos y más atrás los otros poderes de Estado. Esto nos da una señal que hay derechos que deben ser prioridad del nuevo Estado.

La necesidad de impulsar estas reformas yacen en el deseo de controlar a los militares, quienes han sido los causantes de muchos de los desvaríos del país; de allí que se quiera establecer la subordinación de los militares a la Constitución y a las leyes del país, antes que la lealtad a sus jefes. Así lo expresa Gálvez:

« (...) poner fin a los principales fuentes de todas las calamidades públicas que hemos sufrido hasta hoy, y sería insultar al buen sentido de la nación el procurar defender estos artículos después de la dolorosa experiencia de tantos años de abuso y revueltas han demostrado la necesidad que había que consignarles en la constitución» (Gálvez, 1858, p. 11).

Destacar algunos artículos es clave para poder entender esta norma, el «no reconocer empleos en propiedad»<sup>39</sup> es definitivamente un símbolo de poner la modernidad, pues los empleos son propiedad de la nación y no del empleado, esto permitía que aquellos hombres estén en la voluntad de la ley y cumplieren sus señalamientos. En cuanto a sus derechos tanto de los civiles como de los militares, no resultaban afectados, señalaba Gálvez y el Estado se encargaría de remunerarlos en función de sus servicios prestados y la calidad de sus servicios, conforme todo a la ley, según consta la resolución del 3 de octubre de 1856 (Gálvez, 1858, p. 6).

En cuanto a la abolición de los fueros en la milicia, es parte también de la modernización de aquella institución y las Fuerzas Armadas deben estar en una situación de satisfacer las necesidades de la nación. Con ello esperaban otorgar recompensas y premios a quienes en verdad fuesen acreedores de aquellos y estén en el servicio. Se intentaba alejar a los malos elementos del Ejército, ya que con esto se conseguiría la regeneración de aquella arma.

La Iglesia se entendía porque los sectores eclesiásticos también se oponían, y reclamaban la abolición de su inmunidad; tal fue la resistencia que el monseñor Tordoya, representante de la jerarquía episcopal envió un memorial a La Convención exponiendo las razones por las cuales no debía afectarse sus prerrogativas. Gálvez comentaba que algunos malos sacerdotes «debían anatemizarla porque ordenó que

---

<sup>39</sup> El artículo 6 de la constitución establecía: en la república no se reconocen privilegios hereditarios, ni fueros personales, ni empleos en propiedad. Tampoco se reconoce vinculaciones y toda propiedad es enajenable en la forma que determina la ley.

los entierros de los que muriesen de peste se hiciesen gratuitamente y porque abolió los fueros eclesiásticos y las leyes civiles sobre diezmos, primicias y derechos parroquiales» (Gálvez, pág. 6).

La instrucción es también uno de los mayores aciertos que tiene la Constitución de 1856, como se observa en el artículo 23 se determina que la nación se comprometía a garantizar la educación primaria en forma gratuita, así como también los establecimientos públicos de ciencias, artes, piedad y beneficencia; esto tuvo un impacto mediático pues durante esos años vamos a ver la reforma en el sector de educación, estableciéndose ya en el año anterior, 1855, un reglamento de instrucción pública que ordenaba convenientemente este sector. Se organizó la instrucción en popular, media y superior, conforme establecía la Constitución y la gratuidad de la instrucción primaria, donde el Estado facilitaba los libros y otros auxilios. (Basadre, 2005, pp. 112-113).

Otro de los puntos innovadores de la constitución fue el establecimiento del régimen de la descentralización. En el título XV se legisla sobre las *Juntas Departamentales*, las cuales fueron restablecidas, ya que la constitución de 1839 las había derogado con la finalidad de establecer un fuerte centralismo en el país. La carta actual estipulaba el retorno de las juntas que se establecería en cada departamento y sesionarían en las capitales departamentales. En este lugar se formaría una junta que estaría conformada por cinco diputados elegidos conforme lo determine la ley y donde están excluidos de esta selección el personal eclesiástico y los funcionarios del sector público. Dicha junta tiene como objetivo la promoción de los intereses de los departamentos y provincias. Posteriormente se dio la ley de *Juntas Departamentales* que ratifica lo señalado por la Constitución. En el artículo 17 de la mencionada ley se señala sus atribuciones. Entre las que podemos destacar es que la Junta debe tomar decisiones para poder fomentar las actividades económicas, como la agricultura, la minería y otras actividades productivas; impulsar la instrucción pública en sus departamentos en concordancia con el Congreso; informar a su departamento y provincias sobre las impuestos que estableciese el Congreso y las municipalidades; impedir el reclutamiento forzoso que pudiesen realizar las fuerzas armadas en las provincias, asimismo la policía; imponer como tarea la fiscalización de las municipalidades y señalar sus jurisdicciones para evitar que cometa excesos; elaborar estadísticas de la población de su departamento y así

saber los recursos y poblaciones que se tienen en su región; proteger a las comunidades indígenas de los abusos que se cometen contra ellos; y, finalmente, promover la construcción y el cuidado de las vías de comunicación de los departamentos. Los recursos para poder realizar sus acciones de gobierno será determinado por la ley según indica la constitución la cual determina que los recursos con los que cuenta la Junta son los derechos de pontazgo y portazgo, además tendrán a su disposición los bienes y rentas de las comunidades indígenas, para que se puedan beneficiarlos a ellos, y pueden contar con parte de los fondos municipales.

Todas las propuestas de estas juntas deben ser ejecutadas por los prefectos y en el caso de descubrir infracciones constitucionales por parte de algún funcionario de Gobierno, las juntas deben informar inmediatamente al Congreso, en particular a la Cámara de Diputados. De esta manera queda planificado el funcionamiento de estas., Además se dieron otras leyes que también tenían el interés de formalizar las juntas, así tenemos la ley de caminos que le daba a las juntas un papel de importante labor en el mantenimiento de los caminos departamentales y locales. La disolución de La Convención Nacional en noviembre de 1857 frustró el establecimiento de las Juntas Departamentales (Planas, 1998, pp. 184 – 187).

La finalidad de todos los artículos que se redactaron en la Constitución era con la esperanza de poner un límite a todas las fuentes de los perjuicios que había sufrido el país. Había que fundar un nuevo orden donde el régimen presidencialista sea reformulado, se acabe con el mal endémico del militarismo. Ante ello se subordinó a las Fuerzas Armadas al poder civil; pero la realidad demostraba que había muchos obstáculos que incidirán en la inaplicabilidad de aquellas normas y que se trasluce en las diferentes publicaciones conservadoras que querrán desacreditar la labor de La Convención y de la Constitución de 1856.

## **Capítulo IV:**

### **La construcción de la Constitución de 1860. Los proyectos y los planteamientos conservadores**

#### **1. La necesidad de reformar la Constitución de 1856**

##### **1.1. El descontento de las provincias contra Lima**

Las constantes críticas que recibió el gobierno de Castilla durante la década de 1850 se desarrolla dentro de la lógica del enfrentamiento entre el liberalismo y los conservadores; pero también en ello vemos la racionalidad del centralismo limeño que busca sujetar a las provincias para integrarlas al proyecto modernizador, situación que causó profundo malestar en las élites provincianas que veían como Lima emprendía a imponer su propia agenda política, donde el liberalismo inicial que buscaba la agenda de la descentralización empieza a cambiar este patrón, a mediados del siglo XIX. La lucha política entre Castilla y la Convención Nacional estaba alterando el relativo equilibrio entre el interior del país y Lima.

La crisis política fue aprovechada por el gobierno de Castilla para revisar la Constitución de 1856, ya que las constantes desavenencias entre los poderes del Estado se habían multiplicado durante la rebelión de Vivanco. En dicho conflicto civil se aprecia el descontento que había contra Lima, los intereses de Castilla y las élites limeñas que habían abrazado tardíamente el liberalismo. Además de todo esto se estaba dando un impulso al centralismo de Lima; por ello, las provincias del sur asumen nuevamente una postura crítica hacia el Gobierno. Como se puede apreciar esta situación no era una novedad, ya el sur peruano había realizado intentos secesionistas, su lógica económica era diferente a la del resto del país, ya que lo impulsaba un librecambismo que iba en contra de los intereses de Lima, pero paradójicamente, Lima termina adoptando aquel patrón liberal del libre comercio, pero con la óptica centralista (Gootenberg, 1997, pp. 67 – 72).

Los sectores provinciales habían conseguido durante los años iniciales de la República diferentes concesiones de las autoridades centrales, muchas de ellas tendrán que ver el control de sus Gobiernos locales. Cecilia Méndez plantea que al darse una serie de prolongados conflictos entre los distintos caudillos nacionales estos reclutaban sus tropas entre las diferentes regiones y áreas rurales del país, situación que fue aprovechada por los dirigentes locales para poder imponer sus respectivas agendas e intereses (Méndez, 2005, pp. 128 – 129). La situación comienza a cambiar a mediados del siglo XIX cuando Castilla desde Lima, logra conseguir la autonomía financiera, gracias a los recursos del guano y del proyecto modernizador, así, se inicia una política que articule a las provincias con Lima. Los liberales de la Convención habían querido implantar el modelo descentralizador con las Juntas Departamentales y las municipalidades, pero la situación había cambiado, dado que Castilla desea un control de las provincias. Ante ello, el discurso de la rebelión de Vivanco tendrá acogida, y casi como siempre, desde Arequipa se levantaron las banderas de la insurrección contra Castilla. Las proclamas que se lanzaron contra el gobierno de Castilla, fue de calificarlo como traidor, acusado de violar las garantías constitucionales, enemigo de las libertades y de la religión en el Perú; en resumen, es un discurso anticastilla y antiliberal limeño.

La coyuntura económica también permite apreciar los cambios que se habían dado en el país. Por ejemplo, la ciudad de Arequipa mostraba sus constantes quejas por una norma que posibilitaba la libre importación de harinas y de trigo procedente de Chile y los EEUU, lo cual, según ellos, hería de muerte a la producción agrícola de los departamentos del sur (El Comercio, 13 enero 1857). La respuesta de Lima fue enérgica y la Convención Nacional lanza severas críticas contra el alzamiento arequipeño y les hace recalcar la posición de disidentes de los sublevados, que con sus acciones han renunciado a la felicidad y el progreso<sup>40</sup>, ideales que siempre subrayan los liberales. El contexto, era justo para hacer valer los intereses del país para acabar con aquella rebelión.

Como en la anterior guerra civil de 1854, la rebelión de Vivanco terminó afectando a todo el país, por ejemplo en Ayacucho, se formó una asociación llamada

---

<sup>40</sup> La Convención Nacional había lanzado un pronunciamiento el primer día de 1857



“Sociedad Progresista Constitucional”, que a través de la prensa lanzaba serias críticas contra el gobierno de Castilla, lo acusaban de destruir la institucionalidad del país, arruinar la agricultura de la región, y también atacar a la religión (El Liberal, 2 enero 1857). En otras provincias del país, como Huaraz, Trujillo, Huanta, Parinacochas, Cuzco se sigue el llamado de Arequipa, es por ello que se aprecia, como las fuerzas regionales, especialmente las del sur buscan una consolidación de su autonomía ante el centralismo limeño, que beneficiado por los recursos del guano se fortalece y debilita a los caciques locales, quienes se verán disminuidos en su capacidad de negociaciones ante Lima (Contreras, 2000, pp. 8 – 9). El conflicto termino por beneficiar al Castellismo, ya que había logrado sofocar el regionalismo del sur, si bien es cierto que no desapareció, pero dejó al Gobierno con su proyecto centralizador, donde los diferentes sectores reformistas, sean liberales o conservadores tenían que pactar con la república militarizada de Castilla y sus redes de clientelas.

Para terminar, es necesario acotar que en Lima las cosas no eran tan claras y pacíficas, puesto que vamos a ver como algunos sectores populares, como los artesanos, se empiezan a movilizar contra el Gobierno ocasionando disturbios en el puerto del Callao.

## **1.2. Nuevamente la necesidad del orden**

Con la finalidad de ordenar el país, luego de la rebelión de Vivanco y restablecer el orden legal interrumpido por el cierre de la Convención Liberal, se reunió el Congreso Extraordinario de 1858, que fue reunido con la finalidad de llevar a cabo la revisión de dicha Constitución. A raíz de la convocatoria a un nuevo Congreso, empezaron a circular escritos que presionaban por la reforma constitucional. Esta reforma no pudo llevarse a cabo, por la intensa crítica del Congreso hacia la gestión de Castilla. Se tendrá que esperar hasta 1860 donde un nuevo Congreso se encargó de elaborar una nueva Constitución.

Con la caída de la Convención Nacional de 1855 y la suspensión de la Constitución de 1856, se dio inicio a una serie de publicaciones que solicitaban la reforma total de la carta magna. Se empieza a destacar que los trastornos que habían azotado la institucionalidad y que nos habían llevado al desorden se debían a la

influencia de ideas extranjeras nocivas; además, se acusa que el liberalismo de ser inaplicable.. En estas publicaciones, que son de tendencia conservadora, se comenta que la influencia de la escuela francesa ha sido negativa a las naciones sudamericanas y se remarca que las ideas radicales de la Revolución Francesa siguen siendo culpadas de los desórdenes del país; ante tal situación se se aprecia que una tendencia por querer disminuir los valores que se difundieron con la revolución. En ese sentido el camino del republicanismo es notorio en este discurso, especialmente cuando se señala que la nación debe seguir por el camino establecido desde los inicios de la República el cual consistía en seguir practicando los ideales del sistema representativo ya que es el único modelo que asegura el bienestar común de los integrantes del país; además, se precisa que el orden llegaría de la mano de hombres capaces y con el sentido de la racionalidad, que les permitiría dar satisfacción a las demandas de la nación. De esta manera, apreciamos como el pensamiento de la modernidad tradicionalista calza perfectamente con el ideal del liberalismo doctrinario que está insertándose con relativo éxito en el país dado que se prosigue con el discurso del orden y la racionalidad; además, nos permite entender como la idea del republicanismo encaja perfectamente con las tradiciones conservadoras.

Los años iniciales de la República habían sido testigo de la espiral de caos, violencia y de desgobierno; por ello, desde mediados de la década de 1840 hay una búsqueda del orden asentado en el denominado *poder neutral*, que se estaba implementando en diversos países de la región (Barrón, 2002, pp. 130-132). Asimismo, se empieza a plantear que los hombres que regirían los destinos del país debían ser personas con aptitudes, capacidades y habilidades superiores que les permitiesen ejercer las diferentes funciones que requiera el Estado. Estos ciudadanos son los encargados de promover la virtud y tendrían el derecho a gobernar al país, donde el principio de *la soberanía de la inteligencia*, que el obispo Bartolomé Herrera insistía desde la década de 1840 y que desde fines de la década de 1850, ha vuelto a resurgir gracias al apoyo de los sectores conservadores. Este es un proyecto político que representa a la élite de Lima, quienes son la nueva clase dirigente surgida del comercio del guano y que impulsaron leyes para todos los sectores sociales, ya que la plebe no estaba iluminada por la razón del conocimiento; por lo tanto, debían ser guiadas a dicho camino. Una idea dominante era que los sectores

populares debían ser movilizados para participar en los diferentes conflictos políticos y evitar su desborde y que no sean una amenaza al gobierno.

Las publicaciones que circularon durante los años 1858 – 1860 recomiendan que los hombres incapaces deben ser apartados del Gobierno representativo, y que sus ilusos idealismos pueden desembocar en un caos. Ante esta situación se preguntan: ¿Quiénes serán estos hombres incapaces? En el pensamiento conservador, se señala que son aquellos individuos con idealismos utópicos, que en su afán de buscar reformas no acordes con la realidad del país nos han llevado por los peligrosos caminos de la anarquía, por ello, este tipo de personas deben ser apartadas. Estos experimentos políticos que se han venido dando desde de los inicios de la República, han llevado al fracaso y a los caminos del desorden. Estos argumentos se dirigen contra los diputados liberales de la Convención de 1855, quienes en su afán de establecer cambios significativos, habían creado la Constitución de 1856 que es denunciada, como el emblema del caos que se vive en el país. En dicho contexto, se plantea que la única vía para la construcción del nuevo orden es analizar la realidad del país y estudiar sus problemas; solo de esta manera, se articulará una verdadera estructura de gobierno, que logre apreciar las verdaderas necesidades del país (Anónimo, sistema representativo, 1860, pp. 20-21).

Entre las constantes críticas que se plantearon contra la Constitución de 1856, era señalar sus múltiples defectos, destacando que no había sido debidamente planificada y que lo llevó a estrellarse contra la realidad del país; pues pretendía imponer el liberalismo mediante decretos que no sintonizaban con la realidad del país. Este idealismo liberal fue criticado también porque contravenía las bases de la *República Corporativa* que deseaba imponer un orden social con individuos iguales en sus derechos políticos. Ello debía ser objeto de críticas, pues había sectores de la población que eran considerados *incapaces naturales* y por lo tanto, no podían ejercer la ciudadanía. Un hecho que causó gran revuelo en la élite limeña fue la circunstancia que posibilitó que los negros hayan participado en el proceso electoral de 1855, donde incluso eligieron a los diputados de la Convención Nacional de 1855; con ello se cumplía en parte el modelo democratizador que buscaban establecer los liberales.

Los sectores tradicionales de la sociedad criticaron las incongruencias de la Constitución (incluso no la acataron) basadas en el discurso conservador. La Iglesia fue una de las organizaciones que tomaron dicha actitud y a través de su diario *El Católico*, para tener una opinión pública a su favor, asumió una postura confrontacional que llegó a su punto más alto cuando fue jurada la constitución de 1856.

Las numerosas publicaciones conservadoras, que se dieron a conocer entre los años de 1858 y 1860, insistirán, en que no hay razón para acatar la constitución liberal, dado que si se pone en práctica sus propuestas el edificio social del país se vería seriamente afectado por sus normas lo que ocasionaría ocasionando la demolición de las instituciones representativas del país. El argumento legal de los escritos conservadores señala que las leyes, deben guiarnos al sendero de la civilización y apartarnos del camino de la barbarie que había asolado al país. Es por esa situación que a las poblaciones, no se les debe otorgar derechos que no sepan utilizar convenientemente; por ello las normas constitucionales deberían apuntar, a educar a sus respectivas sociedades:

«...careciendo de educación republicana, hemos abrazado las ideas más extremas de la democracia, lanzándonos a un mar endeble, sin brújula, ni piloto; no tenemos las virtudes cívicas que se alimentan solo con la civilización de la mayoría, y hay en nuestra sociedad multitud de intereses encontrados» (Anónimo, 1860, pp. 4-5)».

Ante la difícil coyuntura política que afrontó el país durante aquellos años, las publicaciones se preguntaron: ¿Cuál es el papel que desempeña el Gobierno ante las incongruencias de la Convención Nacional de 1855 y la Constitución de 1856? Esta interrogante es clave porque conocido es el hecho de que se habían producido numerosos desencuentros entre ambos poderes del estado; se denunciaba que los liberales querían imponer la fuerza del poder del Legislativo sobre el Ejecutivo, esta situación daba pie a denunciar que la Constitución era negligente con la realidad del país. Pero no toda la culpa podía recaer sobre el Legislativo ya que las circunstancias nos hacen apreciar que el Ejecutivo no estaba exento de responsabilidades. No había cumplido su labor de negociar convenientemente con la Convención Nacional de 1855 y, tampoco hizo nada ante los excesos de los liberales. Durante estos años, el gobierno de Castilla y la Asamblea Liberal marchaban por caminos opuestos y paralelos, no se consultaban, no dialogaban, en tal situación se había desencadenado

la crisis política. Cada uno de los poderes del Estado obra aisladamente, siguen sus respectivas ambiciones; por ello se llegó a este resultado: un régimen constitucional tambaleante. La confrontación política entre los poderes del Estado era inevitable

Otra de las acusaciones que se presentaron contra la Constitución de 1856, y es una de las más recurrentes, es que fomenta la perversión del orden social. La crítica se debe a que varios de los artículos de la Constitución son señalados de ir contra las buenas costumbres y hábitos del país; se señala que hay un evidente deseo de favorecer a las masa lo que sería fatal porque estas no se encuentran ilustradas y resulta poco saludable pretender que participen en la vida política. También, se señala que estas normas están corroyendo las instituciones corporativas más representativas del país como las Fuerzas Armadas, que ven afectadas su moral y su disciplina; así como también la Iglesia, que considera que se le ha privado de sus fueros y ve limitado su accionar. Hay que recordar que la Convención de 1855 entablo una discusión sobre la posibilidad de establecer la tolerancia religiosa en el país, generándose un intenso debate político – religioso. La propuesta fue muy atacada por los sectores conservadores. Otras medidas que se atacaron duramente por parte de los sectores conservadores fueron el restablecimiento de las juntas departamentales, el establecimiento del sufragio directo, la abolición de la pena de muerte. Estas publicaciones señalan que esto se debe a que los liberales se dejaron llevar por su *desquiciamiento y desorden*<sup>41</sup>; definitivamente son publicaciones tendenciosas, que buscan el respaldo de la opinión pública urbana y así presionar al Gobierno para hacer posible la implementación de una nueva Constitución.

Desde las primeras constituciones, al menos en la teoría, lo que se ha impulsado frecuentemente es el respeto de los derechos civiles y políticos, como el de la opinión y la propiedad; asimismo, en todas ellas se encuentran establecidos el principio de la separación de poderes, el derecho de igualdad ante la ley y la libertad de prensa. Pero la *praxis* nos señala que lo recurrente en nuestra historia republicana, es el incumplimiento de las normas constitucionales y legales; esto ha sido uno de los grandes dramas del país ya que ese incumplimiento de las leyes nos ha llevado a una constante inestabilidad política. La única constitución que tuvo varios años de vigencia durante la primera mitad del siglo XIX, fue la de 1839, una carta

---

<sup>41</sup> Los liberales eran grupo político que no necesariamente estaban homogenizados en sus ideales, el sector más confrontacional, y al cual se denuncian sus excesos son los denominados “Radicales”

constitucional que no estaba plagada de los ideales liberales, sino por la tradición conservadora; por ello, debía seguirse ese sendero.

El único camino que quedaba para salir de aquella encrucijada política era implementar la reforma de la Constitución; lo que debía de hacerse en primer lugar, era rescatar las normas positivas que contribuyen al desarrollo del país. En ese recorrido, la reforma constitucional debía plantearse como la erradicación de los artículos considerados innecesarios e irracionales para los cuales la mayoría de los peruanos no se encontraban preparados; lo único que se lograría con esas normas, era alterar los buenos hábitos de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es consolidar lo ya existente, por ejemplo, afianzar la idea de la libertad en nuestros ciudadanos, sin el cual no se podría construir la ciudadanía.

El orden es otra figura anhelada por las diferentes publicaciones, pero conseguirlo no era fácil porque era necesario tener autoridades con capacidades y el suficiente poder para aplicarla en todo el territorio. Esta situación no se desarrollaba con la Constitución de 1856, según se denuncia, pues le había arrebatado a la presidencia su capacidad de poder. Por ello, se recalca que nuestras autoridades no deberían sufrir el despojo de su poder, ya que ellas son las responsables del mantenimiento del orden y el país caería nuevamente en el reino de la anarquía, si las autoridades carecían de dicho poder. La clase política de mediados del siglo XIX estaba obsesionada por acabar con la anarquía del país porque desde la independencia se había vivido en una constante ingobernabilidad, lo cual ha impedido la construcción de un Estado moderno y eficiente; por lo tanto, según los conservadores, había que prescindir de las innovadoras ideas liberales, dado que el único camino que nos han conducido es llevarnos hacia el camino del despotismo y la anarquía (Proyecto de reforma de la constitución sancionada en el año 1856, 1860, pp. 2-3).

La Constitución de 1856 expiró por la ceguera política de los liberales se volvió impopular con el apoyo de los actores políticos tradicionales de la época: la Iglesia, el Ejército, el Poder Ejecutivo, la burocracia y el Poder Judicial. En esa crítica, se recalca a la Convención Nacional de 1855, una Asamblea Constituyente y Legislativa, dominada por los liberales, que fue acusada de ser un foco de constantes conflictos; además, le restó legitimidad al Gobierno de Castilla, por ello se entiende

el apoyo tácito de Castilla al golpe de 1857. Aprovechando aquella ruptura del orden constitucional, el Gobierno aprovechó la situación para convocar a una nueva asamblea, con la finalidad de reformar la constitución; así se formó el Congreso Extraordinario de 1858, que en vez de ejecutar las reformas, se encasilló en un encarnizado enfrentamiento entre las facciones liberales y conservadoras lo que conllevó a la casi paralización y destitución del gobierno de Castilla.

La guerra civil de 1856 y sus trágicas consecuencias para los liberales habían demostrado que la amenaza del militarismo seguía tan vigente como desde la independencia. Había que buscar contener los excesos de aquellos jefes militares ambiciosos de poder. La Constitución de 1856 lo había intentado, pero se derogó. La inexperiencia de los legisladores contribuyó a ese infeliz desenlace, quienes en su intento por regenerar el país, habían implementado normas que fueron severamente criticadas. Estos desencantos no eran novedosos porque desde la independencia se vivió escenarios similares. La nueva reforma constitucional que se iba a desarrollar en 1858 llegó precedida de una gran cantidad de escritos que plantean hacer una tabula rasa con la Constitución de 1856; pero también reaparece una prensa liberal, como *El Constitucional* (1858), que busca mantener los logros de la constitución, o al menos rescatar los artículos destacables.

La reforma de la Constitución de 1856 había sido prevista por los convencionales de 1855, ya que se había insertado en aquella carta magna un artículo dedicado a su reforma: el artículo 134 que establecía que para reformar uno o más artículos se necesitaba que el proyecto sea aprobado en tres legislaturas ordinarias distintas; el fin era debatir convenientemente los cambios a implementar. Para muchos entendidos, el hecho que se celebren tres legislaturas ordinarias, era mucho tiempo, pues se necesitaría tres años para poder cambiar los artículos más controvertidos de la Constitución. La situación era nominal, según se denuncia, pues sería difícil hacerla realidad; así se cumpliría la tradicional frase *se obedece pero no se cumple* (Proyecto de Reforma de la Constitución Sancionada en el año 1856, 1860, p. 49).

Ante tales objeciones, que se podía hacer, por un lado están quienes plantean que solo habría que revisar partes de la Constitución; pero por otro lado, están quienes reclaman que debería revisarse en su totalidad, ya que dicha carta magna

esta manchada con sangre de la guerra civil<sup>42</sup>. La situación en la república continuó siendo tensa por las consecuencias de aquel conflicto, por lo tanto, el nuevo Congreso Extraordinario de 1858 iba a tener una delicada misión: normar en beneficio de la población y satisfacer las diferentes posturas políticas, para no ser acusado de violentar las leyes del país.

### **1.3. Puntos críticos de la constitución de 1856**

Uno de los temas sensibles que enfrentó a los sectores liberales y conservadores fue la discusión con respecto a la pena de muerte, ya que esta afectaba los derechos individuales; los liberales lo habían planteado y lograron establecer su abolición en la Constitución de 1856. Con la publicación del escrito *Opúsculo sobre la necesidad de reformar la carta fundamental de la República*, vuelve la crítica sobre tal medida. La publicación hace una cerrada defensa sobre las bondades de la pena de muerte, según creen, porque contiene a los individuos que desean infringir las leyes y a los asesinos de cometer delitos. De no existir esta sanción, las prisiones estarían llenas de individuos infractores de la ley, por lo tanto, esta norma es una garantía que evita que aumenten los delitos en el país. La publicación reclama que la abolición de la pena capital va a desencadenar problemas en el país, y que las naciones con un alto sentido de moral pueden establecer tal medida, y ese no es nuestro caso. Lo que debe mantenerse, es la proporcionalidad del delito con la pena; de no darse, lo único que se sentarían son malos precedentes para la justicia, por lo tanto, es necesario la reforma del artículo 16 de la Constitución. (*Opúsculo sobre la necesidad de reformar la Carta fundamental de la Republica*, 1860, p.9).

Este debate se realizó en el Congreso Extraordinario de 1858 y en el Congreso de 1860; años después, en 1862, Francisco De Paula G. Vigil publica *Opúsculo sobre la pena de muerte*, donde vuelve a la carga sobre el motivo de abolirse la pena de muerte, ya que él asocia la abolición de esta norma con la idea del progreso de las naciones modernas. El planteamiento liberal, de tendencia progresista

---

<sup>42</sup> Una nueva guerra civil se desencadenó en 1856, cuando Arequipa se pronuncia contra la promulgación de la Constitución para defender, según ellos, la defensa de las tradiciones del país. El conflicto se prolongó hasta 1858.



para el siglo XIX, será desechado ya que la mentalidad y las costumbres de la época la señalan como una medida necesaria para la estabilidad social.

Otro de los puntos criticados a la Constitución del 56 es con respecto a la movilidad de los empleos. La crítica plantea que a pesar de que se ha proclamado la abolición de la inamovilidad de los empleos, que es presentada como el triunfo de la modernidad y de la justicia, estos ya no serían propiedad del empleado ni de sus familias; el detalle se encuentran, en que hay sectores del Estado, comentan los escritos tradicionalistas, que si necesitan empleos fijos. Estos se encuentran en los sectores judiciales y en el manejo de rentas, pues allí pueden ocurrir una serie de inconvenientes; se hace la observación que el Gobierno de turno puede colocar en esos cargos a funcionarios de su agrado, adictos a su causa, pero sin aptitudes para desempeñar tales funciones, por lo tanto, la ansiada movilidad no producirá los efectos deseados por la ley, pues lo único que nos dejara son instituciones que pierdan credibilidad y eficacia. Para evitar estos inconvenientes, los empleados del sector Judicial y de la hacienda pública, debieran mantenerse en sus cargos, debido al conocimiento de sus respectivos sectores. Lo que debe buscarse en ellos, es el perfeccionamiento de sus oficios, solo así, conseguirían mejorar su labor y ser más eficaz. Todo lo contrario ocurriría si se mantiene la movilidad de los cargos, los empleados no se sentirían seguros del esfuerzo que realizan, pues al desplazarlo de un lugar a otro, ocasionaría que su esfuerzo en el trabajo disminuya, y no se consiga la eficiencia que se solicita de dichos funcionarios. Es necesario señalar que las medidas de los liberales buscaban a acabar con la mal denominado *empleomanía*, que lo único que había ocasionado era debilitar la gestión de las labores de los trabajadores, por ello urgía la reforma para poder acabar con este patrimonialismo que se había heredado de la época colonial.

La abolición de los fueros, es otro de los puntos controversiales de la Constitución, el cual era apoyado por los liberales, quienes veían su sola existencia como parte del pasado colonial que debía desterrarse, pues la búsqueda de la modernidad implicaba eliminar tal anacronismo, debía eliminarse las bases de la república corporativa, que buscaba mantener sus privilegios de grupo, atentando contra el credo individualista del liberalismo; un comentario de la época, publicado en el *Diccionario para el Pueblo* (1855):

«El fuero es un absurdo en República, puesto que nadie debe estar exento de las leyes que rigen a todos. Esos privilegios de castas y órdenes sociales son restos de las monarquías absolutas de la edad media que van desapareciendo» (Espinoza: 427).

La abolición de los fueros eclesiásticos y militares fue criticada enérgicamente por la prensa conservadora. Uno de los sectores afectados fue el Ejército, institución de mucho arraigo en la vida política del país, la cual había sufrido la privación de sus fueros. La crítica señala que la aplicación de tal medida implicaba desnaturalizar el carácter de la milicia y reducirle su condición de orgullo; lo único que se daría con la aplicación de tal medida, era la pérdida de la disciplina y del orden dentro del Ejército; sus integrantes estarán a merced de las maquinaciones de personas ambiciosas que pueden llevar al país a vivir constantes desordenes y lo único que se conseguiría es prolongar el caos republicano (Opúsculo sobre la necesidad de reformar la carta fundamental, 1860, pp. 8-9). Es de notar que por aquellos años, hay una fuerte corriente que busca subordinar a las Fuerzas Armadas a los intereses civiles, por ello había que acabar con la oligarquía militar. Diversas publicaciones en la prensa de la época, principalmente liberal, hacen acotación de tal demanda; esta situación ponía en controversia el modelo que había implementado Castilla, que privilegiaba a la milicia como la institución que debía llevar al país hacia el orden, pero la realidad es que esta república militarizada desangraba al país.

La supresión del fuero eclesiástico es otra de las medidas que ocasionó una generalizada resistencia, especialmente de los sectores ultramontanos; las publicaciones de los sectores católicos, llegan a mencionar que dicha medida ha sido criticada por la población, pues señalan que las normas constitucionales no deben contradecir el orden normal de las cosas. Este pensamiento sigue el orden propuesto por los sectores conservadores, por lo tanto argumentan que es necesario respetar lo conseguido y no violentarlo de la manera que lo hizo la Convención Liberal de 1855. Los órganos de prensa allegados a los sectores eclesiásticos, como *El Católico* y *El Progreso Católico* seguirán sus reclamos y con un discurso confrontacional:

«Por desgracia no faltan aún cerebros calenturientos, que fiándose demasiado de sus propias lucubraciones y renegando de la historia,

todavía forcejean por hacer entrar a los pueblos en el laberinto sin salida de un estafalarío y ridículo utopismo». <sup>43</sup>

Como se puede apreciar cierto sector de los conservadores, los denominados *ultramontanos*, siguen con la idea que el progreso o cualquier tipo de innovación es un mal que ocasiona daños a la nación. Posteriormente, cuando el Congreso de 1860 ratifique la abolición de los fueros, los ataques proseguirán, llegando a tildar al Congreso de ser engreído, buscando romper el pacto entre la Iglesia y el Estado. A pesar de todas las críticas, el sentido de construcción del Estado ha triunfado, ya que se logra consolidar el pensamiento secular regalista en contra de los sectores tradicionalistas.

La descentralización es otra de las políticas que buscaban establecer los liberales, para ello la Constitución de 1856 había establecido el restablecimiento de las Juntas Departamentales; aquella era una institución criticada por los sectores tradicionales, pues señalan que si ellas se mantiene, lo único cierto es que van a llevar al país al camino del desorden. El razonamiento que había conducido al establecimiento de las juntas era la búsqueda del equilibrio entre los distintos departamentos y las autoridades de la República; en teoría, se llegaría al ansiado equilibrio de poderes, de paso, ayudarían a establecer asambleas locales que facilitarían la gestión del Gobierno; esto se desarrollaría siempre y cuando se tuviese las condiciones favorables; el camino a la descentralización se estaba abriendo con estas medidas. Sin embargo, los conservadores señalaban que este tipo de medidas ya se habían intentado establecer en las constituciones anteriores y habían tenido un desenlace no tan feliz. Por ello señalaron que el centralismo era necesario para tener un Gobierno eficaz porque permite al gobernante de turno tener influencia en las provincias y desarrollar acciones más efectivas. El enfoque concuerda con el proyecto de modernización que se lanzó desde Lima; además, estaba el recuerdo de la confederación Perú – Bolivia, que había aplicado una política descentralista con un resultado nada grato y que, según la opinión de la época, atentó contra la soberanía e integridad nacional (Planas, 1998, p. 161).

---

<sup>43</sup> El Progreso Católico periódico religioso y social, 1860. Diario de corte conservador promovido por los sectores afines a la Iglesia Católica. En su primer número del 14 de julio de 1860 publica un artículo que lleva por título «Prospecto» expresa su manifiesto contra las amenazas a la sociedad peruana.

La crítica contra las juntas departamentales, están centradas en que eran instituciones que habían servido para disputarle el poder al Gobierno central, por lo cual su restablecimiento llevaría al país a la ingobernabilidad. La situación de la nación se agravaría, pues se denuncia, que aquella situación acarrearía constantes confrontaciones entre el Gobierno central y las provincias y que se reflejó en el Congreso y en los departamentos; las relaciones se volverían conflictivas y llevaría al interior del país a prolongar el caos, el atraso, negándoles el progreso. Erróneamente, se cree que en el interior del país no se dispone de personal adecuado para el desarrollo de la administración local y la que existe se duda de su solvencia moral para que llevar a buen puerto las reformas. Todas las críticas, finalmente, fueron consideradas dado que la Constitución de 1860 no se menciona nada sobre la descentralización. Las funciones que se encargaban antes a la Juntas, serán asumidas por los prefectos y subprefectos, que fueron autoridades dependientes del Ejecutivo.

El impulso reformista de la descentralización fue finalmente suprimido, imponiéndose el centralismo presidencialista desde Lima. Las provincias tendrán que esperar décadas para poder revertir esta medida. Esto es una constante en la política latinoamericana, la lucha de proyectos centralistas y federales, tendrán repercusiones en las diferentes constituciones de Hispanoamérica, nuestros liberales y conservadores, siguen esa tendencia.

Siguiendo la crítica al modelo descentralista, la situación de las municipalidades es otro de puntos que se plantean para la reforma. La denuncia que se lanza contra la Convención, es que las municipalidades no fueron fortalecidas, ni potenciadas por la Constitución de 1856; lo que se tiene es un panorama crítico. Las municipalidades son acusadas de ser un obstáculo para el Gobierno central ya que podían oponerse al centralismo del gobierno de turno, por ello los prefectos y subprefectos designados habían asfixiado cualquier intento de desarrollar un Gobierno local y se limitaron los alcances de las municipalidades. De allí que las denuncias que se lanzan contra ellas es demostrar su inviabilidad; se exclama que en las capitales departamentales, se desarrolla una situación caótica, hay demasiados inconvenientes que permiten apreciar la insignificancia de dicha institución. Las personas a cargo de los Gobiernos locales no son las más idóneas para desempeñar sus labores ya que se preocupan por entablar debates intrascendentes que no solucionan en nada los problemas directos de las ciudades. Un indicativo de esta

crisis municipal es el hecho de haber abandonado la ornamentación de las urbes que dirigen, se señala que hay una carencia del alumbrado en las calles, los mercados han sido prácticamente abandonados, dejándolos expuestos a la inseguridad y en cuanto a la situación económica, estas no realizan un control a los precios de los alimentos, lo que fue aprovechado por los vendedores. Pero es necesario mencionar que este ambiente caótico es producto de que los municipios no poseen rentas fijas y ello los limita notoriamente, no pudiendo atender las demandas y necesidades de sus respectivas ciudades (Anónimo, 1860, p. 13).

Si lo descrito anteriormente ocurría en las municipalidades de la capital de departamento, la situación era más caótica en las capitales provinciales y locales, que no merecían ostentar el título de municipalidades por las severas carencias que los aquejaban. A esto, las relaciones que se desarrollan entre las municipalidades con los representantes del Ejecutivo, como son los prefectos y subprefectos, son difíciles y conllevan a un constante desorden de la vida política. Por ello, las críticas conservadoras, son favorables al mantenimiento del centralismo acusan que las municipalidades son cuerpos políticos sumidos en una completa decadencia, que no tienen una dirección adecuada; ante tal situación, es aconsejable, al igual que con las Juntas Departamentales, solicitar su desaparición, ya que sin ellos la vida pública del país sería más tolerable. Todos estos cuestionamientos finalmente tuvieron eco en la Constitución de 1860, donde la institución de la municipalidad sufrirá una serie de cambios que se plasmó en el artículo 118 el cual estableció lo siguiente: «Habrá municipalidades en los lugares donde designe la ley; la cual determinará sus funciones, responsabilidad, calidades de sus miembros y el modo de elegirlos». Esto nos indica claramente que los Gobiernos municipales, verán disminuidos sus márgenes de acción y quedarán expuestos a la influencia de los distintos Gobierno de turno.

Otra seria crítica que se establece contra la Constitución de 1856 va dirigida contra la organización del Congreso. Se recomienda la bicameralidad por el orden que ha creado en diversos países. Los escritos que circulan en los espacios públicos exclaman que era necesario precisar la reorganización del Congreso porque ello garantizaría el orden, a su vez, otorgaría un grado de madurez a la hora de reflexionar y realizar las leyes. Desde este punto de vista, el gran fallo de la Constitución del 56 radica en que no especifica de una manera clara como se

implementaría la bicameralidad; de allí que las críticas conservadoras señalaban que no hay una forma clara para elegir a las personas que se presentan a la Cámara de Senadores. En tal situación, se reitera que al Parlamento deben ingresar personas ligadas a la carrera pública, de no ocurrir dicha situación, ingresarían personas sin experiencia que complicarían las gestiones parlamentarias y propiciaría la corrupción del Congreso (Breves reflexiones acerca de la organización del Poder Legislativo, 1860, pp. 24-30).

Se necesitaba que el Legislativo, sea un poder independiente, eficaz que conduzca al país hacia el progreso, para ello se deben garantizar leyes aceptables para la ciudadanía<sup>44</sup>, tal como era el caso de los congresos británico y norteamericano. Para cumplir tal meta, había que hacer una adecuada selección de los representantes; por ello, era necesario una Cámara de Diputados que representen a los pueblos de la República, ellos se encargarían de hacer las normas legales. Las leyes producidas por la Cámara de Diputados necesitarían ser monitoreadas y corregidas por otro cuerpo Legislativo; esto hacía necesaria la Cámara de Senadores, que tendría a su cargo una medida fundamental: la reflexión de las leyes. Por ello, los Senadores deben ser personas idóneas en el desempeño de tal cargo y se les debe exigir más requisitos para desempeñarlo. Además, se debe establecer que para ser Senador, se debe tener una mayor cantidad de años que el de diputados; en la Constitución de 1856 solo se necesitaba cumplir los 25 años de edad para poder desempeñarse en ambos cargos. La cuestión de la edad es vista como la experiencia otorga sabiduría, planteamiento tradicional, que se vio reforzado por lo ocurrido a Salaverry en su lucha contra la Confederación Perú – Bolivia, donde la juventud e inexperiencia del general Salaverry llevó al país hacia el desastre ante Santa Cruz.

Por lo tanto, la elección de los Senadores se convierte en un punto crucial para la gobernabilidad del país, su elección no puede ser dejada a la suerte y esto es para ambas Cámaras. Las críticas hacia los liberales es permitir que la Constitución del 56 deje al azar la elección de los Senadores y diputados. Las consecuencias de esta falla serían fatales porque se lograría tener pésimos representantes para el Parlamento. Ante eso, se reitera que para elegir representantes de calidad para el Senado era necesario exigir más requisitos; el proceso eleccionario para el Senado

---

<sup>44</sup> En *El Diccionario para el Pueblo de Juan Espinoza*, se definía al Congreso como un cuerpo deliberativo encargado de dictar las leyes que la nación se da por medio de sus representantes.

debía ser distinto al de diputados, ya que así, se conseguiría tener un cuerpo legislativo más competente y capacitado para implementar medidas pertinentes con la realidad del país y debía dejarse de lado aquel idealismo liberal que trajo conflictos al país.

Otra imputación contra la Constitución estuvo referida a los extranjeros y peruanos naturalizados, quienes no podrán ejercer cargos o trabajar para el bienestar del país. Solo podrían hacerlo cuando cumplieran los veinte años de residencia o ejerzan la misma cantidad de tiempo en alguna profesión. Esta realidad no se desarrolla en otros países de la región y aprovechan las capacidades de los extranjeros. Uno de los argumentos que se plantea es que la calidad del peruano no la debe determinar el hecho de haber nacido en territorio nacional; por ello, era necesario cambiar la norma constitucional para insertarlos; y acusa que la carta de 1856 practica una absoluta mezquindad hacia los extranjeros (*Opúsculo sobre la necesidad de cambiar la constitución*, 1856, pp. 16 – 17). El aprovechamiento de la población extranjera era parte de este proyecto de la modernización tradicionalista en la cual se buscaba integrar europeos, con el objetivo de revitalizar la República, así algunas familias extranjeras provenientes de Europa lograron insertarse en la élite del país. Sin embargo, la mayoría de migrantes resultaron ser de origen chino y no necesariamente fueron integrados a la sociedad republicana del siglo XIX.

Las publicaciones conservadoras que se difundirán entre 1858 y 1860 centran las críticas en que la constitución de 56, contiene normas que proyectan sombras y nada de realidades, argumentos que hacen que la califiquen de ser una *carta monstruo*. Asimismo, se hace notar que la Convención de 1855 fue influenciada por radicalismo que ha destruido los principios de autoridad y confundir las atribuciones de poder. En su deseo de imponer la modernidad liberal, la Constitución ha establecido una serie de disposiciones que no van con la realidad del Perú; es improbable que con dichas normas se alcance el camino del progreso. Los grupos afectados por la reforma constitucional se expresaron en términos muy duros sobre la Constitución del 56, sectores de la Republica Corporativa cómo el Clero, la Milicia, la Magistratura y los empleados públicos tenían suficientes motivos para perseverar en sus ataques. Tenía que darse una reforma urgentemente en la carta de 1856 para salvar al país del caos. (*Breves reflexiones sobre el punto de capital que debe abrasar la reforma constitucional*, 1860, pp. 1 – 5).

## **2. El proyecto constitucional de Felipe Pardo**

Al empezar las discusiones sobre la necesidad de hacer una nueva Constitución que reemplace la de 1856, acusaba de haber trastornado el orden tradicional, empezaron los debates en el Congreso de 1860, se formó la comisión respectiva que tenía la finalidad de elaborarla. Por ello este Congreso tenía la firme de intención de presentar una Constitución más pragmática con los intereses del Estado y en esta lógica se presentan diversos proyectos constitucionales, entre los que se destacó el presentado por Felipe Pardo, que cuenta con los comentarios de José Antonio de Lavalle. Se presentó en el año de 1855 y en su prefacio se había comentado que una de las circunstancias políticas de nuestro país es el de presentar constantemente nuevas leyes, situación que se repetía desde la independencia, por tanto había que aprender de estas constantes experiencias y mostrar un proyecto que busque el equilibrio de los poderes. Ambos personajes plantearon que se dé una revisada a este proyecto que fue finalmente rechazado por la Convención de 1855, pues estos personajes no eran parte del proyecto liberal; solo eran representantes del orden conservador.

Este proyecto fue nuevamente expuesto en 1858, en las anotaciones que el autor presenta para ese año Considera que la Constitución de 1856 era deficiente debido a que no reunía las sugerencias de la opinión pública, por ello al presentar este proyecto, buscan que se encuentre la debida utilidad a su escrito en la elaboración de la nueva constitución. Este proyecto consta de 87 artículos, agrupados en 14 títulos que buscan apuntar a una ideal participación política de la sociedad de mediados del siglo XIX, claro está enmarcado dentro del contexto de la época. Esto se puede apreciar cuando en su primer título toca la situación de la religión y de la forma de Gobierno. Esto es considerado en su artículo primero: «La nación peruana profesa la religión católica [...]sin permitir el ejercicio de ningún otro culto», con ello rechaza de plano el planteamiento liberal de la tolerancia religiosa que ha sido causante de muchos conflictos en Europa En nuestro país sería el caldo de cultivo para potenciales conflictos, dado que una sociedad como la nuestra, donde hay un desfase total entre sus instituciones y el pueblo que vive sumido en una completa ignorancia, ocasionaría potenciales conflictos. Para evitar las calamidades que asolaron el país en la guerra civil de 1856 era necesario confirmar la oficialidad de la



religión católica y no buscar el camino del caos. Los sectores ultramontanos, también eran partidarios de establecer la supremacía y la oficialidad del catolicismo en el país.

Una idea que confirma el discurso conservador, que plantea Lavalle, es la de mostrar que la soberanía reside solo en los ciudadanos ya que ellos poseen las capacidades para poder ejercerla sin llevarnos al caos. En esta lógica, los individuos que gozan con todas las facultades para ejercer la ciudadanía deben ser hombres instruidos en el conocimiento, pues son los únicos capacitados de llevar a buen puerto el desarrollo de la República. Por ello era indispensable el requisito de ser alfabeto para evitar potencialidades conflictos y ejercer la ciudadanía activa (Pardo, *Proyecto de Constitución Política*, 1859, pág. 9 – 15). A esto se suma la posición de exigir la propiedad de un predio territorial, una ocupación, esto es a imitación de lo que se ha establecido en los Estados Unidos y otras naciones de América; con ello se plantea la exclusión de masas que no son conscientes de la situación del país, pues se subordinarían a ciertos intereses. No olvidemos que el liberalismo doctrinal francés del cual los conservadores eran partidarios, promovían estas medidas.

La edad para poder ejercer los derechos políticos son los 21 años de edad que, según el código civil, el ciudadano es capaz de poder actuar racionalmente; además, se debe aprovechar esa edad para poder insertar a los jóvenes en la política. Ser peruano es también una condición que se adquiere teniendo al parentesco directo de los padres, o por naturalización de los extranjeros, esto ya se había dado en las constituciones anteriores.

Los derechos constitucionales que se expresan en el título III del proyecto son los denominados derechos individuales de los cuales se aceptan que la igualdad ante la ley es lo más deseable para el país, pero hay que hacer las debidas correcciones del caso. La sociedad peruana no puede desarrollar esta igualdad ya que es un absurdo considerar que en el ejercicio práctico todos seamos iguales; si se llevase a cabo tal postulado, solo nos conduciría al caos. Esta concepción de los derechos constitucionales, claramente conservadora, era necesaria a los intereses de la nación, pues según reclaman, todos los ciudadanos deben contribuir al mantenimiento de la nación, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con ello se desarrollaría el principio de equilibrio en la participación ciudadana en la política,

y además, no se quebrantaría la denominada igualdad. Otro derecho individual que presenta el autor, es la imposibilidad de detener a las personas sin contar con un mandato Judicial, con ello las personas quedan a salvo de las excentricidades del poder político. Siguiendo la lógica de la modernización tradicionalista, que se está imponiendo en las nuevas normas del país, también se defiende el derecho de a la propiedad, esta viene con la mentalidad burguesa que ha triunfado con los ideales liberales de 1848 (Lavallo, 1858, pág. 40 – 41).

La libertad de asociación es otra de las ideas que se plantea en el proyecto, se comenta que los pueblos debidamente organizados forman lo que hay que evitar, es irse al extremo de la Constitución de Huancayo que impedía la asociaciones por razones de seguridad, pues esta creía que opinar a nombre de la colectividad era algo negativo, pues podía ser aprovechado por algunos hombres que pueden llevar a la población a un mal camino; en este sentido, los intereses de los caudillos militares, utilizando tal argumento, habían llevado el caos al país, aprovechándose de esas limitaciones; por ello había que regular esta idea de la libertad de asociación, pero no con el espíritu de la Constitución de 1839.

Los poderes del Estado, empieza comentando sobre el Legislativo y cuanto es necesario su figura, ya que representa los intereses de la República y de la nación, pues allí, debía desarrollarse el debate político organizado, convirtiéndose en fuente de progreso. La legitimidad del Congreso debe basarse en la bicameralidad donde las Cámaras de Diputados y de Senadores son necesarias para servir de contrapeso al Ejecutivo, que terminaría aprovechándose de ella si solo hubiese una sola Cámara; además reforzaría que ambas gocen de relativa autonomía y sirvieran de contrapeso a la otra, en caso en que alguna de ellas quisiese arroparse con el control del Legislativo. Lo que se espera de este poder del Estado es su responsabilidad y tranquilidad, para que logre alcanzarse una agenda en el desarrollo político del país. Para el autor de este proyecto, para debatir las medidas legislativas, los miembros del Congreso debían gozar de la inviolabilidad de sus opiniones y correspondencia. Asimismo proyecta que durante sus mandato no pudieran ser detenidos, ni siquiera por delito de traición.

El proyecto de Felipe Pardo asevera la existencia del *poder conservador*, el cual estaba representado por el Consejo de Estado, que debía apoyar con sus

consejos al presidente, incluso podía atribuirse las funciones del Congreso, cuando este entrase en receso; conjuntamente, podía intervenir en las competencias del Poder Judicial, donde se aprecia que este organismo se convertiría en una Sala Suprema para apoyar la investidura presidencial contra los otros poderes del Estado para lograr el ansiado orden. La descentralización fue obviada, no contemplaba la presencia de juntas departamentales ni de las municipalidades, todo recaía en la figura de los prefectos, que rendían cuentas ante la presidencia. Como se puede inferir, este proyecto es de índole conservador que quiere reforzar el poder de la presidencia, ya que es el encargado, a su criterio de impulsar la renovación de la República.

### **3. El proyecto de Bartolomé Herrera**

El proyecto constitucional que presenta el obispo ultramontano Bartolomé Herrera es una propuesta para cambiar la tan criticada carta de 1856; en su justificación para presentar este proyecto, comenta que el sentido del deber y el deseo de salir del caos que afecta al país son los que lo motivan su participación en la redacción de este proyecto. Desde su nombramiento como diputado por la provincia de Jauja, manifiesta su deseo de impulsar la reforma constitucional. Además también se tiene, su deseo de poder proteger los derechos de la Iglesia, que han sido duramente afectadas por la Constitución de 1856. Durante el mes de julio de 1860 surge un periódico de raigambre católica, denominado *El Progreso Católico*, que prosigue la línea de *E Católico*, buscan proteger los intereses del catolicismo, para que no se vea afectados por la nueva carta constitucional; en uno de sus escritos comentan:

«(...) probaremos que el catolicismo es a la sociedad, es a la patria lo que el alma al cuerpo; que sus doctrinas respiran los más sanos principios políticos y sociales, y que, por esto mismo, sus leyes son el más sólido fundamento de las constituciones y de los códigos civiles: Con nuestro “Católico” hemos defendido la doctrina católica – Con nuestro “Progreso Católico”, sostendremos que el catolicismo es la última y más acabada formula de perfectibilidad y bienestar social (...) (*El Progreso Católico*, Prospecto, julio 1860)»

De esta manera podemos apreciar que el proyecto de Herrera estuvo marcado por esta carga ideológica, conservadora y ultramontana, por ello busca evitar que la nueva Constitución se convierta en una fe de erratas de la Constitución de 1856. No solo debe cambiarse temas controvertidos como la pena de muerte, la elección de los Senadores, la contradicción de la autoridad presidencial con serias limitaciones y a la posibilidad de poder vacar su cargo, debilitando de esta manera la investidura presidencial; definitivamente propone la vigencia e importancia del régimen presidencialista que era necesario en un país como el Perú, que tiene muchas complicaciones y donde el Congreso, a pesar de todas sus intenciones positivas para el país, todavía no se encuentra a la altura de las circunstancias; en aquella cuestión, Bartolomé Herrera creía en que un Legislativo demasiado fuerte no contribuía a la gobernabilidad del país.

El orden republicano del país en ningún momento debe verse alterado por el cambio constitucional, muy necesario desde el punto de visto de los conservadores, como mencionaba Bartolomé Herrera: «[...] salvando los principios de nuestro sistema de Gobierno, y sin perder de vista nuestros más importantes y más arraigados hábitos constitucionales, se han de quitar los estorbos que La Convención puso a la recta aplicación de aquellos, y la violenta innovación que quiso hacer en estos[...]» (Herrera, 1860, VI), lo cual demuestra la preocupación de Herrera por cambiar la Constitución de 1856, y no solo estaba por la reforma, sino debía elaborarse una nueva carta magna en donde se impongan los ideales del orden. Su propuesta constitucional fue presentada, para que pueda ser leída por los diputados del Congreso de 1860, especialmente por la Comisión de Constitución del Congreso, que se encargaría elaborar la nueva constitución; con ello pretendía contribuir a la construcción del nuevo orden.

El obispo Bartolomé Herrera se encuentra interesado en mantener los privilegios que gozaba la Iglesia antes de la Convención liberal de 1855, de allí que sus propuestas apunten a defender el catolicismo, asimismo busca excluir la posibilidad que se establezcan otros cultos en el país. Según él debe privilegiarse el culto católico porque es el que profesa el Estado peruano, defiende la idea de que los acuerdos firmados entre el Perú y la Santa Sede deben partir del espíritu del Concordato. Así resulta la agenda de los sectores ultramontanos.

Una de las primeras propuestas que plantea es la noción sobre quienes deben ser considerados peruanos. Continúa con la idea de la primera constitución, en la que uno es peruano desde que hereda la condición de ello del padre, sea por voluntad o naturalización de los extranjeros. Agrega que los nacidos antes del 9 de diciembre de 1824, en cualquier parte del territorio americano hispánico, pueden acceder a la condición de ser peruano. Uno de los requisitos es estar ligado a la religión, a su respeto y la obediencia de las leyes, condición necesaria para que pueda integrar la comunidad peruana.

En su proyecto constitucional, Bartolomé Herrera, trabaja la idea sobre quienes pueden ejercer la ciudadanía, prosigue con las ideas que fueron planteadas en las cartas anteriores, como por ejemplo, la condición obligatoria de ser vecinos de un lugar, además debe contar con el estado civil de casado o viudo, o haber cumplido los 21 años de edad y estar inscritos en el registro de ciudadanos. Las condiciones que llevan a perderlas son:

- Por *inteligencia*, donde coloca una cuestión espinosa, explica que los que no saben leer y escribir deben ser excluidos, situación iba en consonancia con su propuesta de la *soberanía de la inteligencia*. La exclusión de los analfabetos fundamentalmente recaía sobre la masa indígena y volvía a poner en cuestión que tanto deben participar ellos en la política. También eran excluidos los que no tenían una salud mental adecuada, lo cual se entiende a todo sentido.
- Por *falta de libertad*. Aquí se refería a la clase trabajadora de la época, jornaleros, sirvientes, criados que no debía participar en la ciudadanía, aquí se aprecia con suma claridad la idea de la modernidad tradicionalista de Herrera que deseaba seguir teniendo a esas masas dedicados al trabajo y no a la participación cívica.
- Por *presunción de falta de probidad*. Nótese aquí que están los deudores, los procesados Judiciales, los vagos, por comprar o vender votos en las elecciones son también excluidos de la ciudadanía.

En estas circunstancias, no hay duda de las posturas que presenta Herrera, sobre quiénes son los ciudadanos y quienes deben ser excluidos, siguen el discurso conservador de la *soberanía de la inteligencia*; además de esto, exclama, que las personas que van a participar del poder, debe ser personas con un sentido por el amor a la patria y tener sentido de justicia (Espinoza, 2010, pág. 258-259).

En cuanto a las garantías constitucionales, Bartolomé Herrera las divide en tres partes. En *primer lugar* menciona las garantías de las personas, donde reitera la situación de la abolición de la esclavitud, señalando que en el territorio peruano nadie lo es. El principio del liberalismo de la igualdad está presente en el proyecto de Herrera, quien rechaza los privilegios en la sociedad civil, deber reconocerse los talentos y virtudes de las personas; asimismo el proyecto plantea que se defiende el honor y la vida, la inviolabilidad del domicilio, la garantía de reclamar las infracciones constitucionales y la garantía de acceder a la instrucción primaria gratuita, como también el fomento de establecimientos que impartan instrucción.

La *segunda garantía constitucional* que posee el individuo es la libertad de acción para poder circular libremente por el territorio sin ninguna traba, donde se pueda ejercer la libertad de imprenta; , claro en el pensamiento de Bartolomé Herrera esto implica que no se afecte a terceros; también se goza de la libertad de industria y de todo trabajo que no colisione con los intereses de la religión, la moral, la seguridad pública; asimismo queda garantizado el derecho a la asociación, una idea que Herrera promoverá para el Senado. La idea de tener asociaciones no era novedosa, pero permitía que las corporaciones sociales se articulen mejor en un Estado que busca implantar reformas que lleven a la modernización.

La *tercera garantía constitucional* está referida a la propiedad la cual resulta inviolable y es un bien preciado dentro del liberalismo burgués, y que aquí se intenta adaptar a nuestra realidad. Es preciso notar que en este punto se puedan encontrar reminiscencia de la tradición, puesto que todavía se acepta que los bienes pueden ser expropiados o enajenados. En cuanto a los cargos públicos también se encuentran algo de esa mentalidad tradicional, de que los empleados públicos con títulos conforme a la ley, no pueden ser destituidos, salvo por mandato Judicial o presidencial. Esta visión claramente tradicionalista, había sido criticada por los liberales de la Convención de 1855.

### **3.1. Los poderes del Estado en la concepción de Bartolomé Herrera**

Al hablar de los poderes del Estado, Bartolomé Herrera impone la visión de su entorno ideológico, sobre cómo debía organizarse los poderes del Estado, mostrando una particular atención sobre el Congreso, donde vuelve al planteamiento de la bicameralidad, la cual debía estar debidamente organizada para evitar una serie de errores, como cumplir a tiempo las sesiones legislativas y no entramparse en una serie de indefiniciones que hacen que el Poder Legislativo sea objeto de críticas. Asimismo plantea que las sesiones ordinarias, debían tener una duración de 100 días útiles; las sesiones extraordinarias no tienen una duración fija de tiempo; además proponía que las proposiciones legislativas sean aprobadas por mayoría en ambas Cámaras; se previa también, que si no hay una mayoría reunida para poder aprobar alguna norma, entonces solo se requiere más de un tercio de los votos en ambas Cámaras, con esto Herrera piensa que se puede evitar el entrampamiento para aprobar las leyes. El proyecto estipula también que los ministros puedan desempeñar algún cargo en el Ejecutivo, claro está con el aval del Congreso de la República. Además la renovación parcial del Congreso es parte importante de la marcha de la estabilidad política. En el caso del Senado se establece la renovación por tercios, por un periodo de cada cuatro años, mientras que en la Cámara de Diputados se renueva la mitad cada dos años, con lo cual se aseguran que al menos los diputados asistan a dos legislaturas ordinarias; asimismo para poder difundir sus labores, el obispo recomienda la publicación de un diario, que claro estaba, destinado a un objetivo que era la construcción de una opinión en la población letrada. Con estas medidas se esperaba que este poder del Estado renueve cuadros políticos que contribuyan a la estabilidad de la república, además habría un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de la función del Congreso.

Con respecto a la Cámara de Diputados esta debe representar los diversos intereses que representen las diferentes regiones del país, además de discutir las nuevas ideas que llegasen para su difusión o censura o, pues la población está expuesta a los peligrosos sesgos ideológicos como el socialismo, el cual era apreciado como una amenaza. En cuanto al número de integrantes, el proyecto de Herrera señala que este debe estar de acuerdo a lo estipulado por la ley, es decir por

cada provincia debe haber un representante, y en territorios con poblaciones que tienen un número superior a los 50 000 habitantes debe elegirse un representante; además reitera que los requisitos para ser elegido además de la edad, superior a los 28 años, también debe poseer una residencia fija y una renta superior a los 800 pesos mensuales. Se señala también que los representantes del Ejecutivo están imposibilitados de ejercer el cargo de legislador. La posibilidad de tensión entre el Ejecutivo y el Senado debía ser evitado, esto era imaginado por Bartolomé Herrera; por ello para evitar tal posibilidad, la Cámara de Diputados debía servir como mediador entre ambos poderes.

La mayor innovación en su propuesta sobre el Legislativo es con respecto a la Cámara de Senadores, el cual era señalado como la parte más importante del Legislativo. Esta estaba integrado por treinta Senadores, y lo más destacable es en cuanto a sus sesiones, las cuales debían realizarse todo el año, con ello se esperaba un trabajo continuo y constante que contribuya a la construcción de una sociedad civil y que busque el ansiado bien común. Pero la situación más impactante de este proyecto es la propuesta sobre quienes deben integrar el Senado donde nos presenta que debe ser una institución corporativa, preocupada por insertar a los elementos más destacables de la sociedad. El interés de Herrera es la funcionalidad de aquellos representantes debe ser en beneficio del país; los Senadores deben ser escogidos de la siguiente forma:

- *De la carrera política*, los que hayan servido algún ministerio de estado, legación, prefectura u oficialía mayor de ministerio.
- *Del rubro de la hacienda, de la magistratura, del clero, del Ejército y la armada*, los que hayan sido diputados (3 veces), de las profesiones científicas (profesores con 20 años de servicio, rectores y vicerrectores), los propietarios de predios (con una renta de 4000 pesos), los dueños de minas, los comerciantes (que posean un capital de 200 000 pesos), con ello se colocaban parámetros que solo una serie de sectores podrán alcanzar. (Herrera, 1860, pág. 21-22).

Las funciones del Senado eran aprobar los tratados internacionales, enviar a la Cámara de Diputados la lista de Senadores elegibles, aprobar o rechazar las propuestas del Ejecutivo con respecto a la promoción de generales, solucionar los



conflictos de intereses entre el presidente, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial. Ante esta cámara debe juramentar el presidente de la República, así también concede los indultos a petición del presidente. Una facultad importante que tiene el Senado es la suspensión de las garantías constitucionales de la persona: como la inviolabilidad del domicilio, el apresamiento sin el debido proceso, la ilegalidad del destierro y la libertad de imprenta; todo esto claro está entendido que se impone en caso de que la República pase por un grave periodo de inestabilidad política que ocasiones la crisis social. En esas circunstancias se prefería la recuperación del orden. Los conservadores ya habían proclamado que la libertad no debían conducir al desorden, ni al caos (Jamanca, 2015, pág. 208-209); en tal sentido ese órgano pensante del Legislativo, que es el Senado, tenía esa potestad.

Las potestades de este Senado pensante era analizar y estudiar las leyes, desde un enfoque conservador, si había alguna norma que choque contra los intereses de la República. Además tiene la potestad de elegir al presidente de la República, en caso de que no se cumplan las disposiciones que se establecería en la constitución (Herrera, 1860, pág. 26) En el pensamiento de Herrera sobre el Senado, está presente el orden conservador, esa institución se convertiría en guardián de la estabilidad política del país. En la carta constitucional de 1860, el Senado no tendrá muchas de las atribuciones que había se pensado en el proyecto de Herrera; en la carta del 60 se mantuvo competencia del Senado de arbitrar las cuestiones entre el Ejecutivo y el poder Judicial (corte superior y suprema) y de poder vacar la investidura presidencial (ver artículos 65 y 66 de la constitución de 1860).

En cuanto al Poder Ejecutivo este es encargado al presidente de la república, el cual debe cumplir una serie de requisitos, según el obispo Herrera, deben haber sido: ex presidentes de la república, Senadores y consejeros de estado. El Congreso debe elaborar una lista sobre quienes pueden ser los candidatos presidenciales, Estos serán elegidos por los colegios electorales según consta la ley y alcanzar una mayoría absoluta; caso contrario, el Congreso será el encargado de elegir al presidente; en caso de empates en ambas Cámaras, la decisión final la tendrá el Senado. Al mismo tiempo también debe elegirse un vicepresidente que se encargue de la presidencia en caso de ausencia del presidente, los mismo requisitos de la presidencia se aplica al vicepresidente. El periodo de Gobierno del presidente debe ser de seis años, pudiendo además entenderse que puede reelegirse, pues el proyecto de Herrera,

establece que los que ya han ejercido el cargo, pueden presentarse a la candidatura presidencial.

Entre las atribuciones que tiene el presidente están las ya clásicas promulgar y hacer cumplir las leyes, las garantías constitucionales, tomar parte de la conformación de las leyes, proponer los consejeros de estado, velar por la seguridad de las rentas de la nación, velar por la administración de la justicia, nombrando vocales al tribunales supremo y superior a jueces de primera instancia y fiscales- Con estas propuestas Bartolomé Herrera busca una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, esta norma no será aplicada en la constitución de 1860, por la conflictividad que traería con aquel poder. Así mismo, se le otorga el mando supremo de las Fuerzas Armadas, nombra a los generales y almirantes, declara la guerra –con decreto del Congreso-, celebra los convenios internacionales, nombra y remueve a los ministros de estado, en fin la carta pensada por Herrera vuelve a instaurar un presidencialismo fuerte y vigoroso.

En cuanto a los ministros de Estado, estos funcionarios son pensados como burócratas al servicio del presidente, esto se desprende de la anotación de Herrera: «los ministros de estado autorizan con su firma, los actos administrativos del presidente» (Herrera, 1860, pág. 42); para poder ser nombrado ministro, son iguales a los que se proponen para ser senador, es decir ser mayor de 28 años, las rentas fijas superior de 800 pesos y capacidades notorias. Los ministros nombrados se reúnen en el denominado Consejo de Ministros; deben velar por el cumplimiento de las órdenes del presidente y del Congreso. Ellos son el engranaje que deben cumplir su función, que es la de secundar las disposiciones del presidente, estos estaban obligados de asistir al Congreso y rendir cuentas, contestar las interpelaciones que le podía realizar la Cámara de Diputados.

El establecimiento de un *Consejo de Estado* era una de las propuestas novedosas de Herrera, este tendría la finalidad de ilustrar al Gobierno de turno, además debe recomendar medidas administrativas certeras, que tengan una proyección al territorio nacional. En cuanto a quienes lo integra, está el vicepresidente de la República, los expresidentes, los ministros, el arzobispo de Lima, el presidente de la Corte Suprema, el director general de la Hacienda y nueve consejeros elegidos por el

Congreso de la República. Según el obispo, el proyectado Consejo de Estado tendría las siguientes funciones:

1. «Prestar o negar su acuerdo al presidente de la República, cuando se lo pida, y en todo caso lo que lo exija la constitución, para ejercer algunas de sus atribuciones.
2. Darle dictamen, siempre que lo solicite.
3. Proponer al presidente de la República, para arzobispos y obispos [...], y para vocales de los tribunales de justicia, jueces, fiscales y agentes fiscales.
4. Representar al presidente sobre lo ilegal, anticonstitucional o perjudicial a la nación, de sus actos, de los de sus ministros, y demás funcionarios públicos; y sobre la necesidad de remover a estos con arreglo a la ley». (Herrera, 1860, pág. 48).

Este organismo planteado por Herrera, debía servir como una institución consejera en el más alto grado, asesorando al presidente con la experiencia que aquellos hombres habían tenido en el desempeño de sus cargos, su capacidad y experiencias debía servir para hacer una gestión más eficaz del Gobierno, en este caso el segundo Gobierno del general Castilla, el cual había pasado un difícil año de 1859, pues la oposición liberal seguía objetando su dotes de mando. Por ello al presentar esta idea del Consejo de Estado, buscaba que las decisiones fundamentales del país, debían estar fundamentadas en las personas más capaces, el cual es parte de su ideario político. Nuevamente encontramos que Herrera, en su concepción de orden, plantea nuevamente el orden conservador, que se así como el Senado, se desarrollaría con el Consejo de Estado

En cuanto al Poder Judicial, el proyecto de Herrera no es tan ambicioso en sus proyecciones, como si lo es en el caso del Legislativo y Judicial. Herrera a lo largo de los ocho artículos que presenta se enfasca en la administración de la justicia que se ejerce desde los principales fueros como Cortes Comunes, Suprema, Superior, Primera Instancia, Primera Instancias, de Paz; asimismo, también se puede ejercer desde los tribunales de la Iglesia, de los militares, de comercio, los fueros corporativos se mantenían a su criterio. Se señala que los juicios deben ser públicos y que se respeta las instancias de los distintos tribunales. El proyecto contempla la posibilidad de denunciar a los jueces por prevaricato, cohecho o procedimiento ilegal. Estos funcionarios no van a pasar por el juicio de residencia, además tampoco

pueden ser destituidos, salvo por la intervención del presidente de la República, que si tenía dicha potestad.

La organización administrativa de la República es otra de los temas que plantea Herrera. Se observa un retroceso con lo que se había planteado en la Constitución de 1856, que impulsaba la descentralización política del país, ya que restableció las Juntas departamentales, al igual que las municipalidades. El proyecto de Herrera contempla que la división de la república en unidades administrativas como departamentos, provincias y distritos corresponde a la ley, donde las autoridades designadas como el prefecto y el subprefecto representan y defienden los intereses del Ejecutivo, estos a su vez designan a los gobernadores y estos a los tenientes gobernadores; es decir todas estas autoridades dependen del presidente de turno; esto ya venía aconteciendo en las constituciones anteriores a la del 56, que daban una presencia fuerte al Ejecutivo, esta situación fue aprovechada por Castilla, pues le permitió forjar sus redes de clientelas con las élites provincianas. El general Castilla había sabido aprovechar estas circunstancias, pues le permitió forjar el Estado patrimonialista, con la ideología de Herrera se forjó la recomposición de la clase dirigente del país (Mc Evoy, 1997 pág. 24 – 28), en donde la idea del orden será clave, junto a la fortaleza del poder presidencial, de allí que el discurso descentralizador no sea apreciado de manera positiva por el discurso conservador. Herrera en su proyecto ratifica tal disposición, puesto que las autoridades provinciales deben estar sujetas al Ejecutivo; en el caso de las municipalidades este será su idea:

«Las municipalidades no son cuerpos representativos, sino simplemente administrativos. Están subordinadas, conforme a la ley, al poder Ejecutivo y al Congreso, en cuanto es necesario para que cumplan ellas sus deberes en bien de los pueblos, y para mantener la unidad del Estado. Su principal es evitar, por su intervención en el cumplimiento de las leyes onerosas, y en el de las medidas de policía, toda molestia inútil (...)» (Herrera, 1860, pág.53).

En tal sentido es de destacar que el planteamiento de Herrera es fruto de lo que piensan los grupos conservadores limeños sobre la descentralización, el cual está asociado a la idea del desorden y caos.

El proyecto también establece qué papel deben tener las Fuerzas Armadas en el país, en su proyecto son denominadas “la Fuerza Pública”, las cuales están integrados por el Ejército, la armada, la Guardia nacional y la policía; las cuales están destinadas a la protección del Estado y del territorio nacional, con el objetivo de mantener el orden en el país, además de defender las leyes de la república de cualquier intento de desacato y desafío por parte de cualquier elemento del país. Se trata de reforzar la idea de la subordinación de los militares a sus superiores, en este sentido acatar las órdenes del Gobierno sin vacilación, pues los desacatos a diferentes Gobiernos habían ocasionado constantes alzamientos de la milicia y traído la espina del militarismo, que ya era criticado desde todos los sectores de la sociedad por ser los causantes de los desórdenes del país. El proyecto establece, como en las anteriores constituciones, que es la ley la que determina el número de las fuerzas públicas, los nombramientos, el aumento de sus fuerzas y el reclutamiento, con ello se pretende un eficiente control de estas fuerzas y evitar el caos que hasta ese momento había asolado el territorio nacional. La concepción orgánica de los conservadores, aquí coincide con la de los liberales, pues para conseguir la modernización de la República, era necesaria contener los excesos del militarismo, que tanto daño había ocasionado al país.

Para finalizar la presentación de este proyecto de Bartolomé Herrera, también coloca en el capítulo final disposiciones para poder modificar y reformar su proyectada Constitución. Un mecanismo que resulta interesante, es la observación que habrá en cada legislatura ordinaria sobre la Constitución, se podrá apreciar las fallas que se dieron en el documento constitucional, con esto se podría implementar mejoras a dicho documento. Como se había establecido en la Constitución del 56, para poder reformar la constitución, es necesario la aprobación en dos legislaturas ordinarias, por dos tercios de cada Cámara; además debe contar con la autorización presidencial en concordancia con el consejo de Estado; con ello se buscaba colocar los mecanismos posibles de establecer cualquier reforma.

Una última idea que plantea el proyecto es establecer como se producirá el traspaso constitucional al nuevo Congreso y Gobierno. Una vez instalado el nuevo Congreso bicameral se establecía que debía ceñirse en su funcionamiento como lo establecía la nueva constitución. Establece también que se derogan toda ley que contravenga la Constitución vigente, con ello se busca desaparecer las normas

liberales que se oponían al nuevo orden conservador que había triunfado en 1858. Lo que se destaca del proyecto constitucional de Bartolomé Herrera es su concepción del régimen corporativo, que como se apreció debía representar a los mejores sectores de la sociedad. La lucha de Herrera también estará en el campo eclesiástico en donde plantear la necesidad de firmar un concordato con la Santa Sede, aprovechándose para ello del aparato propagandístico católico y promover dicho acuerdo.

Finalmente, cuando se presente la Constitución de 1860, el presidente del Congreso, el general Mendiburu, declaró que este documento se debía a un mandato especial de los pueblos, conservando las libertades públicas y los derechos del hombre en la sociedad, y recalcó que en la elaboración de la Constitución no había tomado partido el fanatismo de la radicalidad (Pareja, 1943, p. 132). La Constitución le devolvería al Ejecutivo mucha de las atribuciones que le despojo la Constitución del 56, el Congreso sería Bicameral, asimismo se ratificó algunas reformas liberales como la supresión de los fueros y privilegios. De esta manera, se inicia la existencia de la Constitución que mayor tiempo de vigencia ha tenido en la vida republicana.

### **3.2. El ultramontanismo y su respuesta en 1860**

La aparente derrota de los sectores liberales con el cierre de la Convención Nacional de 1855 y la clausura del Congreso Extraordinario de 1858, permitió a los sectores conservadores, especialmente los eclesiásticos, denominados, ultramontanos a impulsar la firma del concordato con la Iglesia Católica Romana, para garantizar la situación de la Iglesia peruana que había sido golpeada por los sectores liberales regalistas, y creían que debía garantizarse su posición frente al Estado. Por ello, el obispo Bartolomé Herrera informa al nuncio apostólico en Bogotá. La situación que se presentaba era favorable para firmar dicho acuerdo (Ibérico, 2013, p. 72).

Pero la situación no iba ser muy distinta todavía en 1858, pues el Congreso Extraordinario ratificó muchas de las medidas de las reformas liberales que había establecido la Constitución de 1856, sin embargo la coyuntura política terminó beneficiando a lo ultramontanos que en el bienio 1858 – 1859, terminaron colisionando el Congreso y la presidencia de Castilla, incluso se llegó a la situación

de querer vacar la presidencia de la República, por ello se terminó clausurando el Congreso Extraordinario. El nuevo Congreso de 1860, presidido por el obispo Bartolomé Herrera intentó restablecer los privilegios de la corporación eclesiástica, eso lo demostró en su proyecto constitucional, a pesar de su esfuerzo no lo logro, lo que si se consiguió fue que el Gobierno de Castilla entregue rentas estables a la Iglesia.

El discurso de los sectores ultramontanos, como siempre, apunta a reforzar la necesidad de la religión católica para la vida del país ya que los lograría alcanzar la justicia y la libertad; por ello apuntalaban que la racionalidad del Estado debe ir determinada por el reconocimiento de la Iglesia y sus valores, ya que ello permitiría encausar la vida política y social del país; en ese sentido al Iglesia era la única institución que podía evitar los excesos que ocurrían durante las luchas políticas donde generalmente se practicaba el abuso de la libertad. De esta manera, los ultramontanos conseguían espiritualizar su discurso político, con ello pretendían que ellos se conviertan en el foco que irradie el orden conservador y la justicia en la Republica.

Finalmente durante la década de 1860 veremos como los diferentes discursos civiles, tanto liberales como conservadores, los eclesiásticos y los ultramontanos, empiezan a agrietar la republica corporativa. El militarismo será cuestionado con mayor fuerza y desembocará en los años siguientes en una República cada vez más ordenada, con un discurso más civil y de orden.

#### **4. El balance de los proyectos de la década de 1850**

La consolidación de un país estable era la finalidad de los diferente proyectos constitucionales que se van a presentarse, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con un Estado potencializado con los recursos guaneros, se busca establecer una estabilidad política, como económica; es partir de ese momento que empieza la construcción de la estabilidad; se buscaba consolidar elementos claves como la organización del Estado, la ciudadanía, las instituciones, las garantías individuales, la religión, etc. Todas estas ideas debían plasmarse en las constituciones, de allí mi interés por querer apreciar cómo se impulsa el estudio de estos escritos que

plantearon propuestas que buscaron el progreso del país. Por esa situación, al estudiar los debates constitucionales y las propuestas que se van a gestar en torno a las Constituciones de 1856 y 1860, podemos apreciar que estos proyectos constitucionales son reflejo de las ideas gestadas por parte de los grupos representativos del país.

Por ello aparecen una serie de proyectos que buscan establecer el tipo de país que se quiere construir, sea influenciado con las ideas conservadoras o liberales. Ambas ideologías intentan establecer puentes para crear una ciudadanía activa, donde solo los sectores que poseen instrucción y racionalidad, ayudarán a construir una institucionalidad fuerte y se fortalecería el buen Gobierno. Se debe abandonar las precarias condiciones que se tenían en esos momentos, es decir rechazar el militarismo retrogrado y establecer normas jurídicas claras y consistentes donde debe tenerse en cuenta la herencia colonial, el cual era una gran carga; no se puede fomentar un cambio social con las leyes que no enfrentarán dicha herencia, el problema será que nuestros liberales, por ejemplo, nunca aplicaron todo el programa liberal.

La etapa que se ha estudiado comprende de 1854 a 1860, donde se van a publicar toda una serie de escritos que nos dan a conocer qué tipo de país se quiere, que reformas se implementaron para poder hacer posible los cambios que posibiliten sacar al país del marasmo de la anarquía militar y de la constante inestabilidad política. En todos los proyectos y escritos que se realizaron la intención era implementar la estabilidad, para poder impulsar y consolidar los cambios del país. En 1854, cuando se dio la revolución contra el *Gobierno inmoral* de Echenique se publicarán escritos que critican las limitaciones de la Constitución anterior, la de 1839, y como esta no logra armonizar con el tipo de país que se quiere; por ello, cuando se instale la Convención Nacional de 1855, esta asumirá parte de los pedidos que proponen los escritos liberales. Fruto de ello apreciamos la carta constitucional de 1856, que trajo una pugna política, por el descontento de los grupos conservadores que finalmente terminaron impulsando, en un corto periodo de tiempo otra guerra civil, la rebelión de Vivanco en Arequipa. La Constitución del 56 será puesta en tela de juicio y se planteará su nulidad; finalmente, la caída de la Convención Nacional en 1857, abrirá un nuevo telón sobre qué hacer con aquella Constitución liberal.



A partir de 1858, se agita el panorama político en torno a las publicaciones que van a circular. El debate se vuelve a abrir en torno a que se debe hacer con la carta del 56 (anularla o reformarla). Es una caja de pandora la que se abre, surgirán nuevas propuestas, que hemos presentado en el transcurso de la investigación, nuevamente se renueva la visión de los intelectuales peruanos, se apreciará por enésima vez la idea sobre el tipo de país que se requiere y la exclusión de innovaciones innecesarias. De allí que queremos presentar algunas ideas que sirvieron para moldear las instituciones que requería el país, en donde la ciudadanía, guiada por un grupo que «poseía la inteligencia», debía tomar parte activa en la construcción del Estado.

Durante el estudio de los diferentes proyectos constitucionales, presentados para elaborar las Constituciones de 1856 y 1860, se puede extraer una serie de criterios que se tuvieron en cuenta. En el siguiente recuadro observaremos como se plasmaron:

Temas de debate		Proyectos de 1856	Proyectos de 1860
Ciudadanía	<p><i>La ciudadanía es amplia y universal.</i> Deben conocer sus deberes y derechos. Se deben insertar por ejemplo a los artesanos y otros grupos.</p> <p><i>El sufragio universal es un distintivo de este ciudadano.</i> Debe construir una opinión e intervenir en los asuntos del Gobierno, tal como ocurrió en el periodo de 1855.</p> <p><i>La ciudadanía es amplia y universal.</i> Deben conocer sus deberes y derechos. Se deben insertar por ejemplo a los artesanos y otros grupos.</p> <p><i>El sufragio universal es un distintivo de este ciudadano.</i> Debe construir una opinión e intervenir en los asuntos del Gobierno, tal como ocurrió en el periodo de 1855.</p>	<p><i>La ciudadanía debe ser para un grupo que reúna los requisitos adecuados.</i> El proyecto de Bartolomé Herrera, por ejemplo busca incorporar la ciudadanía por falta de inteligencias o de probidad en el desempeño ciudadano; con ello excluye a las masas populares de la ciudadanía.</p>	
Garantías individuales	<p><i>Imposición del sistema democrático</i></p> <p>Se trata de imponer los ideales del liberalismo en consonancia con las ideas de la revolución francesa. Uno de los puntos defendidos por ejemplo es la abolición de la pena de muerte.</p>	<p>En cuanto a estas garantías como las libertades de la persona podía darse hasta cierto punto, ya que estas libertades no deben ir en contra de la religión y el orden de la República.</p>	
Organización del estado	<p><i>División de poderes.</i> La condición es que haya un Legislativo fuerte con capacidad de conducir al país, como el caso de Inglaterra. Incluso se pide una sola Cámara para el Congreso.</p> <p><i>Descentralización</i></p> <p>Nuevamente puesto en cuestión y se destaca la federalización del país, ya que de esta manera se forjaría una ciudadanía. Toribio Pacheco (1854) es el uno de los promotores. Para la constitución de 1856 se aprecia el restablecimiento de las juntas departamentales.</p>	<p><i>División de poderes con mayor poder al Senado.</i> La inteligencia sería la verdadera representante de la nación.</p> <p><i>Mayor poder presidencial</i></p> <p>Esta es mucho mayor que la de la constitución anterior. Castilla se había quejado por una presidencia controlada que se había planteado en la constitución anterior.</p> <p><i>Descentralización</i></p> <p><b>En cuanto a la descentralización surgen críticas por que los gobiernos locales le disputarían el poder al Ejecutivo.</b></p>	
Religión	<p><i>La tolerancia de cultos.</i> El debate se trasladó a la prensa y a la opinión, tanto los liberales como la los grupos de apoyo a la Iglesia presentaron sus argumentos.</p>	<p>La religión sigue siendo uno de los pilares del desarrollo del país. Las leyes que se elaboren deben amoldarse a la religión.</p>	

Fuente: Elaboración propia

De esta manera he querido presentar estos puntos que estuvieron presentes en los proyectos y debates constitucionales, tanto para elaborar las constituciones de 1856 y 1860. En el intermedio de ambos debates, el país se vio afectado por un nuevo conflicto civil, que protagonizó el caudillo Vivanco que desde Arequipa rechazaba las innovaciones de la Constitución de 1856, pero también sintetizaba el descontento de que las provincias sentían hacia el centralismo limeño, que tenía sus génesis por aquellos momentos, pues Lima se ve beneficiada por los recursos guaneros otorgándole la ansiada autonomía financiera, imponiendo el centralismo. La excusa para la sublevación la hallamos en la prensa:

«(...) la heroica ciudad de Moquegua siempre consecuente y constante en sus principios liberales, jamás consentirá que se perpetúe la corrupción y el despotismo a la par de los pueblos ilustrados y libres ha expresado con su voz de trueno que la inmoral y destructora dictadura del general Castilla, no pesará más en los patriotas y denodados moqueguanos [...] era llegado la hora de echar por tierra un Gobierno intruso y corruptor de la moral patriótica, militar y religiosa (...)» (*El Regenerador Extraordinario*, 6 noviembre 1856, p. 1).

De esta manera esta rebelión de alcances mediatos servirá para poder apreciar este ambiente de trifulcas que se tenía por aquellos años; además hay una serie de políticos, como la figura del señor Evaristo Gómez Sánchez, quien con el seudónimo de “EGS” busca presentar las inconstitucionalidades en que había caído el Gobierno de Castilla, por ejemplo, cita los casos de los señores Caravedo y de La Puente, como estos han sido violentamente arrestados, así se ha infringido el artículo 18 de la constitución<sup>45</sup>. También este diputado tendrá una participación destacada en el Congreso Extraordinario de 1858. La clase política e intelectual denunciara, a través de la prensa, las arbitrariedades y las constantes infracciones constitucionales que realiza el Gobierno provisional de Castilla, para poder poner coto a esta República Militarizada que ya suficientes gastos y desordenes ha traído al pueblo peruano, por ello se quería que estos proyectos coloquen las bases de la estabilidad republicana, además se están sentando las bases que están cuestionando seriamente el modelo de Castilla, la década de 1860 atestiguará como dicho modelo empieza a entrar en crisis.

---

<sup>45</sup> Artículo 18 de la constitución de 1856: «Nadie podrá ser arrestado sin mandato escrito de juez competente, o de la autoridad encargada del orden público, excepto por delito *in fraganti*; debiendo en todo caso ser puesto a disposición del juzgado que corresponda dentro de veinticuatro horas».

## Conclusiones

1. El desarrollo de la idea del republicanismo nos permite explicar mejor las veleidades políticas por la que pasó nuestro país durante los primeros años de vida independiente. No estábamos preparados para adoptar los valores políticos del liberalismo. La idea de republicanismo logra explicar mejor como se pudieron insertar en el país una serie de ideas como el gobierno representativo la concepción sobre la ciudadanía y la división de poderes. Todas estas propuestas se realizaron bajo la concepción de que ciertos sectores de la población haciendo uso de la razón podían ayudar en la construcción de la República. El país había experimentado, desde sus inicios, constantes desordenes políticos donde la mayoría de la población participaba de los conflictos, empujados por los caudillos de la época- Ello llevó al país a una situación de ingobernabilidad y para sortear los peligros del desborde social no se podía ampliar los derechos ciudadanos a los sectores populares, calificados como poco preparados para participar en la construcción de la República. Esta situación implicaba que el liberalismo clásico no se podía aplicar al país en las tres primeras décadas de vida republicana.
2. La importancia de tener constituciones calza perfecto dentro del desarrollo de la idea del republicanismo. De esta manera se tiene argumentos legales que permitieron ayudar a construir el edificio de las instituciones republicanas, desde el hecho de asegurar las libertades pero no en el sentido liberal. Asimismo se busca que las constituciones establezcan parámetros que puedan acabar con el constante caos que afecta al territorio y lograr establecer el orden mediante el establecimiento de pautas de comportamiento entre los gobiernos y los ciudadanos; de allí que los diferentes proyectos constitucionales presentados contengan propuestas sobre como ordenar la República peruana desde sus respectivas visiones, ya sean liberales o conservadoras.

3. Para poder hablar del liberalismo es necesario señalar que esta ideología se inserta con precisión, desde la segunda mitad del siglo XIX. En el Perú esta situación se desarrollara con el establecimiento de las constituciones de 1856 y la de 1860, las cuales guardan consonancia con las ideas liberales que se implementaron en toda Hispanoamérica. Se empiezan a consolidar las libertades civiles como la de prensa e imprenta, que fueron estímulos suficientes para hacer valer el programa liberal. Asimismo se aprecia como el Estado peruano se va organizando de una manera plausible. El liberalismo implicó que el Estado encuentre la eficiencia política y económica, es por ello que durante este periodo, recién se establecen códigos normativos, que van a permitir organizar de una manera conveniente la justicia, el comercio, la vida diaria, todo con la finalidad de buscar que el Estado sea más eficiente en la explotación del país. Este proyecto de modernización involucró también al inicio de la centralización del Estado que desde Lima empieza a organizar este proyecto moderno que busca incorporar a las regiones al proyecto nacional, será posible gracias al aumento de los recursos del Estado por el guano. Esta situación le permitió a Lima sujetar a las regiones y ocasionó el rechazo de las regiones al proyecto centralista, en particular del sur quienes enarbolaron las banderas de la insurrección durante la rebelión de Vivanco.
4. El liberalismo que va a desarrollarse en nuestro país, no fue monolítico, ya que hubieron variantes., El liberalismo clásico que comprendía las ideas de libertad, soberanía popular, respeto de los derechos civiles basados en la individualidad era el discurso que poseían la mayoría de nuestros liberales de la segunda generación como Pedro y José Gálvez, José Toribio Ureta, José Simeón Tejeda, Benjamín Cisneros, destacados intelectuales que pretendieron la implementación de reformas con la finalidad de modernizar el Estado. En ese camino pactaron acuerdos con los militares, en particular con la figura del general Ramón Castilla que se encargó de aprovechar el talento de aquellos individuos para realizar reformas. La otra variante del liberalismo fue el de tipo doctrinario, que basó sus ideas en la implementación del orden y el respeto a las tradiciones; además establece que la verdadera soberanía no es la popular, sino la de la inteligencia. Dicha propuesta es planteada por el obispo Bartolomé Herrera y Domingo Choquehuanca que pertenecían a los denominados grupos conservadores. Ello nos permite aproximarnos a establecer que estos grupos conservadores, pertenecen a

un liberalismo moderado; asimismo hubo muchos liberales que abrazaron los valores del orden conservador y de la soberanía de los más aptos, como se desprende de los proyectos constitucionales estudiados.

5. La construcción de la ciudadanía y el orden, que son los objetivos que persiguen los proyectos constitucionales de medianos del siglo XIX, privilegian la construcción de los elementos civiles, dado que estos permiten asegurar al ciudadano sus libertades y derechos individuales. Estas propuestas tienen armonía con los valores del republicanismo que buscan el bien común y se aprecia con medidas que fomentan la libertad de asociación, que permite que los distintos actores socioeconómicos busquen proteger sus intereses, en la nueva era liberal, tal es el caso de los artesanos. Lo interesante en apreciar las constituciones y los proyectos constitucionales de los diferentes pensadores, es que jamás abordaron la democratización de los espacios políticos, es decir la participación de los ciudadanos en la política debía ser restringida, es decir solo los que están imbuidos por la razón. Ello los haría merecedores de participar en determinados niveles de la política, como las elecciones para investir la soberanía a nuestras autoridades.
6. El castillismo y su proyecto político influenciaron en el desarrollo político del país entre 1840 a 1860. El eje central del programa fue el pragmático general Ramón Castilla que articuló alianzas con los distintos grupos políticos, según resulte su utilidad. Pero también se acercó a los sectores populares ( indios, negros y artesanos) con el objetivo de contar con el respaldo político de la plebe; de esta manera, pudo sortear exitosamente las distintas posiciones políticas en momentos críticos a. Por ejemplo, durante la guerra civil de 1854, se ganó el respaldo de dichos sectores con medidas como la eliminación del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. Ello le facilitó sortear con éxito la rebelión de Vivanco en 1856, el cierre de la Convención Nacional y la puesta en suspensión de la Constitución de 1856.
7. El papel de Arequipa en el desarrollo del liberalismo en el Perú fue importante, ya que desde sus planteamientos del libre comercio, que ya lo había desarrollado desde los inicios de la República le permitió defender posturas liberales ante el

cerrado proyecto nacionalista de Lima y la costa norte que tenían una visión más proteccionista de la economía nacional. En el plano religioso Arequipa era una ciudad conservadora y defenderá las posturas religiosas ante el ataque regalista que se desarrolla en Lima. En el plano político, es importante apreciar como Arequipa se convierte en una ciudad, tanto la plebe como la élite y emplea un discurso de respeto a la institucionalidad. Ello se debía a que el arequipeño estaba acostumbrado a litigar en los tribunales de justicia y los abogados cumplieron un papel destacado. Una serie de personajes salidos de Arequipa influenciaron en el desarrollo del liberalismo en el Perú como José María Quimper, José Simeón Tejeda, José Gregorio Paz Soldán, quienes son destacados juristas y promoverán el discurso liberal clásico, teñido con la modernidad tradicionalista.

8. Los diversos proyectos constitucionales que se presentaron para elaborar la Constitución de 1856 marcaron un punto de inflexión en la consolidación del liberalismo en el país. Todos aquellos personajes que participaron en la elaboración de aquellas normas aspiraron fortalecer y otorgarle al Estado las suficientes normas legales y jurídicas para crear un sistema de orden que conduzca al país hacia el progreso. No hay que olvidar que el impulso de los recursos guaneros motivaron a ciertos sectores de la clase dirigente a encontrar una explotación racional del Estado. Cabe agregar que las normas que se dieron en 1856 apuntaron a fomentar un individualismo que impulse el progreso de la sociedad tradicional y el desarrollo de relaciones pertinentes entre los poderes del Estado, fundamentalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, señalando a este último como el actor político sobre el cual recae la legitimidad política. Así se quería demoler el edificio de la república militarizada y corporativa que tanto había limitado el desarrollo del progreso del país.
9. Durante los inicios de la Convención Nacional de 1855 el debate se vio enriquecido por la difusión de las ideas liberales y conservadores, cuyo escenario inicial fue la prensa y los escritos que circularon. El liberalismo triunfante posibilitó finalmente el establecimiento de libertades civiles como el de prensa e imprenta, y opinión. Ello fomentó asentar una constitución que planteaba el orden y el progreso, el establecimiento del sufragio y la división de los poderes; de esta manera, se va a encontrar a diferentes sectores de la sociedad urbana que

a través de la prensa brindaban sus puntos de vista con respecto a la situación del país.

10. El posterior debate que se realizó luego de la caída de la Convención Nacional de 1855 y del ocaso de la Constitución de 1856, a pesar que iban dirigidas a deslegitimar la obra política de los liberales, terminó dando una serie de argumentos a los denominados sectores conservadores, para poder mantener las reformas, como por ejemplo, mantener la supresión de los privilegios que gozaba la Iglesia. La idea del laicismo empieza a inocularse en nuestra sociedad, pero no fue tan radical como en otros países, pero aun así tenía que realizarse para establecer la racionalidad del Estado. Esta crítica a los liberales se debía a que habían implementado reformas que golpearon a los más importantes sectores de la república corporativa, como la Iglesia y la milicia, quienes enfilaron sus críticas para romper este equilibrio corporativo. Además, la plebe no apoyaron a los grupos liberales a pesar de haber impulsados ellos la abolición de sus cadenas. Tanto los indígenas como los negros habían sido más influenciados por la figura de Castilla que por los políticos liberales, por ello que se plegaron al él. Otra razón que restó popularidad a La Convención y a la Constitución de 1856 es aquella acusación que la acusaba de desligarse con la religión católica, acusación enarbolada por Arequipa y las provincias que se rebelaron apoyando a Vivanco; por ello, cuando se realizó el golpe del 2 de noviembre de 1857 del coronel Pablo Arguedas contra La Convención, esta no gozaba del respaldo popular. Dichas situaciones no significaron que el liberalismo este acabado dado que estuvieron presentes en el Congreso Extraordinario de 1858 y en el Congreso de 1860, y que les permitió mantener el programa de las reformas.
11. El orden institucional es algo que constantemente se incide en los proyectos constitucionales por ello era necesario delimitar bien los espacios de los poderes del Estado, especialmente los del Ejecutivo y Legislativo. En los proyectos que se difundieron para la Constitución de 1856 se presentaron las fortalezas y la importancia del Legislativo ya que en el pueblo delega su soberanía, por eso en ellos se encuentran a los representantes de los sectores racionales del país; es allí cuando se inserta la idea de la ciudadanía que se quiere tener. Para acceder a ella era necesario tener un grado de instrucción, situación que le permitirá poder tomar



decisiones adecuadas para el destino del país. En cuanto a la situación del Ejecutivo, se plantea que su función es hacer cumplir las normas legales que promueven los legisladores. Sus atribuciones no deberían chocar con las del Legislativo. Por ello, en la Constitución de 1856 se establece un control sobre la autoridad presidencial y que fue criticado en los escritos que circularon después de la caída de la Constitución de 1856; en aquellos se cuestiona la inferioridad del Poder Ejecutivo ante el Legislativo, hecho que en la Constitución de 1860 hará eco de aquellos reclamos, ya que le otorgó un mayor poder a la autoridad presidencial.

12. Otro de los temas que abordaron los proyectos constitucionales, es la descentralización del país, promovido por los liberales y los grupos representativos de las provincias, y que fue establecida en la Constitución de 1856. Ello originó a la fundación de las Juntas Departamentales y la ampliación de las funciones de las municipalidades para impulsar el desarrollo de gobiernos locales y el fortalecimiento del Gobierno central. Los escritos anónimos que circularon después del ocaso de la Convención Nacional en 1857, generalmente de tendencia conservadora, y que fueron lanzados desde Lima, apuntaron a criticar la descentralización porque consideraron que llevaba a la ingobernabilidad y que las autoridades locales y departamentales le disputarían la autoridad al Gobierno central, y de esta forma los conflictos se agudizarían y no podría darse soluciones inmediatas a las poblaciones del país. Estos planteamientos centralistas son parte de la construcción del Estado moderno que busca que las provincias dejen de ser focos de tensión y conflictos, por ello había que tenerlos a control de Lima, y por ello se empezó a enviar a funcionarios y autoridades para que se cumplieran los objetivos de la búsqueda del orden y de la civilización.
13. Los proyectos que se presentaron para implementar la Constitución de 1860 estuvieron fuertemente influenciados por el conservadurismo. Figuras de esta corriente como Bartolomé Herrera, Felipe Pardo apuntaban a borrar los excesos del liberalismo radical de la Constitución de 1856. También en ellos veremos como sectores eclesiásticos, los denominados ultramontanos intentaron defender la exclusividad de la religión católica en el país, oponiéndose firmemente a la posibilidad de la tolerancia religiosa en el país; además, proyectaron mantener las

prerrogativas corporativas de la Iglesia, es decir mantener sus fueros, el cobro de sus diezmos, primicias y derechos parroquiales, es decir seguir con los privilegios que siempre habían contado. A pesar de ello, dichos privilegios fueron abolidos en la Constitución de 1860. Los sectores ultramontanos intentaron la firma de un concordato entre la Iglesia Católica y el Estado peruano para poder resistir los embates del liberalismo regalista, escenario no se logró cristalizar y que conllevó a que las autoridades eclesiásticas no juramentaron la Constitución de 1860, pero consiguieron mantener en su discurso sobre la necesidad de la religión católica para poder salvaguardar el orden y los valores de la República peruana.

## Lista de referencias

### Fuentes primarias

Sala de manuscritos y libros. Colección manuscritos.  
Fondo reservado UNMSM. Colección de folletos.

### Fuentes primarias impresas

Agripa. (1854). *El Perú en 1834 y 1854*. Lima, Imprenta de Eusebio Aranda.

Anónimo. (1855a). *El Clero Regular y sus bienes ante la ley política y civil*. Arequipa, Imprenta de Francisco Ibáñez y Hermanos.

Anónimo. (1855b). *Exposición que el prefecto de Arequipa durante la Revolución del Perú en 1854 hace a la nación y el gobierno en elogio del patriótico comportamiento de su departamento y en representación de sus necesidades*. Arequipa, Imprenta libre de Mariano Nicolás Madueño.

Anónimo. (1855c). *Discursos pronunciados en la Convención Nacional sobre la Cuestión Religiosa en las sesiones de los días 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de octubre*. Lima: Tipografía del Heraldo de Lima.

Anónimo. (1858). *Observaciones sobre la constitución de 1856 necesidad de su reforma*. Lima. Imprenta de Manuel Langori.

Anónimo. (1860a). *Breves reflexiones sobre el punto capital que debe abarcar la reforma de la constitución de 1856*. Tacna, Imprenta de Andrés Freire.

Anónimo. (1860b). *El sistema representativo cuestión del día*. Lima, Establecimiento tipográfico de Aurelio Alfaro.

Anónimo. (1860c). *Las constituciones del Perú y la situación actual de esta República*. Lima, Imprenta de José María Masías.

Anónimo. (1860d). *Opúsculo sobre la necesidad de reformar la Carta fundamental de la República, dada por la Convención Nacional*. Cuzco, Imprenta republicana por Mariano Campos.

Anónimo. (1861). Siga la disolución de la Convención, porque ella es justa. En: *Papeles varios o sea colección de folletos entre religión, política y literatura de José Toribio Polo*. Lima, Tomo XVII.

Casos, Fernando. (1854). *Para la historia del Perú: la revolución del 54*. Cuzco, Imprenta Republicana.

Capítulo Metropolitano de Lima. (1855). *Exposición del Capítulo Metropolitano de Lima a la Convención Nacional sobre la exclusión de los falsos cultos y sobre los derechos de propiedad de la Iglesia*. Lima, Imprenta por Francisco Solís.

Convención Nacional. (1855). *Discursos pronunciados en la Convención Nacional sobre la Cuestión Religiosa en las sesiones de los días 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de octubre*. Lima, Tipografía del Heraldo de Lima.

Del Portillo, Julio Manuel. (1855). *Ensayo sobre los principios de Tolerancia sentados por D. Julio Manuel del Portillo en su programa publicado en el 13 del presente mes*. Lima: Imprenta de J. M. Masías.

Dancuart , Pedro Emilio. (1926). *Crónicas Parlamentarias del Perú. Leyes resoluciones y decretos expedidos por la Convención nacional de 1855*. Lima: Imprenta Americana Plazuela del Teatro.

Echenique, José Rufino. (1952). *Memorias para la historia del Perú 1808 – 1878* (2 vols.). Lima: Ed. Huascarán.

Escudero, Ignacio. (1858). *Exposición que hace el diputado Ignacio Escudero, ante la nación y la provincia de Piura de sus tareas parlamentarias en la Convención Nacional de 1855*. Piura: Imprenta de Miguel Vásquez.

Espinoza, Juan. (1855). *Diccionario para el pueblo: Republicano democrático, moral, político y filosófico*. Lima: Imprenta del Pueblo.

Gadea, Tomás. (1855). *Causas de la revolución de 1854*. Lima: Imprenta de Félix Moreno.

Gálvez, José. (1858). *La Convención Nacional y la Constitución de 1856*. Lima: Imprenta de José Félix Moreno.

Herrera, Bartolomé. (1860). *Proyecto de reforma constitucional*. Lima: Imprenta de José Masías.

Lapuerta y Gonzales, D. (1861) *Sr. D. Domingo Lapuerta y Gonzales* (Folletos). Lima.

Masías, Felipe. (1855). *Breves nociones de la ciencia constitucional*. Lima: imprenta de J. M. Masías.

Mesa, Pio. (1860). Manifiesto del representante por la provincia de la Convención Pio Mesa. Lima: Imprenta del Comercio José M. Monterola.

Moncayo, D. P. (1860). *Refutación al folleto publicado por D. P. Moncayo con el título de juicio crítico sobre el general Castilla*. Lima: Impreso por J. Enrique del Campo, 1860.

Nájera, José Miguel. (1855). *Cartilla del pueblo sobre principios democráticos*. Lima: Imprenta de Eusebio Aranda.

Químper, José María. (1854). *Instrucción política y reformas para el Pueblo. Obra dedicada a las masas del Perú*. Arequipa: Imprenta de Francisco Ibáñez y hermanos.

Silva Santisteban, José. (1874). *Curso de derecho constitucional*. París: Librería de A. Bouret e hijo.

Ulloa, José Casimiro. (1854). *El Perú en 1853. Un año de su historia contemporánea*. París: Imprenta de Maulde y Renov.

Valdivia, Juan Gualberto. (1874). *Memorias sobre la revoluciones de Arequipa desde 1834 hasta 1866*. Lima: Opinión Nacional.

## **Periódicos**

El Comercio: 1854, 1855, 1857, 1858, 1859.

El Católico: periódico religioso, filosófico, histórico y literario. Lima, 1855, 1856, 1857.

El Católico Cristiano: Periódico patriótico, americano y humanitario. Lima, 1855.

El Constitucional: diario político y literario. Lima, 1858.

El Heraldo de Lima, 1854, 1855.

El Liberal: periódico popular, Ayacucho, 1857.

El Negro: periódico climatérico y voluntarioso. Lima, 1858.

El Peruano, 1855, 1856, 1857 y 1858.

El Progreso Católico: periódico religioso, popular, 1860

El Regenerador Extraordinario, Moquegua, 1856, 1857.

La Bandera Nacional, 1858.

La Colmena: periódico científico y literario, 1857.

La Juventud: periódico semanal, Tacna, 1857.

La Revolución del Perú en 1854.

La Regeneración: Periódico oficial, Arequipa, 1856.

### **Fuentes secundarias:**

Aguilar Rivera, José Antonio. (2001). *El manto liberal: los poderes de emergencia en México 1821 – 1876*. México D.F.: UNAM.

-----, (2011). Tres momentos liberales en México (1820-1890). En Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbo (Ed.) *Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX*. México: FCE.

Aljovín de Losada, Cristóbal. (2000). *Caudillos y Constituciones Perú: 1821 – 1845*. Lima, PUCP – FCE

-----, (2003). La promesa republicana en el Perú. En “*La independencia en los países Andinos: Nuevas perspectivas. Memorias del Primer módulo itinerante de la cátedra de Historia de Iberoamérica Quito, Diciembre 9 al 12 de 2003*”. Universidad Andina Simón Bolívar.

-----, (2005). Sufragio y participación política: Perú 1808 – 1896. En Aljovín de Losada y Sinesio López (Ed.) *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: IEP. pp. 19-74.

-----, (2007)¿Una ruptura con el pasado? Santa Cruz y la Constitución. En Aljovín de Losada, Cristóbal y Nils Jacobsen (Ed.) *Cultura Política en los andes (1750 – 1950)*. Lima: Fondo Editorial UNMSM, IFEA.

------. (2010). Entre la unidad y la pluralidad. El concepto de partido-facción en el Perú 1770-1870. Lima: Boletín IFEA (63 – 84), 2010.

Arendt, Hannah. (1974). *Condición del hombre moderno*. Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A.

Armas Asin, Fernando. (1998). *Liberales, protestantes y masones, modernidad y tolerancia religiosa*. Lima: PUCP/CBC.

------. (2006). *La invención del patrimonio católico. Modernidad e identidad en el espacio religioso peruano (1820-1950)*. Lima: Asamblea Nacional de Rectores.

Ballón Lozada, Héctor. (1986). *Las ideas sociopolíticas en Arequipa 1540 – 1900*. Arequipa: PUBLIUNSA.

Barragán, Rosa. (2007). Las fronteras del dominio estatal: desigualdad, fragilidad de los pactos y límites de su legalidad y legitimidad. . En Aljovín de Losada, Cristóbal y Nils Jacobsen (Ed.) *Cultura Política en los andes (1750 – 1950)*. Lima: UNMSM/IFEA.

Barrón, Luis. (2002). La tradición republicana y el nacimiento del liberalismo en Hispanoamérica después de la independencia. Bolívar Lucas Alamán y el poder conservador. En José Antonio Aguilar y Rafael Rojas (Ed.) *El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política*. México: FCE, CIDE.

Basadre, Jorge. (2005). *Historia de la República*. Lima, vol.4. 2005.

------. (1994). *Perú: problema y posibilidad. Ensayo de una síntesis de la evolución histórica del Perú con algunas consideraciones cuarentaisiete años después*. Lima, Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, 4ta edición.

Bazán, Mario F. *Comentario en torno a Castilla*. Lima. Talleres gráficos P. L. Villanueva.

Bonilla, Heraclio. (1980). *Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la Guerra*. Lima: IEP.

Brading, David. (2004). *Mito y profecía en la historia de México*. México: FCE.

Chambers, Sarah. (2003). *De Súbditos a ciudadanos: Honor, género y política en Arequipa, 1780 – 1854*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Chanamé, Raúl. (2014). *La República inconclusa*. Lima: Derrama Magisterial.

Chartier, Roger. (1994). *Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna* (2da ed.). Madrid: Alianza Editorial.

Contreras, Carlos y Marcos Cueto. (2004). *Historia del Perú Contemporáneo* (3era ed.). Lima: IEP.

Contreras, Carlos y Marina Zuloaga. (2014). *Historia mínima del Perú*. México, D.F: El Colegio de México.

Contreras, Carlos. (2000). *Centralismo y descentralismo en la historia del Perú independiente*. Osaka: JCAS/IEP.

Cotler, Julio. *Clases, Estado y Nación*. Lima: IEP. 1978.

De Tragzenies, Fernando. (1992). *La idea del derecho en el Perú republicano del siglo XIX* (2da edición). Lima: PUCP. 1992.

Del Águila, Alicia. (2013). *La ciudadanía corporativa. Política, constituciones y sufragio en el Perú (1821-1896)*. Lima: IEP.

Demelas, Marie-Danielle. (2003). *La invención política: Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX*. Lima: IFEA/IEP.

De Ravago, Enrique. (2007). *Antecedentes y sucesos en la fundación de la República Peruana (pensadores, doctrinas y textos históricos-jurídicos)*. Lima. Edición Privada. Tomo 2.

Espinoza, Antonio. (2010). Las instituciones al poder: El aporte de Bartolomé Herrera. En Fernán Altuve-Febres (comp.) *Bartolomé Herrera y su tiempo*. Lima, Editorial Quinto Reino, pp. 249 – 265.

Ferrero, Raúl. (2003). *El liberalismo peruano. Contribución a una historia de las ideas*. Lima, UNMSM/ULima.

Flores Galindo, Alberto. (1994). *Buscando un inca*. Lima.Horizonte. 1994.

Forment, Carlos. (1997). La sociedad civil en el Perú del siglo XIX: democrática o disciplinaria. En Hilda Sábato (Coord.) *Ciudadanía política y formación de las naciones perspectivas históricas de América latina*. México: F.C.E. y Colegio de México. pp. 201 – 230.

Forment, Carlos. (2012). *La formación de la sociedad civil y la democracia en el Perú*. Lima. PUCP.

Gálvez, José Francisco. (2010). Herrera y los hermanos Gálvez. En Fernán Altuve-Febres (comp.) *Bartolomé Herrera y su tiempo*. Lima: Editorial Quinto Reino, pp. 237 – 248.

García-Bryce Weinstein, Iñigo (2008). *República con ciudadanos: los artesanos de Lima, 1821 – 1879*. Lima. IEP.

García Jordán, Pilar. (1991) *Iglesia y poder en el Perú contemporáneo*. Cuzco: CBC.



Garavito Amezaga, Hugo. (1986). *El santo hereje Mariano Amezaga y el radicalismo anticlerical*. Lima: Ediciones El Virrey.

Garibaldi, Rosa. (2003). *La política exterior del Perú en la era de Ramón Castilla defensa hemisférica y defensa de la jurisdicción nacional*. Lima: Fondo editorial Fundación Academia Diplomática del Perú.

Gargurevich Regal, (1991). Juan. *Historia de la prensa peruana (1594-1990)*. Lima: La voz ediciones.

Goldman, Noemi. (2009). Legitimidad y deliberación: el concepto de opinión publica en Iberoamérica, 1750 – 1850. En Javier Fernández Sebastián (Director).

*Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750 – 1850*. Iberconceptos. Madrid, Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Centro Políticos y Constitucionales.

Gootenberg, Paul. (1998) *Imaginar el desarrollo. Las ideas económicas en el Perú postcolonial*. Lima: IEP.

\_\_\_\_\_. (1997). Caudillos y comerciantes. La formación económica del Estado Peruano 1820 – 1860. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

Habermas, Jurgen. *Historia y critica de la opinión pública*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A. 1982.

Ibérico Ruiz, Rolando. (2013). *La Republica Católica Dividida: ultramontanos y liberales regalistas, Lima 1855 – 1860*. (Tesis para optar el título de licenciado en Historia). PUCP.

Jamanca Vega, Marco Antonio. (2015). *La Constitución inacabada. Ideas y modelos constitucionales en el momento fundacional del Perú primera mitad del siglo XIX*. Lima: UNMSM.

Jiyagón, José Carlos. (2007) La Convención Nacional y la Constitución de 1856. El ataque conservador a los liberales. *Uku Pacha Revista de investigaciones históricas*, 11, pp.119 – 124.

\_\_\_\_\_. (2014). *El papel de la prensa y la opinión publica en la confrontación ideológica en el contexto de la Convención Nacional (1855 – 1857)*. (Tesis para optar el título de licenciado en Historia). UNMSM.

\_\_\_\_\_. (2015). «La función de la opinión pública al inicio de la Convención Nacional de 1855». *En Actas del 2do Congreso de historia y cultura*. Lima: Seminario Historia Rural Andina – UNMSM, pp. 49 – 79.

\_\_\_\_\_. (2015). «San Marcos y la reforma universitaria de mediados del siglo XIX. De la decadencia de la independencia a la modernidad

liberal». En *Hacia el Bicentenario de la independencia (1821 – 2021) V Congreso*. Lima: UNMSM VRI y UNMSM Fondo Editorial, pp. 325 – 340.

Klaiber S.J. Jeffrey. (1996). *La Iglesia en el Perú*. Lima, PUCP Fondo Editorial.  
Loayza, Alex. (2005). El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849 – 1851. En Aljovín de Losada, Cristóbal y Sinesio López (Ed.) *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: IEP, pp. 395 – 424.

López, Sinesio. (1997) *Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: IDS/Instituto de Diálogo y propuesta.

Majluf, Natalia. (1994). *Escultura y espacio público: 1850 – 1879*. Lima, IEP, Documento de trabajo, No 67, serie Historia del Arte N.º 2.

Mesia Ramírez, Carlos. (2012). El pensamiento constitucional y la idea de constitución en el Perú del siglo XIX. En Revista PUCP. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3253/3090>.

Méndez, Cecilia. (2005). Tradiciones liberales en los andes o la ciudadanía por las armas: campesinos y militares en la formación del Estado Peruano. En “*La mirada esquiwa: reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX*” por Marta Irurozqui Victoriano. Madrid: Consejo Superior de investigaciones.

Mc Evoy, Carmen y José Luis Renique. (ed.)(2010). *Soldados de la Republica. Guerra, correspondencia y memoria en el Perú (1830-1844)*. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú e Instituto Riva-Agüero, Tomo I.

Mc Evoy, Carmen. (2004) *La huella republicana en el Perú: Manuel Pardo Escritos fundamentales*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

----- (2003). De la republica utópica a la república `practica: intelectuales y artesanos en la forja de una cultura política en el área andina. En “*Historia de América Andina. Volumen 5: Creación de las Repúblicas y formación de la Nación*”, Juan Maiguashca Editor. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, pp., 347-387.

----- (1997). *La utopía republicana. Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919)*. Lima: PUCP.

Milla Batres, Carlos. (1986). *Diccionario histórico y biográfico del Perú*. Lima: Editorial Milla Batres.

Monsalve Zanatti, Martin. (2009). Opinión pública, sociedad civil y la cuestión indígena: La sociedad amiga de los indios.  
[www.ncsu.edu/project/acontracorriente](http://www.ncsu.edu/project/acontracorriente) vol.7, No1, f pp., 211-245.

- Orrego Penagos, Juan Luis. Un proyecto liberal en el Perú del siglo XIX. Recuperado de [http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23134/1/orrego\\_juan.pdf](http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23134/1/orrego_juan.pdf)
- Orrego Penagos, Juan Luis. (2003). Liberales y conservadores en el siglo XIX: Un viejo debate. Barranquilla, Historia Caribe Universidad del Atlántico. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=93700806>
- Palti, Elías. (2007). *El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado*. Buenos Aires. Siglo XXI Editores: Buenos Aires, Argentina.
- Peloso, Vicent. (2001). *Reformas electorales liberales y el voto popular durante la era del guano en el Perú*. Lima, IEP (documentos de trabajo).
- Pinto Vallejos, Julio. (2016). La construcción social del Estado en el Perú: el régimen de Castilla y el mundo popular, 1845 – 1856. En *Historia*, vol. II, pp. 547 – 578. Recuperado de [http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-71942016000200008&script=sci\\_abstract](http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-71942016000200008&script=sci_abstract)
- Planas, Pedro. (1998). *La descentralización en el Perú republicano (1821-1998)*. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Price, Vincent. *La opinión pública: esfera pública y comunicación*. Barcelona: Paidós.
- Quiroz Chueca, Francisco. (2007). *Historia del Callao: Del puerto de Lima a provincia constitucional*. Lima: Gobierno Regional del Callao y Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos.
- Ragas, José. (2005). La distorsión de la voluntad: corrupción y sufragio en el Perú (1849-1851). En “*La mirada esquiua: reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX*” por Marta Irurozqui Victoriano. Madrid: Consejo Superior de investigaciones.
- Ramos Núñez, Carlos Augusto. (1993). *Toribio Pacheco. Jurista peruano del siglo XIX*. Lima: PUCP.
- Rey de Castro, Alejandro. (2010). *Republicanism, nación y democracia. La modernidad política en el Perú, 1821 – 1846*. Lima: UNMSM.
- Rosas Lauro, Claudia. (2006). *Del Trono a la guillotina: El impacto de la revolución francesa en el Perú*. Lima: IFEA/ PUCP.
- Sobrevilla, Natalia. (2005). «El proyecto liberal y la Convención Nacional de 1855». En: *La experiencia burguesa en el Perú*. Madrid: Carmen Mc Evoy. Pp. 223 - 243

-----, (2005). «Conflicto regional, guano y poder». En *Más allá de la dominación y la resistencia estudios de historia peruana, siglos XVI – XX*. Lima: IEP, Paulo Drinot y Leo Garofalo. Pp. 181-214.

-----, (2009). Batallas por la legitimidad: Constitucionalismo y conflicto político en el Perú del siglo XIX (1812 – 1860). En *Revista de Indias*, vol. *LXIX*. NUM. 246. pp. 101 – 128.

Torres Arancivia, Eduardo. (2006). *Buscando un rey. El autoritarismo en la historia del Perú siglos XVI-XXI*. Lima: PUCP.

Ugarte del Pino, Juan Vicente. (1978). *Historia de las Constituciones del Perú*. Lima: Editorial Andina.

Ulloa, Luis. (1911). *Algo de historia, las cuestiones territoriales con Ecuador y Colombia y la falsedad del protocolo Pedesmonte-Mosquera*. Lima: Imprenta de la industria.

Whipple, Pablo. (2013). *La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. Jerarquías sociales, prensa y sistema judicial durante el siglo XIX*. Lima: IEP: Centro de investigaciones Diego Barrios Arana.

Yepes del Castillo. (1972). *Perú 1820 – 1920: Un siglo de desarrollo capitalista*. Lima: IEP.